

INSERCCION SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO FONTELA

Los GCEE y las ETD/I. Su participación en la deuda externa privada, la promoción industrial, la capitalización de la deuda externa y las exportaciones industriales. Participación de los GCEE y las ETD/I en la deuda externa privada, diciembre 1983

(en miles de dólares)

GCEE

Nombre del GCEE y de sus empresas	Monto de la deuda
-----------------------------------	-------------------

1. Celulosa Argentina

1. Celulosa Argentina	836.243
2. Alto Paraná	424.835
3. Celulosa Puerto Piray	156.433
4. Cía. Fabril Financiera	51.479
5. Electrocelor	19.750
6. Witcel	7.931
7. Cía. Victoria	4.586
8. Papelera del Plata	2.216
	<u>1.503.473</u>

2. Pérez Companie

1. Banco Río	520.404
2. Cía. Naviera Pérez Companie	210.569
3. SADE	124.300
4. Papelera Pérez Companie	26.331
5. Aguila Saint	9.917

Nombre del GCEE y de sus empresas	Monto de la deuda
6. Pesquera San Carlos	6.523
7. Electromecánica Argentina (EMA) ..	3.546
8. Pesquera Santa Margarita	3.348
9. Inversora Patagónica	3.000
10. Alto Palermo	1.500
11. SADE Soc. Americana de Elect. S.A.	200
	<u>909.696</u>

3. Acindar

1. Acindar	649.149
2. Conarco	2.410
3. Acinplast	634
	<u>652.193</u>

4. BRIDAS

1. BRIDAS S.A.P.I.C.	238.290
2. Papel del Tucumán	176.067
3. Cía. Perforaciones Río Colorado ..	118.930
4. BRIDAS	45.710
5. Celulosa Jujuy	20.531
6. Banco Palmares	7.536
7. Téono Bridas	4.839
8. Harengus	3.087
9. Banco del Interior y Buenos Aires	2.507
10. NUCLEAR	1.027

Nombre del GGEE y de sus empresas	Monto de la deuda	Nombre del GGEE y de sus empresas	Monto de la deuda
11. Banco del Interior y Buenos Aires	380	5. Astramar	5.705
12. Argatom	216	6. Carboclor	1.603
	619.190	7. Neroli	1.261
		8. Geotécnica	918
5. a) Alpargatas			222.545
1. Alpargatas	227.438	9. Astilleros Alianza	
2. Banco Francés del R. de la Plata	188.806	1. Astilleros Alianza	95.721
3. Alpesca	31.221	2. Alianza Nav. Argentina	81.943
4. S. A. Azucarera Argentina	18.221	3. Alianza Petrolera	11.909
5. Tejidos Argentinos del N. O. . . .	9.176		189.573
6. Petrolar	5.691	10. Iva	
7. Tejidos Argentinos	2.956	1. Banco Mercantil Argentino	135.776
8. Banco Francés del R. de la Plata	447	2. Banco Mercantil Argentino	31.359
	478.956	3. Iva	8.688
b) Roberts		4. Citrex	12.062
1. Banco Roberts	88.429		187.885
2. Caning	2.183	11. Loma Negra	
3. Banco Roberts	784	1. Loma Negra	61.758
4. Leng Roberts	217	2. COCyF	17.200
	91.613	3. Canadera y Agrícola del Litoral . .	8.971
	570.569	4. Estancias Unidas del Sur	6.500
6. Garovaglio y Zorraquin		5. Estancias y Cabañas Don Alfredo	1.000
1. Banco Comercial del Norte	134.309		95.429
2. Banco Español	91.580	12. Massuh	
3. Banco Español	42.648	1. Massuh	79.677
4. Ipako	19.223	2. C. Dellapenna	11.832
5. S. A. Garovaglio y Zorraquin . . .	13.803		91.509
6. Crédito Español del Río de la Plata	13.503	13. Bunge y Born	
7. Cerro Castillo	11.032	1. Grafa	23.040
8. Saifar	9.867	2. Bunge y Born	11.383
9. Banco Comercial del Norte	2.912	3. S. A. Alba	9.689
10. Inexport	136	4. Molinos Río de la Plata	9.624
11. Agapol	102	5. Cía. Química	7.119
	339.115	6. Centenera	6.886
7. Fate		7. Cerámica Neuquén	6.573
1. Astra A. Evangelista	102.646	8. Comega	2.831
2. Fate	35.443	9. Frumar	1.425
3. Kicsa	25.308	10. Grañalar	651
	223.562	11. Vivoratá	406
8. Astra		12. Estanar	150
1. Astra A. Evangelista	105.646		79.782
2. Astra Cia. Arg. de Petróleo	58.883	14. Bagley	
3. Copetro	33.824	1. Alimentaria San Luis	65.149
4. Astrafor	17.700		

Nombre del GGEE y de sus empresas	Monto de la deuda
15. Corcemar	
1. Corcemar	48.316
2. S.A. Cantera El Sauce	4.770
	<u>53.086</u>
16. Atanor	
1. Atanor S. A. Mixta	35.594
2. Petroquímica Río Tercero	12.518
	<u>48.112</u>
17. San Martín del Tabacal	
1. Ing. San Martín del Tabacal	35.606
2. Industrias de Maíz (Imasa)	11.138
3. Abra Grande	300
	<u>47.044</u>
18. Agea-Clarín-Magnetto	
1. Papel Prensa	46.874
19. Arcor	
1. Arcor	41.027
2. Misky	406
	<u>41.433</u>
20. INTA	
1. Uzal	37.008
21. Ledesma	
1. Ledesma	24.252
2. Glucovil	6.265
	<u>30.517</u>
22. F. C. C. N.	
1. Canteras Cerro Negro	12.290
23. Huancayo	
1. Comalfri	11.460
24. Schcolnik	
1. Schcolnik	11.139
25. Aceros Bragado	
1. La Cantábrica-Aceros Bragado ...	9.618
26. Laboratorio Bagó	
1. Laboratorio Bagó	9.597
Total:	<u>6.107.794</u>

ETD/1	
Nombre del ETD/II y de sus empresas	Monto de la deuda
1. Techint	
1. Dálmine Siderca	18.009
2. Propulsora Siderúrgica	80.733
3. Cañadón Piedras	3.615
4. Techint	20.440
5. Es. Catalinas	10.039
6. Santa María	8.049
7. Cometarsa	5.971
8. Losa	3.634
9. Comasider	3.445
10. Chapas y Perfiles	500
	<u>352.714</u>
2. Fiat	
1. Sevel	1.124.142
2. Fiat Concord	22.538
3. Fiat Diesel	12.275
4. Fiat Tractores	10.932
5. Fiat Vehículos Industriales	3.497
6. Fiat Materfer	2.496
7. Est. Mecánicos Jeppener	1.353
8. Facetyt	538
9. Fiat Cat	327
	<u>177.875</u>
3. Macri	
1. Sideco Americana	60.751
2. Pluspetrol	39.868
3. Socma	27.613
4. Dragados y Obras Portuarias	16.444
5. R.S.Z. y A. Producciones	12.143
6. Iecsa	9.657
7. Manliba	3.902
	<u>170.578</u>
4. Pirelli	
1. Industrias Pirelli	56.074
2. Pirelli Platense	46.355
3. Pirelli Neumáticos	24.013
4. Alámbrica	1.312
	<u>127.754</u>
5. Ford	
1. Ford Motors	80.420
2. Philco Argentina	8.669
3. Trausax	3.420
4. Philco Ushuaia	970
	<u>93.479</u>
6. Exxon	
1. Esso Argentina	54.508
2. Químicos del Plata	10.230
	<u>64.738</u>
7. Cía. General de Combustibles	
1. Banco Arfina	25.287
2. Dest. Arg. de Petróleo (DAFSA) ..	9.180

Nombre del ETD/II y de sus empresas	Monto de la deuda	Nombre del ETD/II y de sus empresas	Monto de la deuda
3. Durlock	6.021	13. Shell	
4. Cia. General de Combustibles	3.566	1. Shell CAPSA	35.412
5. Cia. Suiza de Inversiones	3.420	14. Duperial	
6. Soc. Comercial del Plata	3.012	1. Duperial	26.822
7. Soc. Comercial del Plata	1.690	2. Strauss	1.553
8. Cia. Suiza de Construcciones	1.128	3. Orbea	103
9. Agar Cross	949		28.478
10. Brown Boveri Sudamericana	742	15. Bayer	
11. Parafina del Plata	208	1. Bayer Argentina	19.909
	55.113	2. Agfa Cevaert	8.107
3. Renault			28.016
1. Renault Argentina	46.248	16. Lepetit-Dow	
2. Hasa	6.138	1. Indalquima	24.530
3. Perdiel	866	2. Dow Corning	1.447
	53.252		25.977
9. Deutz		17. Standard Electric	
1. Deutz	25.763	1. Cia. Standard Electric	25.530
2. Industria Argentina Man	22.257	18. Química Hoechst	
3. Establecimiento Klockner	2.248	1. Química Hoechst	16.201
	50.268	2. Sudamfos	2.436
10. Philips			18.637
1. Salvo	21.814	19. Rhodia	
2. Philips Argentina	21.082	1. Rhodia	15.328
3. Ind. Eléctricas Radio Serra	6.193	20. Camea	
4. Poligram	1.009	1. Camea	11.315
	50.098	21. Johnson y Johnson	
11. Indupa		1. Johnson y Johnson Arg.	10.603
1. Indupa	45.392	Total	1.483.995
12. Siemens			
1. Cimet	17.943		
2. Siemens	12.802		
3. Equitel	8.875		
4. Osram	3.818		
	43.438		

Fuente: "Deuda externa y poder económico en la Argentina", Eduardo M. Basualdo, Editorial Nueva América, 1937.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BAGLINI

Versión taquigráfica de la reunión celebrada por la Comisión de Presupuesto y Hacienda el 12 de febrero de 1991.

—En Buenos Aires, a los doce días del mes de febrero de 1991, a la hora 16 y 45:

Sr. Presidente (Matzkin). — Continúa la reunión.

Prosigue la consideración del mensaje 250 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifican los impuestos a las ganancias, de sellos, sobre los débitos bancarios y otras operatorias; sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas; sobre los activos; el valor agregado, y la ley de procedimientos tributarios, y se crea un impuesto a la transferencia de bienes inmuebles;

y pago de los tributos aduaneros sobre el comercio exterior en dólares estadounidenses (expediente 63-P.E.-90).

Durante la primera parte de esta reunión escucharemos a los representantes de las entidades que hemos invitado con el objeto de que formulen sus apreciaciones acerca del tema que nos ocupa.

A aquellos señores diputados que no han participado de este tipo de reuniones les comento que siempre tratamos de escuchar a los invitados sin interrumpirlos. A su vez, éstos tienen la opción de dejar o no la documentación que consideren conveniente. El tiempo estimado de participación de cada invitado es aproximadamente de 15 minutos.

El primer invitado es la Federación Agraria Argentina, por lo que le damos la palabra a su presidente, el señor Humberto Volando.

Sr. Volando. — Muchas gracias. En primer lugar no puedo dejar de observar el escaso tiempo de que disponemos. La política impositiva es un instrumento de extraordinaria importancia en el manejo de la economía. Consideramos que el sistema impositivo argentino es enormemente deficiente, de tal manera que hacer las observaciones no solamente en general sino en detalle sería fundamental, pero no creemos que podamos hacerlo en 15 minutos.

Afortunadamente, hemos traído un trabajo escrito, hecho un tanto de apuro; allí puntualizamos más detalladamente las observaciones que nos merece el proyecto. En general, y por lo que expresa el Poder Ejecutivo en el mensaje, parece que guía esta iniciativa la necesidad de obtener una mayor recaudación a fin de atender el pago de los sueldos del personal de la administración pública, de los maestros, etcétera. Es preciso advertir, sin embargo, que para atender a esos sectores, que tienen legítimo derecho de percibir mejores ingresos, se imponen gravámenes que en definitiva serán soportados por los contribuyentes de menores recursos, de tal manera que se opera una suerte de transfusión desde un sector económicamente débil hacia otros sectores más débiles. Esta es la primera observación que consideramos imprescindible hacer, ya que en realidad correspondería que esos gravámenes cayeran sobre los sectores de mayores ingresos, y que fueran de tal modo personalizados que se impidiera la transferencia de la carga impositiva de un sector a otro.

El mensaje del Poder Ejecutivo también hace referencia a una distribución más equitativa de las cargas. Coincidimos totalmente en que ése debe ser el objetivo pero entendemos que este proyecto no apunta a lograrlo. El sistema impositivo argentino es altamente regresivo; comparado con otros, resulta ser uno de los más regresivos del mundo. Consideramos que las reformas que se propician contribuirán a hacerlo todavía más regresivo, lo cual surge de demostraciones que hemos incluido en nuestro trabajo escrito.

Otra de las finalidades que persigue el Poder Ejecutivo es la de reducir al mínimo posible la evasión. Sobre este aspecto, señor presidente, quisiera hacer una reflexión.

El instinto más fuerte tanto en el hombre como en las instituciones por él creadas es el de conservación. Este instinto apunta, en el hombre y en sus organizaciones de carácter económico, no sólo a la propia supervivencia sino también a la defensa del patrimonio. Cuando el hombre se siente acorralado no hay amenaza, no hay medida que lo disuada de transgredir la ley. Y creo que en definitiva, más allá de la ley, está el derecho que asiste a estos contribuyentes.

En el sector agropecuario observamos un grave quebranto: ningún tipo de explotación tiene hoy rentabilidad. Hay quebrantos sumamente graves y esta reciente modificación del tipo de cambio no ha hecho variar la situación. Aquí hay un hecho nuevo en la estructura económica argentina. Se ha hablado mucho de la dolarización de la economía, y aunque ello no ha ocurrido según la letra de la ley, en la práctica nuestra economía

se ha producido una cesación de pagos, y si no se realizan precios relativos, de modo tal que hoy nos encontramos en una nueva meseta. Sin embargo, la situación en lo que hace a rentabilidad del sector agropecuario es hoy tan deficiente como quince días atrás —y todos sabemos cuál era la condición del productor agropecuario quince días atrás. Tanto es así que en muchas regiones del país se ha producido cesación de pagos, y si no se realizan las ejecuciones es porque los mismos acreedores advierten la fragilidad de la situación y saben que si comienzan las ejecuciones toda la estantería puede venirse abajo. Cuando a la cesación de pagos y a la absoluta imposibilidad de hacer frente a los compromisos actuales se suma la intención del gobierno de cobrar más impuestos, el productor queda entre la espada y la pared. En estos momentos, y según la provincia, muchos productores están recibiendo las boletas para el pago del anticipo o de la primera cuota del impuesto inmobiliario correspondiente a 1991, y le puedo asegurar que en la mayoría de los casos ese productor no podrá pagar esas cuotas. No estamos cuestionando los montos, respecto de los cuales en algunos casos los gobiernos han tenido la preocupación de establecer algunos no muy elevados. De todas formas, no hay posibilidades.

En el mes de octubre del año pasado tuve la oportunidad de visitar al señor ministro de Economía, a quien le manifesté que tal como venían las cosas, en 1991 no íbamos a estar en condiciones de efectuar los aportes que se venían realizando en los años anteriores. Esto es algo que está siendo demostrado en estos días, y es importante tener en cuenta que el incremento de la presión tributaria coloca al productor en una situación aún más grave. Consecuentemente, la imposibilidad de poder efectuar los pagos conduce, en última instancia, a una rebelión fiscal, con las implicancias que ello representa. Por lo tanto, me parece que este aumento de la presión tributaria constituye un hecho de suma gravedad.

En función del tiempo limitado de que dispongo para hacer uso de la palabra, brevemente recordaré la posición de la Federación Agraria Argentina con relación al IVA, que para algunos teóricos es el mejor impuesto del mundo. A nuestro entender, esa situación no se verifica en la Argentina.

La Federación Agraria Argentina, junto con otras entidades, ha cuestionado la extensión de este impuesto al sector agropecuario cuando la iniciativa se encontraba en el nivel del Poder Ejecutivo nacional. Posteriormente, en el ámbito de esta comisión —el señor presidente del cuerpo recordará seguramente esa reunión— y en el del Honorable Senado de la Nación, nos referimos a las consecuencias que la generalización del impuesto iba a generar. En tal sentido, expresamos oportunamente que esto le complicaría la vida tanto al pequeño como al mediano contribuyente, ya que en algunos casos el pago del asesoramiento representa un monto equivalente o superior al del propio tributo. Asimismo, manifestamos que esta situación iba a complicar la administración por parte de la Dirección General Impositiva, ya que la circunstancia de no poder ejercer un adecuado control se iba a traducir en una distorsión del mercado, hecho que se verificó en muchos casos.

También quisiera señalar un hecho que esta comisión podrá comprobar, si así lo desea. Concretamente, me estoy refiriendo al precio que actualmente reciben los productores de trigo, el que resulta bajo como consecuencia de la caída experimentada por los precios internacionales. Sin embargo, si analizamos el precio FOB al que se vende ese trigo, y lo trasladamos a lo que reciben los productores agropecuarios, observamos la existencia de una quita que oscila entre los cinco y los diez dólares por tonelada. El argumento que se esgrime al respecto es que el Estado no les devuelve la divisa a los exportadores, o la paga tarde.

En virtud de lo expuesto precedentemente, creemos que no tiene sentido insistir en la aplicación de este impuesto, cuya recaudación —tal como se ha demostrado— ha alcanzado niveles inferiores a los que se habían previsto oportunamente; el aumento de las alcuotas no alcanzará ni siquiera en forma aproximada a los niveles de recaudación previstos.

Teniendo en cuenta todos estos problemas que afectan al sistema impositivo argentino, considero que deberíamos sentarnos en torno a una mesa —con tiempo y no en la urgencia de la coyuntura—, a fin de llevar a cabo un análisis detallado de esta situación.

Sin un instrumento impositivo y crediticio realmente eficiente, equitativo y racional no habrá posibilidades de salir de la tremenda crisis económica por la que atraviesa el país.

Si me permiten efectuar una comparación, yo diría que es algo así como entregarle un bisturí roto al mejor cirujano: la operación no tendrá éxito. Esa es nuestra preocupación.

Por consiguiente, nosotros objetamos a fondo tanto el régimen tributario vigente en nuestro país como este proyecto de ley que estamos considerando, mediante el cual se persigue obtener una mayor recaudación. En cuanto a esta finalidad, tenemos serias dudas acerca de la posibilidad que pueda ser alcanzada.

Sr. Presidente (Matzkin).—Tengo entendido que ustedes van a dejar una documentación en el seno de la comisión. Si ningún señor diputado desea formular preguntas o brindar su opinión con respecto a la exposición del representante de la Federación Agraria, agradecemos la participación y el aporte del señor Volando en esta reunión.

A continuación invito al señor Gassoni, de Coninagro —a quien le damos la bienvenida—, a expresar sus puntos de vista sobre el proyecto que está en estudio.

Sr. Gassoni.—Señor presidente: voy a tratar de emplear los 15 minutos de que disponemos, para hablar, en primer término, de estos impuestos que está por tratar el Congreso. En segundo lugar, me referiré en términos globales al sistema impositivo. Si empezara de otra forma, podría suceder que si esta iniciativa llegara a sancionarse alguna referencia interesante podría quedar sin mencionar. De manera que voy a comenzar de menor a mayor.

Con referencia al impuesto a los débitos bancarios advertimos que crece significativamente del 3 al 12 por mil y del 1 al 2 por mil según el tipo de actividad, y si establece que el incremento puede ser imputable en un 50 por ciento al impuesto a las ganancias y en un 50 por ciento al impuesto al valor agregado.

Pero a renglón seguido, se determina que todos los que no son contribuyentes al IVA pueden imputar a ganancias este diferencial de alícuota. Por el contrario, no establece el mismo criterio para aquellos que tengan una situación impositiva diferente; es decir, que estén alcanzados por el IVA y no por ganancias. Nuestro señalamiento particular es que tendría que haber un tratamiento discriminatorio para un tipo de contribuyente y otro. Es decir, que hubiera reciprocidad en el sentido de que si es acumulable en favor de los contribuyentes al impuesto a las ganancias también lo sea en favor de los inscritos en el IVA.

Respecto de la alícuota sobre activos sólo me resta señalar que la Coninagro ha efectuado un estudio sobre el impacto que tendrá en el sector agrario el incremento de esta contribución. Dicho análisis refleja una cifra que, dada la situación de debilidad económica en que nos encontramos, resulta a todas luces excesiva.

Solamente por ese concepto, nosotros estamos calculando unos 500 millones de dólares, cifra que en este momento resulta imposible hacer frente en el sector agropecuario. El impacto fiscal de este conjunto de modificaciones que se proponen calculamos que será una suma global de 590 millones de dólares que incidirá directamente en el sector agropecuario.

Con respecto a las modificaciones de la ley de impuesto al valor agregado, voy a referirme en primer lugar a algunos aspectos instrumentales, contenidos en el proyecto, entre ellos la elevación de la alícuota del 15,6 al 16 por ciento. El Poder Ejecutivo argumenta que es una especie de redondeo de cifras, pero omite señalar el antecedente fiscal que los señores diputados —y también los contribuyentes— deben tener en cuenta. No se llega en forma caprichosa a esa tasa del 15,6 sino que ella es resultado de haber agotado la facultad conferida al Poder Ejecutivo para incrementar hasta en un 20 por ciento la tasa del 13 por ciento del IVA.

Además de este redondeo que trata de hacer el proyecto hay que agregar que se solicita la facultad de incrementar o disminuir la alícuota del 16 por ciento hasta en un 25 por ciento, sin intervención del Congreso. Si tenemos en cuenta los antecedentes en esta materia, debemos presumir que es posible que la alícuota del 16 por ciento, en muy poco tiempo se transforme en 20 por ciento, inclusive por algunas otras razones que daré a continuación.

Consecuentemente, nosotros solicitamos que se elimine del proyecto la facultad que se le otorga al Poder Ejecutivo para discrecionalmente aumentar o disminuir en un 25 por ciento la alícuota del IVA, de modo que si ella no alcanza se deba recurrir, como corresponde, al Congreso.

De manera tal que desde el punto de vista instrumental realizamos esta observación que me gustaría mucho que los señores diputados recogieran y tuvieran en cuenta en el momento de la sanción del proyecto, habida cuenta que éste no va a demorar mucho en ser tratado y sancionado.

Si nos guiamos por las declaraciones periodísticas de algunas autoridades, pareciera ser que este tema ya tiene definición clara. De manera que creemos que hay que proceder con apuro para hacer los arreglos menores, porque con respecto a los arreglos mayores —a los

que me voy a referir a continuación— en este estilo de emergencia al cual la actuación pública nos tiene acostumbrados, siempre es muy difícil abocarse a las tareas de fondo y las reformulaciones que de alguna manera puedan ser soluciones duraderas.

Todos estos mensajes del Poder Ejecutivo que llegan con tanto apuro para su tratamiento por el Congreso, contienen impuestos objetivos que más allá de la teoría tratan de conseguir plata. En definitiva, sin todas esas exquisiteces con las que teorizan los tributaristas, terminan diciéndonos —como hemos escuchado el otro día de boca de las principales autoridades económicas— que estos impuestos no les gustan, pero tienen que aplicarlos porque las urgentes necesidades fiscales, imponen un método expeditivo e inmediato de recaudación. Así vamos.

Pero el eje de todo esto es que la estructura tributaria está mal asentada.

El eje es el impuesto al valor agregado. Y todas estas situaciones de apuro y estos sofocones que estamos viviendo se deben a que el impuesto al valor agregado fracasó sucesivamente, y sus mentores, sus instrumentistas y los organismos encargados de hacerlo cumplir —como ya lo dije en esta misma sala y ante prácticamente la misma audiencia— no tienen en cuenta que carecen de los instrumentos adecuados para que este impuesto funcione.

No disponen de la economía propia para que este impuesto dé frutos, así como tampoco cuentan con el estado social necesario. Y, lógicamente, son demasiadas omisiones, porfías y fracasos para no pedirle al Congreso o a los señores diputados —Coninagro lo hace en este momento— que asuman con energía su condición de máximo legislador en materia impositiva, y formulen las modificaciones de fondo que son necesarias.

Solicitamos que nos sentemos a una mesa de negociaciones para tratar a fondo la tributación agraria y toda la tributación argentina, si quieren. Debemos manejarlos con la realidad. El sector agropecuario argentino exporta su producción en un 70 por ciento. Al estar implementando un impuesto que grava la totalidad de esta producción, se debe terminar devolviendo el 70 por ciento de lo recaudado; es decir, después de un pasamanos y un trámite administrativo innecesario y costoso, el Estado termina devolviendo el 70 por ciento del impuesto aplicado a esa producción.

Si a esto le agregamos todos los costos que tiene el sector público de pesquisa y control, no sé en definitiva qué le queda de este impuesto. No le debe quedar tanto, porque en una de las últimas reuniones que hemos tenido con el presidente de la República, y en presencia del señor subsecretario de Ingresos Públicos, nos decía que estaba preocupado porque prácticamente los reintegros a los exportadores eran superiores a la recaudación del IVA.

Nosotros pedimos que no se aumente la alícuota para que sigamos cumpliendo los que veníamos haciéndolo siempre. Desde un punto de vista instrumental, ¿por qué la sociedad se comporta de esta manera? ¿Por qué el instrumento público de recaudación se comporta de esta manera? Acá tenemos que dividir las responsabilidades.

La sociedad —y particularmente el sector agrario— está viviendo una situación muy particular en este momento: una economía recesiva, prolongadamente mantenida en búsqueda de objetivos muy valiosos como es la estabilidad. De cualquier manera, esta recesión achica la economía y no se compadece con el progreso ni el crecimiento; una economía recesiva naturalmente achica el mercado, es decir, achica a los consumidores finales. Esto trae como consecuencia que se van a percibir menos impuestos.

Además, una economía recesiva genera insolvencia, y el pasamanos que se hace del impuesto contribuye a ello. En esta instancia, los productores trigueros, los económicamente más débiles, tienen que vender el trigo porque deben, y son los autores de la sobreoferta de trigo. En este momento es cuando aparece una diferencia entre el precio posible y el ofrecido.

Esto sucede porque hay una sobreoferta. El productor vende barato porque necesita el dinero, y el resultado de su liquidación va a la cuenta que tiene con el acopiador, con la cooperativa o con quien sea, cuenta que es mucho mayor que el crédito que le hacen por su liquidación de trigo más IVA. El día 20 del mes siguiente a aquél en que le hicieron la liquidación, ese hombre tiene que ir a pedir plata prestada para pagar el IVA el día 22 ó 25. ¿Por qué? Porque debía 100 y le acreditaron 55 —con IVA y todo—, de modo que todavía debe 45. Entonces, tiene que ir a pagar los siete millones y medio de IVA; y para eso debe pedir plata —si se la dan no sabemos en qué condiciones se la darán, porque derechos adquiridos no tiene— y aumentar su deuda. ¿Qué espíritu contributivo puede tener el productor en esa circunstancia? Un productor lácteo, por ejemplo, tiene que ir el día 20 a pagar el IVA por una producción que todavía no cobró. Ustedes dirán que éstas son las obligaciones del ciudadano contribuyente; pero así, por una metodología instrumental impositiva que desconoce el drama del sector agrario, se está generando la rebeldía social.

No hablo de productores pequeños, medianos o grandes; hablo de productores económicamente débiles, que son la mayoría de los productores agropecuarios —y la mayoría de la población— en la Argentina. Estos productores no están en condiciones de elegir el momento ideal para vender estratégicamente, que es aquél en que el IVA llega a formar parte del precio lleno que oferta el exportador. No; la mayoría de los productores venden cuando obtienen su producción, y lo hacen porque tienen que pagar. La afirmación de que el IVA es neutro es una falsedad en lo que se refiere a productores económicamente débiles, que no pueden elegir el momento en que realizan las transacciones.

Todo esto debe pesar en el análisis que hagan los señores legisladores. Este impuesto es absolutamente discriminatorio porque afecta más a los sectores económicamente débiles. Se dice que otros impuestos —como el que grava la tierra libre de mejoras— son discriminatorios. Puedo asegurar que este impuesto es mucho más discriminatorio, porque hace una diferencia mucho más odiosa entre quienes tienen y quienes no tienen. Los representantes del pueblo no pueden dejar de tener esto en cuenta.

Si luego es preciso mejorar toda la estructura con remiendos es porque ésta ha nacido mal, porque ha nacido de un elemento que es totalmente inadecuado para el sector agropecuario. Desde que en la Argentina comenzamos a hablar del IVA he dicho que iba a ser un fracaso de recaudación y un germen de malestar en el sector agropecuario. Y efectivamente así ha ocurrido. A esta comisión hemos concurrido tres veces, y no sé ya cuántas veces hemos ido a hablar con el subsecretario de Finanzas Públicas y con el ex secretario de Hacienda. No hemos tenido eco pero puedo adelantar que, más allá de nuestras palabras, la pertinencia en continuar con este mecanismo impositivo tendrá una resonancia que se oirá desde las bases mismas del sector agropecuario.

No es posible que una persona quede transformada en delincuente más allá de su voluntad y del cumplimiento de sus posibles obligaciones. De manera tal que si se persiste en esta actitud y se continúa aumentando la alícuota, esto se transformará en una verdadera fábrica de evasores, a pesar de ellos.

Sr. Baglini. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Matzkin). — Tiene la palabra el señor diputado Baglini.

Sr. Baglini. — Señor presidente: en este tiempo he estado recordando la cantidad de veces que hemos hablado en torno a este tema. La primera vez en que lo hicimos fue —si mal no recuerdo— cuando se extendió la aplicación del IVA a los bienes del sector agropecuario. Y la segunda oportunidad en que debatimos acerca de esta cuestión tuvo lugar cuando el tributo anteriormente citado alcanzó a los servicios.

Oportunamente se ha dicho que la extensión del alcance de los impuestos sin prever las dificultades prácticas y las complejidades de su aplicación era como repartir armas para la inconducta fiscal. El proyecto que estamos considerando contiene una modificación que agrava la condición del responsable no inscripto al tener que hacer sus ventas, pero al respecto no he observado apreciación alguna. El doctor Cassoni sí efectuó una observación —que compartimos, tal como lo señaláramos en la última reunión celebrada por esta comisión— en relación con la facultad que se otorga al Poder Ejecutivo nacional para modificar la alícuota del impuesto al valor agregado aumentándola o disminuyéndola hasta en un 25 por ciento.

Me gustaría escuchar alguna apreciación del doctor Cassoni respecto de la experiencia recogida a partir de la extensión del IVA a los servicios del sector agropecuario, oportunidad en que preveíamos un aumento de la complejidad mayor que el derivado de la extensión de este gravamen a los bienes del sector.

Como se recordará, en su momento nosotros también modificamos el tema del responsable no inscripto. La iniciativa que estamos considerando prevé, entre las modificaciones al impuesto al valor agregado, una que implica recargar notoriamente la situación del contribuyente no inscripto al efectuar sus compras. Por ende, también quisiera pedirle al doctor Cassoni que tenga la gentileza de suministrarnos alguna aclaración acerca de ese tema.

Sr. Presidente (Matzkin). — Tiene la palabra el doctor Cassoni.

Sr. Cassoni. — Señor presidente: desearía aclarar que no me he extendido demasiado en cuanto a las puntualizaciones en virtud de que dispongo de un tiempo limitado para hacer uso de la palabra. No obstante, voy a subsumir la referencia que hice en cuanto a la existencia de una fábrica de delincuentes en este punto, ya que les puedo asegurar que a partir de esto no vamos a ser delincuentes sino parias. Seremos gente desclasada económica e impositivamente, al tiempo que no resolveremos el problema tributario.

Yo estoy convencido de que esta comisión tendrá que considerar nuevamente esta cuestión, a menos que se disponga de una vez por todas de una iniciativa que contemple en forma global el tema de la tributación agraria sin tener en cuenta las presiones de algunos sectores que, en realidad, no defienden tanto la excelencia técnica de un impuesto sino que experimentan temor ante el tributo que reemplazará al que se encuentra en vigencia como consecuencia del fracaso de este último. Hay mucha gente que siente un gran temor por el impuesto que vendrá. Por consiguiente, se habla de la excelencia del tributo en vigencia, de su aparente neutralidad —que no es tal—, y de algo que es muy importante; no le cuesta nada al productor.

Con relación al último aspecto al que me acabo de referir, hay que tener en cuenta lo siguiente: en primer término, ningún productor puede creer y aceptar el hecho de que no tiene nada que pagar, es decir, que se encontró una bola mágica en virtud de la cual no debe enfrentar ningún costo; lo cual resulta negativo desde el punto de vista de la inconducta; y en segundo lugar, hay que considerar que se trata de un impuesto que genera un privilegio en contra de los económicamente débiles y a favor de los económicamente fuertes.

Sr. Figueras. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Matzkin). — Tiene la palabra el señor diputado Figueras.

Sr. Figueras. — Señor presidente: nosotros ya hemos planteado esta cuestión en la reunión que esta comisión celebró la semana pasada. Con relación a este tema quisiera señalar, en primer término, que comparto en gran parte los argumentos expuestos por el doctor Cassoni, y en segundo lugar, que a mi juicio la cuestión impositiva es buena en tanto y en cuanto dé resultados.

El señor subsecretario de Finanzas Públicas aquí presente manifestó su intención de producir algún tipo de información acerca de cómo evolucionaba el cobro del IVA. Creo que sería interesante contar con estos datos; si ya están en poder de la comisión, perfecto. Básicamente, quería tocar el tema de la responsabilidad de los no inscriptos. Imagínese si alguien...

Sr. Presidente (Matzkin). — Señor diputado: perdón que lo interrumpa pero esta Presidencia desea saber si ha pedido el uso de la palabra para hacer un comentario vinculado con la exposición de Coninagro o simplemente su intención era efectuar una pregunta dirigida al señor subsecretario. Hago esta aclaración por el temperamento de trabajo que habíamos acordado en función de que tenemos veintidós entidades invitadas y especial interés por escuchar a todas.

Sr. Figueras. — Entonces, voy a formular una pregunta concreta al señor Cassoni. Teniendo en cuenta que en determinadas condiciones — hasta culturales — es imposible que el pequeño productor pueda llevar una contabilidad para pagar todos los impuestos, tener todas sus boletas, su asesor impositivo, etcétera, ¿ cree usted que ese hombre tratará de evadir el aumento del 25 por ciento de la alícuota del IVA?

Sr. Cassoni. — Creo que esta pregunta la contesté anteriormente al decir que ese productor va a ser una especie de desclasado por quien nosotros tendríamos que preocuparnos a fin de sacarlo del estado de indefensión en que se encuentra.

Este es uno de los elementos que nos demuestra que la situación no va a durar y que va a reventar por algún lado; es mucha esa gente y también mucha la injusticia que sentirán sobre su piel a través de este método. Si bien desde un punto de vista objetivo pareciera ser que todos estarán obligados a inscribirse y a hacer lo que tienen que hacer, no se tiene en cuenta la realidad de una enorme cantidad de familias de minifundistas, de quienes deberíamos preocuparnos. Desde luego que ellos van a manifestar de manera clara su disgusto social respecto de esta situación.

Sr. Presidente (Matzkin). — Tiene la palabra el señor diputado Rodríguez.

Sr. Rodríguez (J.). — Seré breve. Quería formular un requerimiento de información a los señores Cassoni y Volando, abusando tal vez de la gentileza que tuvieron en otras oportunidades. Resultaría interesante contar con estudios, informes o datos referidos a alguna explotación tipo, o que pueda caracterizarse como tal, a fin de encontrar una serie de puntos en el tiempo o en todo caso ahora, para tratar de medir rentabilidades. Este pedido se basa en que muchos consideran que el ajuste del tipo de cambio ha significado una mejora sustantiva en la posición del productor agropecuario, mientras que nosotros tenemos la sensación de que estamos corriendo un serio riesgo en el sentido de que se haya producido un incremento muy grande en el valor del dólar, derivado de la corrida cambiaria, que genere una alta tasa de inflación pero que no significa una mejora en la posición relativa del productor. En otros términos, corremos el riesgo de tener un salto inflacionario sin que ello signifique una mejora de un sector gravemente afectado.

Por lo dicho, sería conveniente saber si en un margen de tiempo podríamos contar con algún cálculo medio, estándar o tipo para algún cultivo de alguna zona que nos permita evaluar la situación de un productor de estas características, con este cultivo, con esta estructura de costos, con este tipo de cambio, con estas retenciones, etcétera.

Sr. Cassoni. — Nosotros podemos contestar ahora y dejar al presidente de la comisión un trabajo al respecto. Podemos señalar — como dijera el señor Volando — que los precios de paridad con el nuevo tipo de cambio y las cotizaciones que actualmente se registran, reflejan por ejemplo un 7,1 por ciento menos en la paridad del trigo; un 8 por ciento más en el maíz — ustedes saben que no hay maíz porque todavía no estamos cosechan-

do —; un 2,24 por ciento menos en la paridad del sorgo; un 6 por ciento menos en girasol y un 7 por ciento menos en soja. Es decir que desde el punto de vista del tipo de cambio no se llega a obtener todo lo que éste podría dar.

Con respecto a los gastos tenemos que decir que los rendimientos que se necesitarían para poder pagar al precio de hoy todos los gastos tendrían que ser mucho mayores de lo que es el rendimiento promedio del país; salvo el caso de la soja, en todos los demás no alcanza para los gastos pagables.

Sr. Figueras. — Quisiera aclararle al señor Cassoni que a mí juicio la pregunta apuntaba a saber si al nivel del tipo de cambio actual y con el incremento de los precios se neutralizaba la suba del dólar.

Sr. Cassoni. — Le estoy contestando que para los rendimientos que tenemos nosotros no alcanza; tendríamos que tener rendimientos más altos.

Sr. Presidente (Matzkin). — Su preocupación es comprensible. Usted sabe que las espaldas del gobierno son anchas y acusan muchos golpes. Pero espero que no le endilgue también el tipo de rendimiento, el nivel de los precios internacionales u otra cuestión. La pregunta del señor diputado Rodríguez fue muy concreta y además creo que es obvia. El tipo de cambio actual mejora la situación. Ahora bien, si la mejora mucho o poco es una cuestión de magnitudes, pero no hay dudas de que la mejora. Esto es obvio.

Sr. Figueras. — No, para nada. Es un esquema de precios relativos.

Sr. Rodríguez (J.). — Voy a precisar la pregunta. De diciembre a la fecha han transcurrido cuarenta días, y puede decirse que hubo una mejora del tipo de cambio nominal del orden del ciento por ciento. La pregunta es la siguiente: ¿cuál termina de ser el resultado del tipo de cambio efectivo para un productor agropecuario que computa el incremento nominal del dólar pero lo netea de los incrementos nominales de sus insumos? Según interpreté de las cifras que usted dio, hay mejoras reales del 7 por ciento.

Sr. Cassoni. — No es así. Las cifras que di para que ustedes vean la influencia del IVA representan lo que se podría pagar con este tipo de cambio y lo que en realidad se paga en las pizarras. Los exportadores están achicando un poco el precio porque tienen que pensar en el IVA.

Lo que usted pregunta es si con el nuevo tipo de cambio, los nuevos precios y los nuevos costos estamos mejor, peor o igual. Le contesto que estamos igual. Para establecer en la producción agropecuaria si hay o no ingreso se recurre a la técnica que consiste en ver cuántos quintales se necesitan para cubrir los gastos. En este momento, la media nacional de quintales que se precisan para cubrir los gastos no alcanza; es decir que estamos igual que antes, que tampoco alcanzaba.

Sr. Volando. — Coincido con lo manifestado por el señor Cassoni. Al día jueves 7 hemos obtenida de nuestro banco de datos los últimos cálculos que efectivamente muestran que la rentabilidad antes del aumento del dólar y ahora no ha cambiado en absoluto.

Perdíamos antes y perdemos ahora. Esto lo decimos después de haber hecho un estudio en el que no incluimos dos cosas: la incidencia de los peajes, que se están generalizando, y la de este paquete impositivo, en el supuesto de que se aprobara de esta manera.

Descartando estos dos aspectos, es decir, tomando en cuenta este paquete como lo conocemos, perderíamos más así que antes de la devaluación. Les podemos hacer llegar el cálculo de costos que nosotros hemos hecho el jueves pasado.

Sr. Cortese. — ¿Se ha analizado la incidencia que tienen en la facturación del IVA los servicios específicos que se prestan al productor agropecuario no inscripto, como gas, luz y agua? Si es así, ¿hay posibilidades de que represente el 48,550 por ciento, si se ejerce la facultad de incrementar la alícuota por parte del Poder Ejecutivo, y directamente el 37,50 por ciento, de permanecer todo como lo establece este paquete?

Sr. Velando. — No puedo responder a su pregunta porque el jueves pasado no teníamos todavía el texto completo; por esto lo hemos excluido del análisis. El estudio lo podemos hacer incluso luego de la sanción de este proyecto, para saber hasta dónde se aplica.

Sr. Cortese. — Me interesaría que nos hagan llegar estos datos.

Sr. Presidente (Matzkin). — Tiene la palabra el representante de Confederaciones Rurales Argentinas, señor Tualde.

Sr. Tualde. — En primer término pido disculpas por haber llegado tarde a la reunión. No quisiera entrar en el análisis de los valores de nuestra producción y demás, porque veo que con lo que ya se expuso anteriormente quedó bastante claro cuál es la situación del sector agropecuario.

Cuando llegaron al poder las actuales autoridades, la entidad que represento, Confederaciones Rurales Argentinas, vio con gran satisfacción — y prestó todo el apoyo posible — la revolución productiva, anunciada por el presidente de la República. Pero cuando vemos el presente paquete impositivo sentimos bastante dolor porque parece que de momento hubiera dos sectores: uno apunta al país grande, al país que produce, y le quiere dar un cierto número de libertades para dejarlo trabajar, y el otro persigue objetivos opuestos.

Este paquete de medidas contradice la posibilidad de una mayor recaudación. Yo quiero que sepan, señores, que la única posibilidad de sacarlo más al sector agropecuario es permitirle que produzca más. No existe otra alternativa.

Les digo a los señores diputados, a los que nos representan y tienen que defender los intereses del sector, mas allá de lo que lo podemos hacer nosotros como dirigentes, que sepan que el sector agropecuario no puede pagar en este momento un solo austral más de impuestos.

Crear que al sector agropecuario se le puede aplicar un impuesto complicado como el IVA es no reconocer la realidad que vive el campo. Esto es así, más allá de que el impuesto sea perfecto o imperfecto.

No vamos a discutir los aspectos técnicos; es posible que en una hipótesis en la que todo el mundo se maneje con papeles claros el impuesto dé resultado y los números cierren. Pero quienes conocemos el interior del país sabemos que un productor que posee de 100 a 400 hectáreas en Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, La Pampa o cualquier otra provincia se encuentra ante el hecho de que todos sus proveedores están en infracción: nadie tiene papeles. Y si además el productor tiene que recurrir a un contador para que le lleve los papeles, entre el contador y el impuesto se queda sin rentabilidad.

Aquí tenemos que considerar seriamente que si deseamos que el país salga adelante debemos sacarle los pies de encima al productor agropecuario. La única forma de recaudar más es permitir que se produzca más. Lo contrario sería, como decimos en el campo, querer ordeñar un ladrillo: por más que exprimamos no sacamos jugo. No reconocer la realidad es como querer ordeñar un ladrillo.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la comisión, diputado Antonio Isaac Guerrero.

Sr. Tualde. — Recorrer el campo, y hablar con los productores puede resultar más claro que lo que decimos los dirigentes, quienes estamos en una situación un poco más fácil por conocer más sobre algunos temas y por tener acceso a los contadores.

Sr. Presidente (Guerrero). — Invitamos a hacer uso de la palabra el doctor Bugueiro, subsecretario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Sr. Bugueiro. — Señor presidente: nuestra institución desea hacer conocer primero una opinión macro y luego una opinión técnica respecto de este ajuste tributario.

En su mensaje el Poder Ejecutivo expresa que las cuentas fiscales no cierran y que por ello es menester aumentar los ingresos a través de una reforma tributaria. No conocemos las cifras, pero evidentemente no se hace hincapié en la reducción del gasto público ni en las consecuencias que ello puede tener.

Observamos que las modificaciones que se propicia introducir al sistema tributario no prevén un plazo de vigencia sino que son para un período indeterminado. Creemos que si se pudiera medir el déficit fiscal que existe en este momento, quizás hubiese sido preferible recurrir a algún tipo de impuesto de emergencia.

Evidentemente, el ajuste tributario — a través de las modificaciones impositivas que se propician en la iniciativa que estamos considerando — no va a generar una reactivación económica. Por el contrario, por un lado van a surgir las empresas deficitarias, y por el otro — y esto es realmente mucho más grave — no se va a fomentar la inversión por parte de nuevas empresas.

De manera tal que en este contexto caracterizado por la falta de actividad económica, el Poder Ejecutivo, mediante la obtención de una mayor cantidad de ingresos provenientes del sector privado, agravará la situación de recesión económica que ya padecemos. En tal sentido — y esto es algo que todos conocemos —, el Estado debería establecer, como objetivo principal a alcanzar, el hecho de no agravar más esa situación de recesión,

y para ello es necesario que ponga en marcha los mecanismos de que dispone a los efectos de reactivar el aparato productivo.

El otro tema al que hace referencia la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo es el correspondiente a la evasión fiscal. Con relación a esta cuestión, nosotros, a través de las opiniones que hemos vertido oportunamente en ocasión de las reformas fiscales que tuvieron lugar en los últimos años, hemos advertido que el organismo fiscal no dispone de la organización adecuada para llevar un control de la cantidad de contribuyentes que surge a partir de las disposiciones correspondientes a los diferentes impuestos. En tal sentido, hemos señalado —por ejemplo— que en el caso del IVA el número de contribuyentes tendría que oscilar entre 50 mil y 70 mil. Evidentemente, en esas condiciones la Dirección General Impositiva hubiera visto facilitada su tarea en cuanto a la posibilidad de poder controlar realmente esta cantidad de contribuyentes inscriptos. En tal sentido, pensamos que se podría haber implementado un sistema de cuenta corriente por contribuyente, lo que le hubiera permitido al organismo fiscal conocer rápidamente quiénes son los contribuyentes incumplidores. Al mismo tiempo, dicho organismo hubiera podido tener armado, de esta forma, el aparato de control necesario a los efectos de poder incorporar posteriormente a nuevos contribuyentes, de acuerdo con la realidad económica que pudiera presentar la República Argentina.

Lamentablemente, en los últimos seis años y hasta el momento el organismo fiscal no ha podido registrar los incumplimientos de la totalidad de los contribuyentes —especialmente, de los grandes—, a pesar de haber recibido créditos provenientes del exterior a los efectos de poder contar con una base informática para el desarrollo adecuado de esta tarea.

Lo expuesto precedentemente nos permite concluir que en la medida en que el organismo fiscal no se aboque al cumplimiento de su tarea no será posible efectuar un control de la evasión impositiva. Esto es lo mismo que pretender sancionar leyes penales sin disponer de la policía necesaria para ir a buscar a los delincuentes y poder comprobar de alguna forma el delito cometido.

Nuestra institución también dio a conocer su opinión acerca de este tema en oportunidad de sancionarse la ley penal tributaria. En tal sentido, manifestamos oportunamente que si el organismo encargado de aplicar la norma legal y de llevar a los responsables ante la justicia a fin de que ésta dicte la sentencia correspondiente no se hallara en los términos adecuados de organización, no se percibirá ningún efecto positivo. Evidentemente, esto es lo que ha sucedido hasta ahora con la ley penal tributaria. En otras palabras, como el organismo fiscal no puede presentar ante los jueces competentes ninguna denuncia en forma fehaciente, todo esto resulta "ley muerta". Por consiguiente, no tiene sentido disponer de leyes cuyo cumplimiento resulta imposible.

Consideramos que el hecho de imponer una sobretasa a los responsables no inscriptos del impuesto al valor agregado provocará una avalancha de inscripciones. Es decir, pasar de la condición de responsable no inscrito a responsable inscrito va a sumar una mayor cantidad de contribuyentes al organismo fiscal y una importante

cantidad de papeles que van a presentar esos contribuyentes, con lo cual evidentemente el aparato de ese organismo fiscal se verá constantemente inundado por la gran cantidad de documentación, elementos y contribuyentes, situación que será difícil de manejar, y por querer controlar a todos no podrá controlarlo a nadie.

Por lo expuesto, creemos que esta medida es contraproducente desde el punto de vista de poder controlar la evasión fiscal. El organismo correspondiente no puede controlar a contribuyentes que están inscriptos por medio de un ajuste tributario; el número de éstos va a aumentar y las posibilidades de poder efectuar el control serán cada vez menores.

Luego, el doctor Ballesteros, presidente de la Comisión de Estudios Tributarios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, realizará un análisis técnico sobre las modificaciones propuestas en las leyes correspondientes.

Sr. Caviglia. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guerrero). — Tiene la palabra el señor diputado Caviglia.

Sr. Caviglia. — Señor presidente: comparto lo que se ha dicho aquí respecto del impuesto al valor agregado en el sentido de que es un tributo profundamente recesivo e injusto. También coincide con lo manifestado sobre el tema de la evasión impositiva. Cabe destacar que en el último año de vigencia de la ley sólo se han realizado 23 denuncias y no hubo ningún detenido; ni siquiera se produjo un auto de procesamiento; esta significa que los organismos de aplicación están actuando con negligencia, o bien, deliberadamente no quieren aplicarla.

Habida cuenta de que el Estado necesita obtener una mayor recaudación y considerando que usted habló de la necesidad de poder instrumentar un impuesto de emergencia para esta circunstancia —lo que también comparto—, quisiera tener una apreciación más exacta respecto de este tema y conocer cual sería ese impuesto de emergencia a efectos de poder dejar de lado la mayor gravedad que implicaría el impuesto al valor agregado y lograr una solución que, por otra parte, contaría con el consenso de todos.

Sr. Presidente (Guerrero). — Tiene la palabra el doctor Bugueiro.

Sr. Bugueiro. — Respecto al IVA, ya anticipé que el doctor Ballesteros realizará un análisis detallado. Por otra parte, no creo que este tributo sea un impuesto recesivo como quizás puedan serlo otros gravámenes al consumo. En ese sentido, existen estudios muy serios en países desarrollados que tratan la posibilidad de suplantarlo en algún momento el impuesto a la renta por el impuesto al valor agregado. Es decir que la condición de ser un impuesto al consumo recesivo no es común para el impuesto al valor agregado.

En cuanto a los organismos de control, debo decir que no creo que exista negligencia ni falta de control. Considero que el organismo fiscal no peca ni los medios naturales y humanos necesarios, ni la eficiente organización para poder realizar los controles adecuadamente.

Sr. Caviglia. — Tiene doce mil empleados.

Sr. Bugueiro. — Pero son doce mil empleados que —dicho en el buen sentido— no están seleccionados, no tienen capacitación y están mal pagos.

Respecto al bache fiscal, no sabemos bien si será por los primeros meses hasta marzo o si va a ser durante todo el año 1991. Entonces, es evidente que no podemos dimensionar qué impuesto de emergencia puede conjugar ese déficit fiscal. Por lo tanto, los equipos técnicos del Ministerio de Economía tendrían que ver de qué forma podrían precisar primero los números del bache fiscal y luego cuál sería el impuesto que podría implementarse para tratar de cubrirlo.

Sr. Presidente (Guerrero). — Tiene la palabra el señor Eduardo Ballesteros.

Sr. Ballesteros. — Es un desafío poder en poco tiempo analizar los distintos aspectos que abarca esta reforma y ser a la vez claro, preciso, conciso y profundo. De modo que algunas afirmaciones estarán hechas ligeramente y no va a haber problemas en profundizarlas después.

Es indudable que el Estado necesita urgentemente de los recursos que piensan recaudar con estas modificaciones que propicia la reforma impositiva. Es indudable también que lo peor que puede ocurrir en esta coyuntura es no darle al Estado esos recursos.

Ahora bien: la pregunta que nos cabe es si se ha recurrido a un método inteligente para obtener esos recursos. Debo decir que lamentablemente se ha recurrido a las peores manifestaciones de capacidad contributiva a las que se podía echar mano.

Lo cierto es que el sistema impositivo no camina ni funciona. Incluso, no podemos compararlo con sistemas de otros países que tienen un grado de desarrollo similar al nuestro. ¿Por qué? Simplemente ello se debe a las altas tasas de inflación, la recesión económica, el decaimiento de la inversión, factores que hacen difícil funcionar un sistema tributario. Seguramente muchos señores diputados que han participado en congresos y conferencias sobre estos temas colucidirán con esta afirmación.

Voy a hacer una rápida síntesis de toda esta reforma. Con respecto al impuesto a los activos debo decir que tuve alguna responsabilidad en su instrumentación porque actué en la comisión de reforma tributaria que propició su implementación. Sabíamos que era un impuesto malo, pero cuando se lo implementó fue para reemplazar totalmente al impuesto a las ganancias.

Aquí quiero hacer una afirmación: el impuesto a las ganancias en la Argentina no ha funcionado casi nunca, y mucho menos puede funcionar en la actualidad, porque la economía no da rentabilidad y lo que ocurre en las economías de otros países es totalmente incomplicable con lo que sucede en la República Argentina.

El impuesto a las ganancias no puede funcionar, y se pensaba reemplazarlo mediante un impuesto que sabíamos que era malo pero que podía asegurarle cierta recaudación al Estado mediante un mecanismo fácil. El sistema del impuesto a las ganancias complica muchísimo a la administración fiscal y diría que en este momento tiene dos fundamentos.

En primer lugar, uno de carácter político que consiste en poder esgrimir que existe un impuesto progresivo.

En segundo lugar, los profesionales en ciencias económicas especialistas en materia tributaria podemos facturar un número bastante elevado de horas de asesoramiento, que no condice con la recaudación del Estado. Aparte de eso no hay ningún otro fundamento para que permanezca en el sistema tributario en cuanto a su significación en la recaudación.

El impuesto a los activos decíamos que era malo porque grava el capital. Actualmente en el mundo, aun en los países más desarrollados, el capital es un recurso sumamente escaso. Si nosotros analizamos la legislación comparada veremos que el recurso de gravar activos empresarios, ya sea en la modalidad del patrimonio neto o en la de los activos, es casi impensable si la protección al capital es grande.

Los pocos países que aplican impuestos sobre el capital o el patrimonio neto empresario lo hacen a tasas bajísimas. Podemos citar el caso de Alemania, que aplica una tasa del 0,7 por ciento. Por estas razones es que decimos que este impuesto es malo.

En lo que se refiere a la tasa del 2 por ciento, no se condice con la realidad de la economía argentina. Es evidente que si se quiere aplicar alguna reformulación a efectos de que las empresas extranjeras, fundamentalmente las americanas porque las otras ya habían planteado objeciones de que el impuesto a los activos se imputase a cuenta del de ganancias, vean con buenos ojos la inversión en la Argentina, debe cambiarse la estrategia para tratar de lograr este objetivo.

En este momento es raro que en la Argentina nosotros tengamos proyectos de inversión con tasas de retorno que superen el 10 por ciento. Es decir que un impuesto de este tipo va a anular la recaudación proveniente en el sector empresarial del impuesto a las ganancias y va a originar mayor ingreso por el impuesto a los activos. Se va a recaudar más por el impuesto a los activos que por el de ganancias.

Esta reforma no es neutra, y es indudable que no sólo está dirigida a los evasores sino que además aumenta la presión tributaria para aquellos que son cumplidores. Son muchísimas las empresas que tienen quebrantos no sólo impositivos sino además contables, y de esta forma se están neutralizando los quebrantos impositivos que las empresas venían acumulando a través de la actividad.

En oportunidad de concurrir a esta comisión para opinar sobre la reforma del impuesto al valor agregado —es decir, sobre la generalización del IVA al sector primario y de servicios— manifestamos que esto no funcionaría y que en el corto plazo tendríamos que reunimos nuevamente para considerar la aplicación de otro tipo de gravamen que compensase la recaudación. El IVA es el impuesto más perfecto que existe en materia de imposición a los consumos.

La mayoría de los tratadistas internacionales reconocen que la imagen imaculada que tenía el impuesto a la renta hasta hace unos años ha ido deteriorándose. Por ello, dentro del marco de modificaciones que se vienen produciendo al respecto —la última de las cuales hemos podido visualizar en Suecia—, el IVA ha adquirido una importante presencia.

Tengo datos de recaudación relacionados con el producto bruto interno. Si bien en nuestro país es bastante

se difícil conseguir estadísticas tanomas la relación de lo que ha significado en distintos países el impuesto al valor agregado —el doctor Tacchi debe tener información mucho más actualizada—; en general, los países que tienen mejor administración fiscal tienen un mejor funcionamiento de este impuesto; tienen una tasa de recaudación, un porcentaje de recaudación en relación al producto bruto que duplica la existente en nuestro país.

No decía que es el más perfecto de los impuestos al consumo, pero requiere una muy buena administración fiscal y una muy buena administración de parte de los contribuyentes. La situación económica en nuestro país —en especial la del sector agropecuario— no permite una buena organización en la propiedad y mediana empresa, y entonces este impuesto —como está estructurado en estos momentos— si bien sigue los principios básicos de la estructura que debería adoptar, no se corresponde con la realidad argentina.

Tendríamos que dar un paso atrás con el tratamiento al sector primario, de los servicios, e incluso con el que ahora se propone para los nuevos responsables. La consideración de estos tres aspectos es fundamental para que funcione el impuesto.

Francia es el país que mejor recauda el IVA.

Quiero aprovechar para hacer una acotación sobre lo que decía el señor diputado Cavaglia. En la DGI tenemos entre 10 y 12 mil agentes mal pagados. La administración francesa tiene casi 80 mil, si bien es cierto que Francia tiene el doble de población que nuestro país. España, que tiene una cantidad de población similar a la nuestra, tiene entre 25 y 30 mil funcionarios bien contronados y bien pagados, aunque la administración española no es excelsa en este sentido. Esta comparación denota las limitaciones que tiene nuestra administración tributaria.

Decía, entonces, que el tratamiento de aquellos tres factores es fundamental para que el impuesto funcione. Sobre la generalización al sector privado hemos dicho rotundamente que buena parte de la generalización que se ha hecho a los servicios no reporta mayores recaudaciones, acarrea una enorme complejidad a la administración tributaria e incrementa la evasión. Eso es inevitable, por más sistemas de retención que inventemos, porque el tratamiento que se propone para los nuevos contribuyentes va a contrapelo de la legislación comparada. Francia, que tiene el sistema más perfecto en materia de IVA, incluye dentro del régimen general apenas al treinta y pico por ciento de los contribuyentes. Nosotros, con una administración defectuosa, tendremos a partir de esta reforma al ciento por ciento de los contribuyentes dentro del ámbito del impuesto al valor agregado, ya que a nadie le conviene permanecer como responsable no inscrito.

La figura del responsable en el IVA es sumamente importante. No cualquiera debería poder ser responsable inscrito; ello debería estar condicionado incluso a una autorización previa de la DGI. Aquí estamos permitiendo que todo el mundo se incorpore al sistema. La DGI va a tener un millón y medio —o no sé qué número será el definitivo— de contribuyentes. ¿Quién

va a controlarlos? Ni aun un sistema inteligente, en el que se incrementen los servicios, etcétera, servirá, porque en definitiva va a tratar de compulsar débitos con créditos fiscales. Ya hay muchas empresas pequeñas que en este momento se están salvando utilizando la mecánica de facturar el IVA y no ingresarlo. Por otra parte, en las circunstancias que hoy vive nuestro país, el actual régimen penal tributario tiene escasas posibilidades de éxito.

Hay otros dos temas importantes: el de débitos bancarios y el de procedimiento tributario. Pero antes de retomar a ellos quisiera hacer una reflexión que creo es compartida entre más colegas. La evasión fiscal en la Argentina se concentra en cuatro impuestos. El primero de ellos es el IVA, que es un tributo fundamental para que nuestro sistema funcione. Si el impuesto al valor agregado funcionara como es debido, el doctor Tacchi no estaría aquí porque las necesidades del fisco quedarían perfectamente satisfechas, y creo que hasta sobran algo para distribuir.

El otro tipo de evasión es el régimen provisional, que quizá no esté atrayendo la atención debida. La recaudación del sistema no es, ni lejanamente, similar a la que obtienen otras administraciones que manejan tasas equivalentes.

El tercer gran foco de incumplimiento se da en torno del impuesto inmobiliario, pésimamente administrado por las provincias. Aqué las administraciones provinciales tienen que hacer su "mea culpa".

Por último, y como cuarto foco de evasión, encontramos al impuesto a los ingresos brutos. En esto las provincias también tienen que hacer su "mea culpa", porque la recaudación no condice, ni de lejos, con la que debería producir este tributo.

En esos cuatro aspectos se concentra la evasión fiscal que aqueja a nuestro sistema tributario.

Hablemos ahora del impuesto a los débitos bancarios. En este momento, es un mal necesario. Pero es un mal necesario acotado en cuanto a su tasa e implementación. Es un impuesto que se recauda bien, y que cuando la tasa era del 7 por mil le estaba dando al Estado casi mil millones de dólares. ¿Pero qué ocurre? Llevado a la tasa del 12 por mil, en un sistema financiero por el que no pasan todas las transacciones, que es un desiderátum dentro de nuestra economía, esto alentará indudablemente las percepciones que se hacen en efectivo, es decir, pagos y cobros en efectivo.

Yo creo que esto no es demasiado alentador dentro del contexto de nuestra economía. Por otra parte, es algo que ya ocurría con la tasa del 7 por mil. Consecuentemente, pienso que podemos preguntarnos qué pasará a partir de una tasa del 12 por mil.

Otro inconveniente que se plantea con relación a este tributo está dado por el hecho de que si bien el incremento de tasas se aplicará en un 50 por ciento contra el IVA —lo cual podríamos aceptar— y en otro 50 por ciento contra el impuesto a las ganancias, al no existir prácticamente en nuestra economía una rentabilidad más o menos aceptable, en la mayoría de los casos —incluso con el impuesto a los activos— la ren-

tabilidad va a quedar virtualmente anulada. Por ende, esto prácticamente será imposible de ser absorbido.

Esta tasa, a mi juicio, no está de acuerdo con las necesidades económicas, ya que todo sistema tributario funciona dentro de un marco macroeconómico. Además, a pesar de que nosotros le otorgamos una gran importancia al sistema tributario, no podemos dejar de reconocer que sólo se trata de un apéndice de la política económica. Por lo tanto, considero que esto va a contrapelo de lo que se quiere hacer en materia de política económica.

Considero que si se persiste en esta posición, tendría que poder aplicarse contra el impuesto a los activos o contra el impuesto al valor agregado. De lo contrario, esto se transformaría simplemente en un elemento más de presión tributaria, y en tal sentido, pienso que ese no es el objetivo que tanto los señores legisladores como el doctor Tacchi persiguen a través de esta reforma fiscal. Estas son realidades. Aclaro que no representamos a ningún sector económico en particular; sólo queremos que esto funcione.

También quisiera referirme al impuesto a la transferencia de inmuebles, de cuya implementación en parte somos responsables. En tal sentido, el cálculo que nosotros hemos efectuado en lo concerniente a la recaudación que se obtendrá por este tributo será de 50 millones de dólares. Creemos que la recaudación de este impuesto va a ser mala porque ese es, precisamente, el carácter que tiene la gravabilidad en materia de inmuebles.

En lo que se refiere a las modificaciones previstas para la Ley de Procedimiento Tributario, hay que destacar tres aspectos: la modificación que se introduce en materia de clausuras, la llamada "ley tapón" y, finalmente, las modificaciones que se propician en materia de presunciones.

La denominada "ley tapón" constituye una incorporación que, en el momento de su proyección, me pareció que era un elemento realmente inteligente. Si la memoria no me falla ello tuvo lugar en 1985, y estuvo a cargo de los mexicanos. En tal sentido, realmente debo señalar que no he tenido oportunidad de conversar con algunos colegas mexicanos para saber cómo está funcionando el sistema referido al impuesto sobre los activos. No obstante, pretender que esto suministre algún resultado en el actual contexto implica apartarse de la realidad de nuestra economía y de nuestro sistema tributario.

Esto sólo es posible de lograr luego del establecimiento de una amplia regularización en materia tributaria. Esta —que le vendría muy bien a las autoridades, porque la última se implementó muy mal en 1985 o 1986— en su oportunidad arrojó una cifra de recaudación por demás interesante. En este momento no sería una cifra como para descartar. Pero con la concatenación que tienen las declaraciones juradas, pensar que un contribuyente regularizará su situación actual para que no le verifiquen los años anteriores es algo que está totalmente desvinculado de la realidad. Este es mi punto de vista, y creo que esto se verá reflejado en los hechos. Tiene que haber una regularización, pero hacerla ahora es "quemarla" porque no se dan las condi-

ciones necesarias para efectuarla. Una regularización tributaria debe llevarse a cabo en un momento en que exista cierto grado de expansión económica porque de lo contrario, los resultados no estarán acordes con las expectativas.

Implementar esta ley tapón no tendrá ningún significado; será muy lindo en teoría y quedará escrito pero me temo que desde el punto de vista tributario, va a ser un motor más para seguir fomentando la corrupción de una gran cantidad de funcionarios que lamentablemente pululan en las administraciones tributarias.

En materia de clausura, soy partidario de su aplicación pero como un reemplazo a las sanciones que prevía la ley penal tributaria, que era un régimen más ágil. En este momento, las penas de clausura por meras infracciones formales, según las palabras de un representante del sector agropecuario, traería aparejados diversos problemas en el sector para pagar a un profesional en ciencias económicas que, por otra parte, no puede ser un experto porque eso costaría muchísimo más; tampoco pueden tener en condiciones los elementos que a diario llenan páginas del boletín oficial. Ni los especialistas podemos computar todas las resoluciones que lleva la DGI. No quiero pensar qué ocurre con profesionales que hacen lo que un médico clínico; qué puede hacer un contribuyente que no tiene posibilidades de contar con ningún tipo de asesoramiento. En consecuencia, creo que las sanciones de clausura son totalmente desproporcionadas con respecto a las posibilidades de los contribuyentes y las infracciones cometidas.

Además, tanto el señor diputado Cortese como los demás integrantes de la Comisión de Legislación Penal habrán podido observar —yo no soy hombre de derecho ni quiero inmiscuirme en el tema, pero nuestra especialidad es la que más se vincula con esa rama— que los antecedentes existentes nos llevan a pensar que la justicia es muy reacia a que se le corte la posibilidad al contribuyente de apelar a la justicia ordinaria. Sostener que esto va a ser al solo efecto devolutivo en materia de clausura es lo mismo que pensar que el contribuyente iniciará una acción por daños y perjuicios por lo que le ocasiona la clausura, sin saber cuándo va a obtener la compensación. No creo que esto pueda prosperar llevado al ámbito de la justicia, como en reiteradas oportunidades lo manifestó la propia Corte Suprema. Más aún; considero que esta medida no debería prosperar porque además deja en inferioridad de condiciones al pequeño contribuyente, ya que el contribuyente mediano se comunicará con su asesor letrado y podrá zafar con bastante tranquilidad interponiendo un recurso de amparo.

Por último, voy a hacer una consideración breve —sin entrar en otros tópicos— en materia de presunciones. La presunción de pleno derecho y la determinación de una diferencia al contribuyente que la DGI pueda extender a los restantes periodos no prescritos, a mi entender tampoco puede prosperar porque las presunciones en materia tributaria tienen que ser razonables y ésta es totalmente irrazonable.

Sr. Figueras. — ¿Cómo piensa que debe considerarse el impuesto a los activos cobrado a las empresas con-

signatarias de ganado o acopiadoras de cereales atendiendo a que en ellas existen permanentemente ventas realizadas a su nombre que automáticamente pasan a sus activos, aunque en realidad pertenecen a los productores que entregaron esos bienes?

Sr. Ballesteros.— Cuando se instrumentó el impuesto a los activos hubo una presentación a este respecto y no fue acogida. Indudablemente, este impuesto castiga a todos aquellos que tienen capital intensivo, de modo que en general castiga al sector agropecuario y al industrial. Por eso digo que dentro de las acotaciones que se han hecho respecto a la regresividad y demás, aplicar una tasa del 4 por ciento en materia de servicios —aunque inclusive perjudique a los profesionales que podrían llegar a estar gravados— es descabellado porque en ese sector no se requiere capital intensivo.

Creo que cuando se trató este tema solamente se otorgó un tratamiento especial al sector financiero, porque después de realizar un análisis se llegó a la conclusión de que el patrimonio neto con respecto a su activo era de apenas un 15 por ciento. Luego no se acogió ninguna otra presentación, porque no se quiso dejar la puerta abierta para conceder tratamientos excepcionales a otras actividades. Este era un sector que aparentemente tenía fundados argumentos para sostener que dada las modalidades operatorias el impuesto era excesivo. Pero reitero: se hizo un corte en ese momento porque las presentaciones y las presiones eran insistentes, lo cual no significa que ahora los señores legisladores no puedan modificarlo. Se tomó la determinación de aplicar el impuesto a todos los sectores, aunque hubiera algunos que resultarían perjudicados, porque de lo contrario habría que haber considerado por ejemplo la situación de las compañías de seguro, etcétera.

Se hizo un análisis global macroeconómico y se llegó a la conclusión de que el nivel de endeudamiento del sector empresario argentino era muy bajo —alrededor de 30 o 35 por ciento— y que con esa tasa se iba a mover.

El impuesto era injusto, pero se decidió que la injusticia fuera para todos, y no se quiso dejar la puerta abierta para introducir nuevas exenciones. Pero reitero que eso no quiere decir que ahora los señores legisladores no puedan contemplar casos particulares.

Sr. Baglini.— Vamos a aprovechar la presencia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porque en oportunidad de anteriores reformas impositivas siempre ha hecho aportes interesantes a esta comisión.

Antes de comenzar con las preguntas, no quisiera dejar de aclarar algunas apreciaciones del presidente del consejo en el sentido del tiempo que lleva la Dirección General Impositiva sin funcionar y la falta de denuncias en materia penal tributaria. Esas manifestaciones no pueden extenderse al generoso lapso de seis años atrás como él ha dicho, porque en el medio quedan el año 1986, récord en recaudación tributaria, y la denuncia contra Koner-Salgado que ahora está en los tribunales a raíz de una actuación de la DGI.

Desde que asumió el gobierno justicialista ha aparecido una familia numerosa de tributos, que forma parte de esta danza clásica que hemos calificado como el

“minué” de impuestos que aparecen y desaparecen, impuestos que se establecen, se derogan, luego se restablecen parcialmente por decreto, posteriormente se derogan por ley y finalmente se restablecen por ley o se intenta hacerlo como en este caso.

Lo más interesante del día de hoy es que hemos asistido al reconocimiento de la paternidad —en la era de Rapanelli— del impuesto a los activos, que hasta ahora era de “mater certa” —porque lo sancionó el Parlamento— pero de paternidad desconocida. Espero que en lo sucesivo la paternidad de los impuestos sea reconocida, para saber a quién adjudicar el mérito de estos tributos que están preocupando a la sociedad.

Digo que es muy importante porque también hay hijos de padre y madre desconocidos que aparecen y desaparecen. Seguramente los señores diputados, y tal vez muchos de los asistentes, se acuerden del famoso artículo 68 de la Ley de Emergencia Económica. Este artículo posibilitaba un mecanismo de transferencia y de reclamaciones de créditos tributarios, que ahora reaparecen bajo la forma del artículo 111, segundo párrafo modificado; la tercera reaparición que tiene este mecanismo de padre desconocido.

Quiero concentrarme en dos o tres cosas que merecen un análisis. En primer lugar, no apelando a mi memoria sino al profuso archivo que es lo único que me salva, me he encontrado con algunos artículos del doctor Tacchi que fueron publicados antes de que asumiera como subsecretario. Uno de éstos, publicado en el “Cronista Comercial”, titulado *Un juego de suma cero*, termina con una interesante frase: “Debe el gobierno, ya que las condiciones dadas posibilitan el clima adecuado, actuar energicamente contra el comportamiento evasivo persiguiendo el logro de la obtención de mayores recursos por esta vía más que por la creación de nuevos impuestos y/o incrementos de las alícuotas vigentes”.

En uno de los artículos más modernos, horas antes de ser subsecretario, el 3 de enero de 1991, en el “Cronista Comercial” dice entre otras cosas que habría que brindar plena vigencia a un sistema tributario global, cumplible, administrable, coherente, simple y equitativo que fomente la movilidad social ascendente, la inversión de riesgo, no penalice la capitalización individual, facilite el regreso de capitales fugados, respete la eficiencia económica, el secreto fiscal, los derechos adquiridos y la elemental observancia del debido proceso. Agrega que este sistema tributario en sentido amplio abarca la faz impositiva, aduanera, previsional y parafiscal, tanto de la Nación como de las provincias y los municipios.

En otra parte dice que hay que garantizar la existencia de normas de sanción, de prevención y de presunción de la evasión que se constituyan en sí mismas receptoras de una justicia jurídica necesaria para estimular el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En otro artículo posterior dice lo siguiente: “Es importante destacar que el clima persecutorio que trasunta la Ley Penal Tributaria está alejado de la realidad socioeconómica predominante que presenta una profunda disociación entre una escala de valores morales aceptada implícitamente y el comportamiento social generalizado y explícito.”

"Así podríamos continuar interminablemente si, ante un problema que presenta múltiples aristas causales, se busca contrarrestarlo con medidas aisladas (tarjeta de identificación tributaria, día de sinceramiento, Loteriva, etcétera".

Entonces, atento a todo el capítulo de procedimiento tributario, con presunciones de derecho, es decir que no pueden ser desmentidas en la fase administrativa en contra del contribuyente; con las modificaciones en lo relativo a la clausura que tiene a mano la autoridad administrativa y que le quita sentido a la apelación judicial que no puede resolver este problema; con la incidencia del impuesto a los activos en la significación que adquiere la alícuota; con la nueva alícuota al impuesto a los débitos bancarios; con la modificación del responsable no inscripto que conlleva la posibilidad de una evasión a niveles eventualmente insospechables para el manejo del IVA, porque si bien en épocas pasadas —hace diez o doce años— tuvimos una alícuota del 25 por ciento para el IVA, era para objetos altamente suntuarios y no para el teléfono, la luz o el agua corriente, quiero saber si el Consorcio Profesional en Ciencias Económicas estima que estamos acercándonos a este sistema cumplible, administrable, coherente, simple, equitativo, que no penaliza la capitalización individual, que facilita el regreso de capitales, que respeta la eficiencia económica; y si esto del "quién es quién" es compatible con el respeto del secreto fiscal, los derechos adquiridos y las elementales normas del debido proceso.

Los aspectos que estoy señalando se vinculan con una primera preocupación que tenemos quienes estamos aquí. Cuando un secretario de Hacienda o un ministro de Economía se encuentra con que la caja no da más sabe que debe arreglar el problema de cualquier manera, y tiene diferentes alternativas para hacerlo. Pero desde el punto de vista político no es indiferente la forma en que lo haga, sobre todo cuando se está actuando en el marco de una propuesta que aspira a establecer reglas de juego para largo plazo, reglas de juego que no pueden ser contradichas —o deben serlo lo menos posible— por las medidas de corto plazo que se dispongan para solucionar el problema de caja.

Aquí se han hecho ya algunas precisiones que son importantes. Se ha hablado, por ejemplo, del hecho de que se ha recurrido a las peores manifestaciones de capacidad contributiva, y de la necesidad del retroceso, todo lo que en cierto modo compartimos porque ya antes de que se propusiera esta reforma, y en base a la experiencia que hemos ido acumulando en esta comisión, habíamos advertido que no se debía avanzar sobre el sector primario o sobre el sector de los servicios en tanto y en cuanto no estuviera consolidado el primer paso desde el cual la DGI y toda la estructura tributaria en general deben partir para poder alcanzar un nivel mínimo de eficiencia.

Ya durante la reunión inicial que mantuvimos con el señor subsecretario manifestamos nuestras dudas acerca de que el "quién es quién", con la poca disponibilidad de medios que tiene actualmente la DGI, pudiera funcionar. No creo que en un sistema como el que hoy tenemos en la Argentina pueda aspirarse a que haya un mejor cumplimiento voluntario en el pago de los tributos por el hecho de que se publiquen las listas de cuánto

ha pagado cada contribuyente, porque además de la sobrecarga de la DGI debemos tener en cuenta que existen múltiples leyes que posibilitan "nichos" de evasión o elusión —con lo cual la situación de empresas que están produciendo lo mismo puede ser diferente, por tener una y no la otra promoción industrial o por estar alguna de ellas incluida en regímenes sectoriales de promoción—; y que la movilidad excesiva de la legislación tributaria hacen que una empresa pueda estar abonando impuestos que ya están derogados pero que mantienen alguna supervivencia en el tiempo.

Todos estos datos confirman una información muy difícil de precisar, aun para un competidor. Esta es una primera objeción que planteamos al tema del "quién es quién". La pregunta que a veces no hacemos es si todo esto no tendría que hacerlo la DGI. ¿Quién podría estar en mejores condiciones para saber si la cifra que ha declarado el contribuyente es la correcta? ¿Por qué un competidor estaría en mejor posición?

El juego de las presunciones también tiene sus dificultades. Realmente es muy difícil la lectura del capítulo. Se advierte, sin embargo, que hay muchas presunciones en contra del contribuyente. Por ejemplo, si ha hecho una mala declaración de impuestos se presume que en los periodos anteriores existió la misma situación. Es posible que en esto se hayan incluido disposiciones que parecen haber sido diseñadas para el impuesto a las ganancias, —cuyo mecanismo de liquidación es muy diferente al de los impuestos a los cuales se pretende aplicar tales disposiciones—, para impuestos que en algunos casos han desaparecido —como es el caso de capitales y patrimonio neto— y para los impuestos a los combustibles e internos, que son muy distintos al IVA en lo que se refiere a declaración. Esto surge claramente del párrafo IV del artículo, que establece que en el caso de declaración inexacta "se presume que las declaraciones juradas del resto de los periodos no prescritos adolecen de inexactitud equivalente en el mismo porcentaje."; y continúa haciendo referencia a un mecanismo que parece corresponder a impuestos autoliquidables —como es el impuesto a las ganancias— y que no se ajusta a los demás tributos.

También quisiera hacer alguna observación con relación a una novedad que aparece en el proyecto: la privatización del cobro de impuestos, y sobre todo, la privatización de créditos que pudiera tener el organismo fiscal derivados de diferimientos promocionales de impuestos. Se prevé la posibilidad de llevar a cabo dicha privatización en cualquier estado en que estén los pleitos, es decir que puede aplicarse a casos que ya tienen sentencia, lo cual durante la reunión anterior suscitó la preocupación de esta comisión.

Quisiera escuchar algún comentario o puntualización respecto de la incidencia que tiene el recargo en la posición del contribuyente o responsable no inscripto, que se encuentra agravada con relación a la última legislación que habíamos aprobado. Por otra parte, quisiera recibir alguna definición acerca de lo que se hará con el contribuyente no inscripto. Esto es algo que ya se lo hemos planteado al señor subsecretario de Finanzas Públicas en el transcurso de la reunión celebrada por esta comisión la semana pasada. Nosotros pensamos que el gobierno debe tomar alguna determinación acerca de

lo que quiere hacer con el pequeño contribuyente, ya que ése es el problema más difícil que se presenta en torno al tema del impuesto al valor agregado.

Con relación a este contribuyente, nosotros quisiéramos saber si debe ser considerado como un sujeto cuasidelineante a perseguir o si, por el contrario, hay que apartarlo por razones de seguridad tributaria. Por lo tanto, quisiéramos escuchar alguna opinión sobre el tema, a fin de poder avanzar en el análisis de este capítulo y en el de los problemas tributarios que se pueden suscitarse.

Sr. Presidente (Guerrero). — Tíque la palabra el doctor Ballesteros.

Sr. Ballesteros. — Quisiera efectuar algunas acotaciones. En primer lugar, desco señalar que si bien desconozco las razones en virtud de las cuales las cifras aparecen modificadas en nuestro país, el récord en materia de recaudación —en realidad, esto habría que preguntárselo al doctor Tacchi— se ubica entre los años 1979 y 1980, alcanzándose en este último año 28 puntos del PBI. De todas maneras, también es posible apreciar cifras interesantes entre 1985 y 1986, ya que la recaudación alcanzada en dicho período llegó a 23 puntos del PBI, lo que significa un valor que se halla por encima del promedio, que es de aproximadamente 20 puntos.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la comisión, diputado Jorge Rubén Matzkin.

Sr. Ballesteros. — En segundo lugar, quisiera recordar al señor diputado Baglini que el caso de Koner-Salgado tuvo lugar sin la aplicación de la actual ley penal tributaria. Esto significa que igualmente se disponía de mecanismos distintos.

Con relación a las presunciones de derecho que se pretende incorporar a la ley, quisiera señalar sin eufemismos —aunque sin ánimo de ser agresivo— que en mi opinión constituyen un verdadero disparate, o bien, resultan lisa y llanamente inoperantes. Estas modificaciones resultarían coherentes en un sistema de administración simplificada.

Sr. Presidente (Matzkin). — Sin quererlo, creo que está logrando la agresividad necesaria. Va muy bien en ese sentido. *(Risas.)*

Sr. Ballesteros. — Por eso señalé anteriormente que no iba a utilizar eufemismos. Por otra parte, se trata de algo que se podrá escuchar decir a la totalidad de los especialistas en materia tributaria, fundándose además en antecedentes jurisprudenciales.

En lo que se refiere a la posibilidad de que este sistema resulte o no administrable y que pueda o no ser cumplido, debo adelantar desde ya mi respuesta negativa en tal sentido. En general, sólo lo será por la parte correspondiente al impuesto sobre los activos y por la del impuesto sobre los débitos bancarios.

En materia de responsables no inscritos, creo que no debemos confundirnos. Esto no va a generar una mayor presión tributaria, por la sencilla razón de que todo el mundo tratará de inscribirse. Evidentemente, esto va en contra de las recomendaciones que existen con relación a este impuesto, ya que se trata de administrar un sector amplio en cuanto a su número pero bajo en cuanto a la

recaudación. Por consiguiente, considerando la posibilidad de tener al responsable no inscrito e ingresar el impuesto —que es uno de los caminos a seguir que existen—, yo me inclinaría por la alternativa utilizada por los belgas, consistente en la utilización de la figura del responsable sustituto, a fin de que se ingrese el impuesto a través de un porcentaje estimado del valor agregado del responsable no inscrito. Creo que esto constituye una posibilidad inteligente, aunque con ciertas inequidades que se pueden crear al respecto, por lo que yo procedería al revés: en lugar de recibir a todos los responsables no inscritos establecería normas precisas para dar la posibilidad al pequeño contribuyente de ser responsable inscrito. En otras palabras, ese pequeño contribuyente que pasa a ser responsable inscrito debería tener condiciones necesarias o una organización administrativa, e incluso un respaldo patrimonial que le asegure al fisco que va a cumplir con sus obligaciones tributarias. Pero vamos en contra de lo que recomienda lo más granado de la doctrina en materia tributaria y de lo que nos enseña la legislación comparada. En Francia, la recaudación en materia del impuesto al valor agregado representa el 9 por ciento del producto bruto interno, y dentro del régimen general se halla aproximadamente un 30 por ciento de responsables. Además, la recaudación se practica mediante sistemas indiciarios que se negocian, de alguna manera, con las distintas cámaras empresarias. Ellos tienen una posibilidad que para nosotros es inaccesible.

Por otra parte, los italianos, con una tasa similar, establecen un tratamiento especial para algún tipo de productos de primera necesidad; aplican una tasa más reducida —en Italia es del 17 por ciento mientras que en Francia es del 18,6 por ciento—, y la recaudación representa 5 puntos del producto bruto interno. Los especialistas italianos sostienen que esa menor recaudación —cuatro puntos menos que en Francia— se debe fundamentalmente a que en su país la mayoría de los contribuyentes se encuentran dentro del régimen general; es decir que no tienen un tratamiento adecuado, como lo tienen los franceses, en materia de pequeños contribuyentes.

Otro tema es el de la privatización del cobro de impuestos y transferencia de créditos. Con respecto a esto no tengo una idea demasiado formada, pero me da la sensación de que existe gran inoperancia por parte de los representantes del fisco tanto en el orden nacional como provincial. También creo que el Estado reconoce esta ineficiencia y trata, de alguna manera, de lograr mayor eficiencia en llevar adelante las ejecuciones fiscales. Lo mismo sucede en materia de transferencia de créditos: se intenta superar la ineficiencia que es proverbial en el Estado.

Sr. Bugueiro. — Por otra parte, en cuanto a la privatización, inspección o fiscalización tributaria debo aclarar que lo está realizando la provincia del Neuquén. Esta provincia está seleccionando contadores públicos en el ámbito de la Capital Federal para hacer el control de aquellos contribuyentes de convenios multilaterales que están radicados en la Capital Federal.

Sr. Baglini. — No es el ámbito de la competencia provincial de los contadores sino el ámbito que prevé la

privatización de los créditos fiscales que pueden ser ejecutados por abogados. Digo esto porque tuve la experiencia de ser abogado del Estado, y este tema es tratado deleznablemente. Recuerdo lo que pasaba en una oportunidad en que me desempeñaba como abogado en un banco: no era que los abogados no querían cobrar, todo lo contrario: éramos verdaderas fieras para terminar con los créditos pero siempre venía uno que paraba el remate cinco minutos antes. Por eso, me gustaría saber qué puede pasar con la privatización, no por la inspección o la fiscalización —porque este sería otro problema— sino por el tema de los créditos.

Puede tratarse, por ejemplo, de créditos que tengan sentencia.

Otro asunto es el "quién es quién".

Sr. Ballesteros. — Con respecto a este ajuste tributario, desearía realizar una explicación. Evidentemente, creo que no podemos medir un sistema tributario si solamente estamos modificando las alícuotas de los impuestos. Obviamente, esto es producto de un problema de caja y se ha tomado el camino de aumentar las alícuotas de estos impuestos. Quizá existía otra alternativa consistente en dejar estos impuestos tal cual están ahora y tomar de alguna forma otros niveles de capacidad contributiva para sobrelevar este bache.

Respecto del "quién es quién", creo que con el sistema que está llevando la Dirección General Impositiva es imposible en la actualidad publicar la lista de contribuyentes y el monto del pago de sus impuestos. Esto se nota porque evidentemente la acción de fiscalización de un organismo o de la administración fiscal no consiste solamente en tener inspectores en la calle o alguna forma de verificadores de obligaciones tributarias, sino que la propia administración, en forma interna, tiene que enviar cartas notificando problemas que se han detectado por falta de pago o algún tipo de defecto en su declaración jurada, como ocurre en otras administraciones fiscales eficientes. Entonces sí podría publicar la lista de contribuyentes y cuánto pagó cada uno de impuestos. Por ahora, solamente es voluntarismo.

Sr. Presidente (Matzkin). — Agradecemos al Consejo Profesional de Ciencias Económicas los comentarios finales que hiciera como consecuencia del análisis y las preguntas que lo formulara el señor representante de la virginidad tributaria.

Sr. González (L. M.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Matzkin). — Tiene la palabra el señor diputado González.

Sr. González (L. M.). — Señor presidente: quisiera preguntar si la Sociedad Rural Argentina ha sido invitada a esta reunión, porque cuando este tema se discutió con anterioridad, de las sesenta organizaciones que estuvieron presentes ella fue la única que acompañó al proyecto de la mayoría que establecía el IVA al campo y la generalización de dicho impuesto a los servicios. Por eso creo que la experiencia de esa entidad en la aplicación de la ley que acompañó puede ayudar a que no se repita que lo que se dispone en la comisión luego caiga en saco roto cuando vamos al recinto.

Sr. Presidente (Matzkin). — La Sociedad Rural Argentina ha sido invitada a esta reunión. Cuando llegue

su turno para exponer el señor diputado podrá plantearle sus inquietudes.

Tiene la palabra el señor representante de ADEBA.

Sr. Di Pasquo. — Con respecto a los conceptos generales sobre esta reforma, nos atenemos a lo que se ha cementado con anterioridad en el sentido de que ADEBA considera que sería mucho más lógico pensar en una reforma a mediano o largo plazo en lugar de seguir poniendo parches a un sistema fiscal que ya no resiste una nueva reforma.

Vamos a ser muy concretos y referimos a los temas específicos que interesan a nuestra actividad. El primer punto que queremos tocar es el relativo al impuesto sobre los débitos en cuenta corriente y otras operatorias. No es la primera vez que ADEBA hace presentaciones a esta comisión referidas específicamente al efecto que tiene el incremento de la alícuota en la recaudación.

En 1989 hicimos la presentación de un trabajo donde había un análisis de la evolución de la recaudación según distintos niveles de alícuota —1, 2 y 7 por mil— y el efecto que tenía en los niveles de depósitos bancarios y en la velocidad de rotación de los mismos. Llegábamos a la conclusión de que la única alícuota razonable y soportable por los usuarios de cuentas corrientes no podía superar la del 2 por mil. Desde el momento que se aplicó la alícuota del 2 por mil hubo récord de recaudación en este impuesto.

Si tomamos el período en que se aplicó la alícuota del 7 por mil, tomando la recaudación genuina —esto es, descontando lo que se utiliza como pago a cuenta de otros impuestos—, veremos que la recaudación promedio no llegaba a la tercera parte de lo que se recaudaba cuando la alícuota era del 2 por mil.

Cuando se intentó bajar la alícuota del 7 por mil al 3 por mil, nosotros aconsejamos que se redujera aún más y se la llevara al 2 por mil.

Otro de los aspectos que nosotros queríamos mencionar es el aumento de la alícuota que está previsto que se compute como pago a cuenta de diversos impuestos. Si se analiza la utilización de la cuenta corriente según los usuarios, inscritos, no inscritos, responsables del impuesto a las ganancias y demás, se verá cómo evidentemente este 9 por mil que se intenta establecer como pago a cuenta de otros impuestos va a determinar que no se recaude ni el 1,2 ni el 0,3 que se venía recaudando hasta ahora.

Específicamente, con respecto a las entidades financieras, éstas son sujetos pasivos de un impuesto especial desde el 1º de enero de 1989, que sustituye al IVA. Es el gravamen sobre los servicios financieros que está reconocido como sustituto del IVA para una actividad especial en donde es muy difícil aplicar este impuesto.

Nosotros pensamos que si se admite y se mantiene la posibilidad de aplicar un impuesto de esta naturaleza, debería contemplarse para las entidades financieras la posibilidad de computar el incremento de la tasa del impuesto a los débitos bancarios como pago a cuenta del impuesto sobre los servicios financieros.

Con esto, lo único que se va a lograr es una disminución en la recaudación. Me permito traer a modo de

ejemplo, y antes de que el impuesto esté sancionado, un artículo que se publicó este último domingo en el diario "Clarín", titulado *Cómo vivir sin chequera*. En éste figuran una serie de elucubraciones para dejar de usar las cuentas corrientes y no pagar el 1,2. No hay duda de que una alícuota de esa naturaleza va incentivar a todos los particulares a usar el efectivo.

Si realmente no se quiere aplicar mayores impuestos a los que ahora ya pagan, creemos que es razonable que se permita —si se mantiene esta postura— que el incremento de la alícuota sea computable contra cualquier impuesto y en la primera oportunidad que se presente. Esta sería una forma de atenuar el efecto negativo que va a tener no solamente la recaudación sino la operatoria de los bancos a través de la salida de depósitos en cuenta corriente.

Otro aspecto que nos preocupa terriblemente —y sobre el cual hemos escuchado algunas observaciones— es el impuesto al valor agregado sobre los servicios. Siendo que los bancos no tienen la posibilidad de inscribirse en el IVA porque su actividad está exenta del impuesto, creemos que hacer incidir en cabeza de los bancos un impuesto del 9 por ciento adicional por el IVA es descolocar totalmente a la actividad financiera.

En el mismo sentido que lo pedimos para el impuesto a los débitos bancarios, solicitamos que el incremento de la tasa del IVA pueda ser computado como pago a cuenta del impuesto sobre los servicios financieros.

Debe admitirse que esa tasa adicional sea computable como pago a cuenta del gravamen sobre los servicios financieros. Es preciso que así sea porque los contribuyentes no inscritos tienen la posibilidad de inscribirse y evitar así ese adicional, pero los bancos no pueden inscribirse para el IVA y por lo tanto esto se traducirá para ellos en un costo mayor.

Con respecto al impuesto a los activos debemos recordar que cuando se estaba considerando la implantación de ese nuevo gravamen los bancos hicieron presentaciones y lograron que, en consideración a su particular situación como instituciones que trabajan con fondos de terceros, se les aplicara una tasa que razonablemente pudieran soportar, ya que el rendimiento del sector financiero, en relación con sus activos, es muy inferior al de otras actividades. Al margen de ello, es evidente que hay otras instituciones, como por ejemplo las entidades financieras, que también trabajan con capitales de terceros y cuyo caso tampoco se contempla para la aplicación de este gravamen. De todas maneras, lo que nos interesa destacar es que duplicar la tasa implica crear para los bancos lo mismo que para otras actividades: un costo verdaderamente insostenible conforme a los parámetros —nacionales e internacionales— de rentabilidad sobre activos con que se manejan las entidades financieras. Al respecto, ya en nuestra anterior presentación ofrecimos demostraciones acerca de los rendimientos que en los últimos años han tenido los bancos asociados a ADEBA, y del efecto que tiene este impuesto sobre la rentabilidad.

Sobre los demás impuestos expresamos nuestra opinión en la presentación escrita que hacemos a la comisión y no es necesario por lo tanto que nos explyemos

en esos aspectos. En lo que hace a la compraventa, cambio y permuta de divisas, y al impuesto de sellos, creemos que es posible perfeccionar ciertas disposiciones, pero no viene al caso entrar ahora en el detalle técnico.

Si queremos, en cambio, entrar en el detalle técnico de la ley de procedimiento tributario. En este sentido simplemente nos interesa recordar que en los últimos años se han llevado a cabo cinco o seis reformas de dicha ley, que en muchos casos han significado la creación de nuevas obligaciones para los agentes de retención, percepción o información. Se creó el Sistema Informativo para Movimientos en cuentas corrientes de los bancos, el SITER, e infinidad de otros sistemas de información. No obstante ello, los agentes de retención, percepción, recaudación o información no han logrado contar, dentro del régimen de procedimientos, con un sistema que resguarde la carga pública que soportan; y ni siquiera tienen derecho —a pesar de que son solidariamente responsables con el responsable directo de estos impuestos— a la consulta vinculante sobre aspectos conflictivos. Creemos que este aspecto debería ser contemplado dentro de la reforma que se propicia.

Sr. Baglini. — En la anterior presentación de ADEBA, agregada al Diario de Sesiones del 30 de noviembre de 1989, se expresa que el rendimiento promedio sobre activos, observado a través del tiempo, es del uno por ciento. Me gustaría saber si todavía se mantienen las conclusiones de aquel estudio.

Sr. Di Pasquo. — Entendemos que sí.

Sr. Baglini. — Hay otra cuestión que me interesa. En lo que respecta al IVA ustedes han puntualizado que esta tasa diferencial del 25 por ciento que será aplicada a servicios tales como las telecomunicaciones, la telefonía, el agua, el gas, etcétera, constituye para los bancos un recargo difícil de trasladar, en virtud de que no tienen la posibilidad de inscribirse. Ya la semana pasada, cuando nos visitó el señor subsecretario, manifestamos esta observación. Debe tenerse en cuenta, además, que la actividad bancaria tiene en la actualidad un gravamen específico que va a sustituir el IVA, pero existen otras actividades —como la educación y los transportes— que se encuentran exentas y que, a pesar de prestar servicios universales y esenciales, estarán después de esta reforma en la misma posición.

¿Ustedes pueden garantizar que esto representará un mayor costo trasladado directamente hacia el usuario de los servicios financieros?

Sr. Di Pasquo. — Podemos asegurar que representará un costo mayor, pero no me animo a afirmar que exista la posibilidad de trasladarlo. No estamos pidiendo el recupero como pago a cuenta del 25 por ciento. El aumento de la alícuota del 15,6 por ciento al 16 por ciento es un costo ya asumido. Los contribuyentes del IVA no disponen de la regla del tope, o sea que pueden tomar el 25 por ciento sobre operaciones facturadas al 16 por ciento, y esta sobretasa debería ser admitida como pago a cuenta.

Sr. Presidente (Matzkin). — A continuación, y en representación de la Cámara Argentina del Mercado Abierto, hará uso de la palabra el señor Federico Conisa.

Sr. Conisa.— Señor presidente, señores diputados: con relación a la modificación impositiva que se propicia a través del proyecto del Poder Ejecutivo nacional, quisiera expresarles que se encuentra a disposición de todos ustedes un trabajo escrito que hemos elaborado sobre la materia. En él analizamos la forma en que las modificaciones tributarias propuestas afectan a nuestra actividad, y en tal sentido hemos tratado de ser lo más sucintos posibles, tratando al mismo tiempo de suministrarles la información que ustedes requieren en esta materia.

En el anexo II de nuestro informe ustedes podrán apreciar que existen tres impuestos que afectan a nuestra actividad: el impuesto sobre los débitos en cuentas corrientes, el IVA —como consecuencia del incremento experimentado por las alícuotas correspondientes a los servicios, que son los que nos afectan— y el impuesto sobre los activos.

A continuación, quisiera referirme a un solo tributo que hace inviable nuestra actividad, y que es el impuesto a los débitos bancarios.

En tal sentido, y con la intención de aclarar ideas, en el anexo III (1) del informe que hemos elaborado tomamos el ejemplo de una empresa hipotética que tiene una facturación de 117, y costos totales —incluidos los impuestos— de 100. Dicha empresa, como consecuencia del impuesto a los débitos bancarios y del impuesto a las ganancias llega a tener una presión tributaria del 21,65 por ciento, sin tener en consideración el impuesto sobre los activos.

Sr. Lamberto.— ¿Me permite una interrupción, señor Conisa, con la venia de la Presidencia?

Sr. Conisa.— Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Matzkin).— Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Lamberto.

Sr. Lamberto.— ¿La alícuota que actualmente les corresponde aplicar en el impuesto sobre débitos bancarios es del 1 por mil?

Sr. Conisa.— Así es, señor diputado.

Sr. Lamberto.— Es decir que se incrementaría del 1 por mil al 2 por mil.

Sr. Conisa.— Correcto, y ustedes podrán apreciar lo que ocurre en el caso de nuestra actividad a través del análisis que hemos efectuado en el anexo III (2) de nuestro informe.

Como vemos, se trata de una empresa de mercado abierto o de alguna actividad similar que opera grandes volúmenes y bajo *spread*. Desde el punto de vista informativo, debo manifestar que en materia del impuesto a los activos el capital mínimo para operar como agente del mercado abierto a partir de marzo del corriente año será de un millón 150 mil dólares.

Por otra parte, para ingresar por intermediación y/o comisiones 100 australes —hipotéticos—, el volumen entre las compra y venta de nuestra actividad es del medio por ciento. Para que tengan una idea, esto es seis veces más que lo que se cobra en mercados internacionales. Consecuentemente, se hace extremadamente difícil hablar en el país de la opción de un mercado de capitales. Asumimos por eso nuestra realidad: una estructura de costos en la cual por cada 100 australes

de ingresos 60 son gastos y 40 utilidad bruta antes de impuestos.

Si ustedes observan este cuadro podrán llegar a la conclusión de que a esos 40 australes de utilidad bruta debemos restarles el 4,9 por ciento de ingresos brutos y el 1 por mil de la primera parte del impuesto al cheque, que según el proyecto no es posible deducirlo de ganancias. Además, si tenemos en cuenta el punto b) de nuestro informe, vemos que hay un punto de menos, que es la manera en que la DGI interpreta la comisión que queda, es decir, qué impuesto hay que volcar sobre esa comisión que directamente es del 1,2 pues no se trata de la tasa reducida para gastos propios de la organización. Finalmente, habiendo ingresado en bruto 40 australes, tenemos que 14,10 australes corresponden a impuestos, y todavía falta aplicar el 1 por mil adicional que prevé el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Sumando a esto 20 australes, resulta evidente que operar implica perder por cada 100 australes de comisión 5,90 australes, y esto es absolutamente inviable para la actividad. ¿Remedios para disminuir estructuras de costos? Es imposible establecerlos. En este ejemplo ustedes tienen 60 australes de gastos por cada 100, y 40 de utilidades antes de impuestos. Esto significa que si no hubiera impuestos de rentabilidad sería espectacular.

Esto no considera el impuesto a los activos, que implicaría un adicional de 23.100 dólares por año a capital mínimo.

En materia del impuesto a los activos uno puede discutir si es pagable o no de acuerdo a la actividad, porque puede suceder que para un determinado volumen de producción no sea pagable y para otro volumen mayor sea pagable. Pero por la vía del impuesto a los débitos bancarios operativamente va a tener pérdidas: cuanto mayor sea su volumen de operación más va a perder.

En el anexo III (3) hemos tratado de describir una empresa ideal, en donde los datos básicos que ingresan anualmente por intermediación están en el orden de los 280.000 dólares, como diferencia entre sus compras y sus ventas. Esta empresa tiene la particularidad de que no posee gastos de estructura; es decir, no paga salarios ni cargas sociales ni teléfono ni luz; no paga nada. Si tomamos el 4,9 por ciento de ingresos brutos y el impuesto a los débitos bancarios del 1 por mil, esa empresa que ustedes ven descrita tiene, ni más ni menos, que una presión tributaria medida como impuesto pagado sobre ingresos netos antes dispuestos del 54,11 por ciento.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la comisión, diputado Antonio Isaac Guerrero.

Sr. Conisa.— Creemos que es absolutamente imposible para nuestra actividad poder continuar en estas condiciones.

También nos preguntábamos, en definitiva, qué significa nuestra actividad; qué somos los agentes de mercado abierto. Precisamente, somos los que intermediamos entre la oferta y demanda de títulos públicos y privados emitidos en serie. De hecho, somos los que

intermediamos entre la oferta y demanda de los bonos externos de la República Argentina, cuyo emisor es el Estado. Evidentemente, con esta situación estos títulos públicos del Estado no van a poder transarse, obviamente va a bajar la paridad, y la consecuencia inmediata va a ser un menor financiamiento para el Estado, o un financiamiento muchísimo más caro.

Nuestra solicitud pueden encontrarla los señores diputados en el anteuúltimo párrafo de la presentación donde pedimos al Congreso que no apruebe el aumento de la alícuota del impuesto sobre los débitos bancarios y otras operatorias propuesto por el Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Guerrero). — Tiene la palabra el señor representante de la Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA).

Sr. Barboza. — Hemos hecho entrega a esta comisión de un trabajo escrito donde analizamos en detalle el paquete tributario. Para no demorar la atención de los señores diputados, nos vamos a referir brevemente a los temas que consideramos básicos. A ese respecto, va a hacer uso de la palabra el doctor Stocker, secretario de nuestra asociación.

Sr. Stocker. — Quisiera referirme ante todo al impuesto sobre los débitos bancarios, a cuyo respecto desearía hacer una reflexión filosófica en el sentido de que el aumento de su alícuota afectará directamente a la institución del cheque, que es promovida a nivel mundial.

Por otro lado, habría que tener en cuenta —por las experiencias anteriores— que en realidad la recaudación del impuesto es inversamente proporcional a su alícuota.

Evidentemente, esta reforma va a traer un trastorno enorme a los bancos y por supuesto a sus clientes, que tratarán de obviar lo más que puedan el uso del cheque, volviendo a la primitiva etapa del manejo de billetes.

Por otra parte, como los bancos no son contribuyentes del IVA, tendría que autorizarse el cómputo de este impuesto indistintamente contra el gravamen sobre los servicios financieros —que en realidad es el IVA de los bancos—, el impuesto a las ganancias y el impuesto a los activos.

En segundo lugar, me quiero referir al impuesto sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas. Al respecto también quiero hacer una reflexión filosófica: en un mercado libre de cambios —como el que existe desde el 20 de diciembre de 1989— un impuesto de esta naturaleza, sobre todo por las alícuotas que se pisen aplicar —2, 4 o 6 por mil, según el caso—, es realmente incoherente con la libertad cambiaria.

Por otra parte, creo que hay un error técnico en el sentido de que las operaciones de pase no deberían tributar el 2 por mil —actualmente la alícuota es del 0,10 por mil— en forma directa como surge del proyecto, sino que tiene que ser una *ratio tempo*, es decir por mes o fracción, como ocurre en la actualidad.

Con respecto al impuesto de sellos, la redacción del inciso *r*) que se intenta incorporar al artículo 58 de la ley es bastante confusa en lo que se refiere a la exención.

En tal sentido, creo que habría que suprimir el párrafo que habla de las financiaciones de exportación e importación, a fin de que la exención abarque a cual-

quier tipo de financiación; es decir, no solamente la ligada directamente a las operaciones de exportación y de importación sino también a aquellas que los bancos denominan el préstamo financiero puro. Es decir que todo lo que tributa el impuesto a la compra y venta de divisas debería estar exento del impuesto de sellos.

El título IX del proyecto de ley establece que los derechos de exportación y de importación se determinarán en dólares estadounidenses. Esto significa que el exportador o importador va a tener que comprar los dólares en el mercado libre para pagar en la Aduana a través del Banco Nación.

No se debe olvidar con relación a este hecho —y esto es lo que falta en el proyecto de ley—, que actualmente y hace bastante tiempo se pueden pagar determinados derechos de importación y exportación con los llamados Boerex, que es un título público emitido en moneda nacional, o sea en australes. Vale decir que actualmente lo que se puede pagar con Boerex, no se lo va a poder abonar de la misma forma el día de mañana, lo que va a inutilizar este título como instrumento de pago.

Estimo que debería preverse un agregado en el artículo de la ley que asimile a estos efectos el pago con Boerex al efectuado con dólares, máxime si el Boerex proviene de una operación en dólares.

Para referirse al IVA y al impuesto sobre los activos, voy a ceder el uso de la palabra el doctor Fischer.

Sr. Fischer. — Con respecto al impuesto al valor agregado, si bien los bancos no están alcanzados, va a originar un incremento de precios en todo el sector de servicios al elevarse la alícuota del 15,6 al 25 por ciento.

Nosotros lo que solicitamos es poder computar el impuesto al valor agregado —el incremento del impuesto— como crédito fiscal del gravamen a los servicios financieros, en vez de utilizarlo como costo.

Con respecto al impuesto a los activos, lo que pedimos es que sea replanteada. Un incremento del ciento por ciento en la tasa es muy importante, porque va incluso a modificar el actual sistema de equilibrio que tienen las entidades en sus costos.

Sr. Domínguez (J. M. R.). — Cuando usted plantea una reconsideración de la tasa, ¿se refiere a dejarla como está o a fijar otra tasa?

Sr. Fischer. — Es dejarla como está, máxime teniendo en cuenta que hace poco tiempo ha sido modificada la inclusión de costos.

Lo que pedimos, en definitiva, es estabilidad en las normas.

Sr. Presidente (Guerrero). — Invitamos a hacer uso de la palabra a los señores representantes de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros.

Sr. Tanghe. — Señor presidente: el tema que nos interesa específicamente es el del impuesto a los activos. La creación del impuesto va a significar un problema para nuestra actividad, y la reforma que ahora se propone potencia en gran medida sus efectos negativos.

Los oradores que me precedieron bien señalaron que al debatirse la creación de este impuesto se consideró el caso especial del sistema financiero, en atención a sus particulares características en el uso del capital y la captación de recursos a terceros. Ahora bien, en rigor de verdad, aquí y en todo el mundo, el sistema

financiero está conformado no sólo por las entidades financieras sino también por las compañías de seguros y las administradoras de fondos de pensión —entidades estas últimas que en la Argentina han sido recientemente creadas bajo la denominación de “compañías de seguros de retiro”. Todas estas actividades son, desde el punto de vista económico, muy similares ya que las compañías de seguros captamos fondos del público —es decir que trabajamos con recursos que no son de nuestra propiedad, para devolverlos luego, ya sea en la forma de pago de siniestros o reembolso de pensiones.

Si la creación de este tributo originó dificultades, el aumento de su tasa, como ahora se propone, llevará a nuestro sector hacia una situación prácticamente insostenible, tal como lo demuestran los siguientes números.

La actividad aseguradora se desenvuelve con una rotación de capital propio del orden del 25 por ciento del total de sus activos. Esto significa que un gravamen del 2 por ciento de sus activos represente un 8 por ciento del capital de la empresa. Creemos que un impuesto del 8 por ciento, en moneda constante —o moneda “dura”—, sobre el capital empresario es a todas luces confiscatorio.

En lo que hace a la absorción de este impuesto con el impuesto a las ganancias, ello sería factible si en las condiciones económicas que vive actualmente nuestro país fuera posible ganar dinero en moneda constante. Las compañías de seguro estamos vendiendo, en promedio, cinco veces el volumen de nuestro capital. Para poder absorber el impacto del impuesto a los activos computando como pago a cuenta el que se haya realizado por impuesto a las ganancias, tal como propone el texto del proyecto, deberíamos tener una rentabilidad del orden del 30 por ciento del volumen de nuestras ventas —en los países estables el negocio asegurador se desenvuelve con márgenes del 3 al 5 por ciento de rentabilidad—, lo cual implicaría la posibilidad de duplicar o triplicar nuestro capital cada año.

La conclusión es obvia: la aplicación de este impuesto, tal como está estructurado, para nuestro sector es confiscatoria. Lo que solicitamos es que se tenga en cuenta el hecho de que el sector financiero está conformado por dos tipos de entidades: las que se rigen por la ley de entidades financieras y las que se rigen por la ley de seguros, y es preciso que en lo que hace a estas últimas se determine la base imponible de la misma manera en que para el resto del sector. Así, si bien esta reforma seguirá representando una mayor carga impositiva, al menos estaríamos, para la absorción del impuesto, en la misma situación económica que las demás actividades financieras, las cuales en muchos aspectos —como ocurre en el caso de las compañías de seguros de retiro— compiten con nosotros.

Teníamos la intención de hacer también algunas observaciones con respecto a la posibilidad de que la tasa para nuestra actividad se fije en el 4 por ciento. No sé si ese punto está todavía en discusión, ya que las noticias de hoy insinuaban que esa propuesta se había dejado de lado.

Pero piensen ustedes que si estas cifras fueran llevadas al doble, prácticamente serían insostenibles, al me-

nos para la parte de la actividad aseguradora considerada como “acomodadora de servicios”, ya que se la estaría gravando al 4 por ciento.

Esta es la posición asumida por la Asociación Argentina de Compañías de Seguros. Por mi parte, sólo me resta señalar que me encuentro a disposición de los señores diputados que integran esta comisión a fin de responder a cualquier pregunta que deseen formularme.

Sr. Presidente (Guerrero). — Muy bien. A continuación, y en representación de la Unión Industrial Argentina, hará uso de la palabra el doctor Matheu.

Sr. Matheu. — Señor presidente, señores diputados, señoras y señores: en mi carácter de presidente de la Comisión de Política Fiscal de la Unión Industrial Argentina, deseo señalar que hemos elaborado un informe que pondremos a disposición de los señores diputados que integran esta comisión y que se refiere a las modificaciones impositivas propuestas por la actual conducción económica. Por consiguiente, y teniendo en cuenta la circunstancia de que disponemos de un tiempo limitado para hacer uso de la palabra, trataremos de ceñir nuestro análisis al informe al que acabo de hacer referencia.

Evidentemente, considerando el desajuste fiscal de enero, las necesidades internas y externas de febrero, los reclamos de los sectores público y pasivo, las tremendas urgencias de las provincias, etcétera, el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto de reformas impositivas con el que se calcula obtener un ingreso adicional de 200 millones de dólares mensuales.

Creemos que la Unión Industrial Argentina debe hacer sentir su preocupación en el Parlamento por las razones que serán expuestas a continuación.

Así, en primer término y con relación al Título I del proyecto que se encuentra sometido a la consideración de esta comisión, referido a la modificación del impuesto sobre los débitos en cuenta corriente y otras operatorias, cabe puntualizar que la alícuota del 3 por mil que rige actualmente sería elevada al 12 por mil, en tanto que quienes gozaban de la alícuota reducida del 1 por mil pasarían a tributar un 2 por mil. Esta propuesta significa cuadruplicar el impuesto para el caso de la industria, a la que debe agregarse la prohibición de endoso del cheque —dictada por el Banco Central de la República Argentina—, con evidente intención fiscal y en vigencia desde el 6 de febrero próximo pasado.

Si bien es cierto que se permite un crédito de impuesto por el 75 por ciento de lo percibido —debidamente actualizado a la tasa general—, en un 50 por ciento al impuesto a las ganancias en la declaración jurada anual, y en otro 50 por ciento sobre el IVA, esto no termina por arreglar el problema.

Se intenta demostrar numéricamente que la imposición, siendo del 3 por mil, es equivalente a la que se propone. Los contribuyentes que no sean responsables del IVA —como por ejemplo, los exportadores— podrán aplicarlo al impuesto a las ganancias, si las tuviera; en caso contrario, tendrán que considerar el tributo como un costo más. Por nuestra parte, solicitamos la posibilidad de compensar este impuesto con cualquier otro de los que liquida la Dirección General Impositiva, a fin

de no crear situaciones de compartimentos estancos que se produzcan en función de la actividad desarrollada por la empresa.

Indudablemente, aquí se producen tres efectos de importancia. En primer término, un aumento de la tasa realmente significativa. En segundo lugar, la imposibilidad de aplicar libremente el excedente a otros tributos o pagos a cuenta. Por último, se le hace perder al cheque su efecto cancelatorio y su agilidad financiera. Con relación a este último aspecto, la Unión Industrial Argentina ha hecho conocer oportunamente su opinión adversa, señalando al mismo tiempo la falta de fundamentación económica y tributaria de un impuesto a los débitos bancarios.

Creo que este punto merece una precavísima aclaración. Los señores diputados saben perfectamente bien que dentro de la técnica tributaria existe lo que se llama el efecto económico de los impuestos; es decir, el impuesto que se establece debe poder medirse desde el punto de vista del efecto económico que produce.

¿Qué pasa cuando se emite un cheque? ¿Qué puede ocurrir? ¿Se puede pagar cualquier cosa? Se puede pagar una deuda a un proveedor; se puede pagar el sueldo a un dependiente; se puede estar transfiriendo fondos de un lugar a otro. Es decir, se producen efectos económicos diversos que impiden medir el efecto económico del tributo.

En cuanto a las modificaciones del impuesto sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas, se eleva el 6 por mil el impuesto a la compraventa de divisas, que se fija en un 4 por mil para las operaciones de exportación. Simultáneamente, se elimina la gravabilidad en sellos.

Debe quedar absolutamente claro que comprende a todos los actos que den motivo al pago de este tributo, sean anteriores o posteriores, no sólo a los que expira el Banco Central de la República Argentina sino la característica misma de la operación y sus necesidades instrumentales, y abarca a las operaciones financieras y no sólo las que resulten de la actividad rescata de la exportación e importación.

Sobre la modificación del impuesto a los activos debo decir que se eleva del 1 al 2 por ciento el mencionado tributo, y al 4 por ciento para los prestadores de servicios con un capital inferior a los 10 millones de australes, lo cual creemos debería reducirse por la alícuota extremadamente alta. Efectivamente, el impuesto a las ganancias pagado por el mismo ejercicio fiscal podrá imputarse como pago a cuenta del impuesto sobre los activos sólo podrán computar el 20 por ciento; lo cual nos parece discriminatorio respecto de la inversión productiva proveniente del exterior en momentos en que la normativa debería estimularla.

Esta iniciativa es altamente objetable —me refiero a la elevación de la alícuota del impuesto sobre los activos—, teniendo en cuenta que grava el activo de las empresas, castigando a aquellos que han hecho mayor inversión, aunque la misma haya sido financiada por pasivos contraídos con terceros. Es decir, una empresa que no tenía nada pidió dinero y lo invierte todo en activos y pasivos, pero le vamos a gravar el activo sin

tener en cuenta que es la consecuencia de otro contraído como endeudamiento con un tercero.

Asimismo no se permite la deducción de ciertos activos que se desean preservar, como ha ocurrido en la legislación mexicana que fue comentada en alguna exposición del día de hoy.

Pasemos ahora a la modificación del impuesto al valor arregado. Aquí se incorporan nuevos servicios gravados y se limita la exención del tributo al agua natural destinada al domicilio particular del usuario.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la comisión, diputado Jorge Rubén Matzkin.

Sr. Matheu. — La suba de la alícuota del impuesto del 15,6 al 16 por ciento si bien pareciera no tener mayor importancia desde el punto de vista numérico, es preocupante en cuanto a su incidencia sobre artículos de primera necesidad alcanzados por la actual generalización. La Unión Industrial Argentina ha sostenido la conveniencia de no elevar el costo de estos productos mediante tributos que son trasladables —porque lo que no se sabe es si pueden repercutir en el precio— en tanto y en cuanto la legislación correspondiente —como también se dijo aquí— nos muestra la exención en su tratamiento tributario o una alícuota reducida.

Además de elevar la alícuota al 25 por ciento para determinadas prestaciones, se concede al Poder Ejecutivo autorización para elevar o disminuir la tasa del impuesto hasta en un 25 por ciento. Además, se establece que los responsables inscriptos que operen con no inscriptos deberán liquidar el impuesto que le corresponda a estos últimos aplicando la alícuota sobre el cincuenta por ciento del precio neto de venta. Esto va a hacer necesario un estricto control por la tendencia a hacer uso de la opción de inscribirse.

De esto ya se ha hablado aquí y creo que está perfectamente claro en la mente de los señores diputados. Es decir que un contribuyente no inscripto va a tener que pagar el IVA por un 16 por ciento más aquel 50 por ciento, pero si se inscribe va a evitar este recargo; ergo, se va a inscribir, y después no sé si va a pagar. En consecuencia, esto va a redundar en algo que a lo mejor no es favorable para la tributación.

Nuestra postura ha sido toda la vida tratar de cobrar en la etapa suficientemente desarrollada y cobrar a cuenta de la etapa siguiente sin molestar a ésta; habría que eliminar la opción de inscribirse, y el que lo hiciera que pagara un impuesto mínimo. Lamentablemente, nuestra postura no ha sido tomada en cuenta en esta circunstancia, y la redacción dada a este artículo del IVA realmente nos parece que va a ser peligrosa.

El título VI se refiere a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. Se crea un impuesto del 15 por mil sobre la transferencia de dominio a título oneroso de inmuebles ubicados en el país. El impuesto es de importancia pues se calcula sobre el valor de transferencia de cada operación, y en el caso de permuta, ambas partes deberán abonarlo.

Recordemos que el antiguo impuesto sobre los beneficios eventuales tenía una alícuota superior —en un momento fue el 15 por ciento, y en otro del 10 por

ciento— pero se pagaba sobre la ganancia generada por la operación y no sobre el monto de la transferencia.

Consideramos que la alícuota que se establece es importante en la medida que se agregan otros gastos como sellados —muy significativos en la mayoría de las jurisdicciones provinciales, llegando en algunas de ellas al 5 por ciento—, honorarios, comisiones, derechos de inscripción y diligenciamiento.

El artículo 13 del proyecto consagra la opción de no pagar este impuesto cuando la venta de la única vivienda lo sea con el fin de adquirir o construir otra, debiendo preverse en el transcurso de un año haber efectuado el reemplazo. Este *roll over* nos parece bueno y razonable.

El título VIII del proyecto del Poder Ejecutivo se refiere a la modificación de la Ley de Procedimiento Tributario. Al respecto, nos parece totalmente exagerada la modificación que se introduce en el artículo 44 de la ley 11.683, por la cual se eleva el período de clausura hasta 30 días, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que acarreará al personal, a la producción, a los cobros y pagos, etcétera.

Esta afirmación resulta claramente razonable si se observa el inciso 1º del mencionado artículo 44 por el que se castigará una infracción formal como es no emitir facturas en las formas y condiciones que establezca la Dirección General Impositiva, sobre todo teniendo en cuenta que se han labrado actas por problemas muy menores y que muchas provincias han avanzado en las características exigidas a las documentaciones, que no coinciden con las establecidas en el orden nacional.

Aquí, señores diputados, nos encontramos ante un verdadero problema al cual no le hemos hallado una solución total. Ha habido inspecciones en algunas empresas afiliadas a la Unión Industrial, donde se han labrado actas, por ejemplo, porque las facturas no decían "Buenos Aires", siendo que se trataba de una empresa radicada en esta ciudad. En varias provincias —como Mendoza y Córdoba— se exige numeración correlativa de los documentos que correspondan a ventas efectuadas en sus jurisdicciones.

Con esto tenemos una magnífica colisión entre las disposiciones provinciales y las nacionales que no hemos podido resolver todavía, no obstante que nos hemos trasladado a las provincias para pedirles por favor que se pongan de acuerdo en algún sistema único para tratar la documentación.

El actual mecanismo de ventas, donde se necesita su desglose por línea de producto o por área o zona, y las necesidades comerciales en estos momentos, hace que sea difícil poder hacer lo que llamamos el control de gestión.

Nosotros comprendemos que deben tenerse en cuenta los mecanismos que protejan los legítimos derechos del fisco, pero también hay que contemplar la debida defensa del contribuyente.

La publicación por parte de los organismos recaudadores de los impuestos a las ganancias, sobre los activos y al valor agregado, así como las contribuciones de seguridad social, debe ser cuidadosamente estudiada.

Por favor que no salga que nosotros no estamos de acuerdo en que se haga.

Quremos llamar la atención a los señores diputados y a las autoridades presentes en el sentido de que el monto de los tributos abonados no sólo tiene relación con la importancia de la empresa sino también con sus actividades, con las operaciones que realiza y con los resultados de éstas. En consecuencia, esta publicación, con la que se elimina el secreto fiscal puede dar una imagen incorrecta del comportamiento impositivo de una empresa.

Una empresa que opera y exporta todo tendría que pagar impuesto a las ganancias si gana, pero no tendría que pagar IVA, por estar exenta esta operación. Entonces, la publicación del nombre de la empresa con el impuesto pagado que al público puede parecerle irrisorio, puede dar lugar a una mala impresión del comportamiento de la empresa, que puede ser perfecto.

Con respecto al capítulo sin número relativo a la fiscalización de la Dirección General Impositiva, se consagra que ésta se limite al último período fiscal, creando una presunción de exactitud en las liquidaciones anteriores correspondientes a períodos no prescritos. Si en cambio encontrara que hay una inexactitud en la materia imponible, se le otorga una presunción de derecho prevista en la misma ley, consistente en no tener que extender la fiscalización a otros períodos no prescritos y poder determinar de oficio el impuesto adeudado.

No quisiera extenderme sobre este punto porque ya ha sido motivo de exposición por parte de los que me precedieron en el uso de la palabra. En este capítulo volvemos a repetir lo dicho en cuanto a los derechos del fisco y del contribuyente.

El título IX constituye otro problema para los que estamos en las empresas. Es el que se refiere a la vigencia. Comprendemos las urgencias del gobierno y compartimos el interés, el deseo y la necesidad de procurar mayores ingresos. Pero creemos que la vigencia que se le otorga, por ejemplo a la modificación del IVA, que empieza a regir al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial, va a traer muchos inconvenientes porque tenemos que modificar los programas, la facturación que no se haya hecho de acuerdo a las nuevas normas, y tenemos que distribuir las facturas en todos los puntos del país.

Todo esto no se puede hacer de un día para el otro. En esto pedimos seis o siete días hábiles para poder efectuar la reforma de los programas que son múltiples porque toman en cuenta una gran cantidad de factores: facturación, cuenta corriente, fletes, distribución, etcétera.

Como consideración final podemos decir que el proyecto en tratamiento va a introducir importantes modificaciones en el actual sistema impositivo. Algunas de ellas son, a nuestro entender, criticables y no constituyen novedad alguna.

Queremos insistir una vez más en que nuestra postura se basa en que es preciso reducir tanto la evasión como el gasto público. De lo contrario, y no obstante la trabazón que muy inteligentemente se instituye entre los diversos tributos, será muy difícil alcanzar las metas propuestas.

La simplificación del sistema, la radicación de la mayor carga de tributación en las empresas que tienen adecuada organización administrativa y la dotación de la DGI con elementos humanos y materiales suficientes son, a criterio de la UIA, los únicos elementos capaces de revertir la actual situación.

Me señalan aquí que no se habla de acotar en el tiempo la vigencia de esta reforma. Creemos que si alguna reforma se sanciona, ella deberá prever un período determinado de aplicación, pues cada modificación que se introduce al sistema tributario agrava las cargas de un grupo de contribuyentes cuando en realidad deberíamos tener la vista puesta en una verdadera reforma, ideada con el fin de evitar que todo el peso tributario recaiga sobre los mismos sectores.

Sr. Baglini. — Quisiera conocer la opinión de los señores representantes de la UIA con relación a dos aspectos.

El primero de ellos es el de la eventual publicación del "quién es quién". Por mi parte, ya he planteado algunos de los problemas que ello podría acarrear a las empresas, no sólo por la falsa imagen que puede producir para una empresa la difusión de información de la que se podría inferir que se halla en una grave situación de incumplimiento fiscal —con las consecuencias que ello podría tener en el mercado financiero y, para el caso de las empresas que cotizan acciones en bolsa, en el bursátil— sino también por la dudosa efectividad del control de la competencia dentro de la marea de legislaciones impositivas que hemos tenido en los últimos años y que determina para las empresas la existencia de diversas posibilidades de encontrar amparo en regímenes promocionales, que alteran sustancialmente los niveles de contribución. Ese es el primero de los temas sobre los que nos interesa oír algún comentario.

El segundo de ellos puede expresarse en esta pregunta: ¿existe en la Argentina de hoy alguna empresa que habiendo sido clausurada durante treinta días pueda evitar la quiebra? Esto es importante a los efectos de que podamos mensurar la entidad de esta medida sancionatoria y decidir qué autoridad debe tomar la resolución definitiva.

Sr. Cotta Ramusino. — Quisiera contestar primero esta última pregunta. A algunas empresas que están perdiendo —y disculpen el chiste— les puede convenir la clausura por treinta días, ya que así demoran su pedido de quiebra.

Con referencia al primero de los temas que mencionaba el señor diputado Baglini —el de la publicación del "quién es quién", como ha dado en llamarlo—, coincidimos en que la información puede aparecer distorsionada. Hay empresas que son fuertemente exportadoras y que en lugar de tener una posición de IVA positiva la tienen negativa, con largas rémoras en la devolución de estos tributos, devolución que —sea por la vía del Bocrex, o por otra— no han percibido y en virtud de lo cual, paradójicamente, presentan un IVA en rojo; también hay empresas que por razones coyunturales pueden no tener rentabilidad. Y además, como decía el señor diputado Baglini, hay que tener en cuen-

ta la existencia de diversos regímenes generales, regionales y sectoriales de promoción.

De manera tal que en este caso el hecho relacionado con la falta de pago del tributo no obedece a una causa evasiva o elusiva, sino a una circunstancia consagrada legalmente.

Lo expuesto precedentemente puede colocarse en situación de dificultad, de duda, o por lo menos poner en tela de juicio el comportamiento de determinadas empresas. Pero aparte de estos problemas, hay otros: el simple hecho de revelar el monto de un tributo puede significar que se den a conocer secretos comerciales, lo cual va más allá de los aspectos financieros. En otras palabras, es posible que a través del secreto fiscal estemos revelando secretos industriales, al menos en lo que concierne a la determinación del *quantum* del tributo.

Sr. Presidente (Matzkin). — A continuación, y en representación de la Sociedad Rural Argentina, hará uso de la palabra el doctor Zavalia.

Sr. Zavalia. — Señor presidente, señores diputados: en primer término, en nombre de la entidad a la que represento, deseo agradecer a todos ustedes la posibilidad de efectuar una exposición ante este cuerpo. De esta forma, la Sociedad Rural Argentina puede expresar su opinión en materia tributaria, especialmente en lo relativo a las reformas impositivas que están siendo sometidas a consideración de esta comisión.

En segundo lugar, a fin de poder comprender la posición asumida por la Sociedad Rural Argentina en materia tributaria, debo señalar que nuestros fundamentos básicos acerca de lo que debe ser tributación pasan, fundamentalmente, por la aplicación del principio de la no discriminación. Ello significa que todas las actividades deben tener, en líneas generales, los mismos regímenes de tributación y estar sometidos a impuestos generalizados y no especializados. Sustentamos esta posición porque pensamos que ésa es la única garantía de que dispone el contribuyente en el sentido de estar pagando una carga equitativa respecto de sus obligaciones fiscales. De manera tal que en nuestra opinión la aplicación de medidas que impliquen estímulos, presiones o tratamientos especiales es pagada, en definitiva, por aquellos que no disponen de la posibilidad de hacer valer sus derechos.

Otro aspecto relacionado con el ~~tema~~ planteado por la Sociedad Rural en materia tributaria indica que se debe tratar de evitar la aplicación de aquellos impuestos que encierran un sesgo claramente antiproduutivo, es decir, aquellos tributos que inciden sobre el precio de los productos o sobre los costos de las explotaciones, tanto agropecuarias como de otra índole. En tal sentido, en reiteradas oportunidades nos hemos manifestado en contra de las retenciones sobre las exportaciones y de los impuestos sobre los combustibles y sobre las tarifas. No obstante, si bien podemos llegar a comprender las premuras fiscales que el Estado puede tener en un determinado momento, tenemos la firme convicción de que en la medida en que se abuse respecto de la utilización de los recursos en cuestión se estará demorando la recuperación productiva del país.

En virtud de los principios que he enunciado precedentemente debemos expresar que hemos apoyado y apoyaremos toda propuesta en materia tributaria que se base en la aplicación de impuestos razonables al capital, a las ganancias y al consumo. Entendemos que se trata de tres sectores que deben contribuir a los gastos del Estado en el marco de medidas que no impliquen una distorsión o un exceso de cargas sobre ninguno de ellos, pues de lo contrario se generaría un desequilibrio que implicaría —en definitiva— restarle unidad al sistema resultante.

Con estos puntos de vista hemos examinado la propuesta de la reforma tributaria que el Poder Ejecutivo ha sometido a la consideración del Congreso de la Nación.

El primer punto en donde encontramos un grado de objeción es en el nivel fijado al impuesto a los activos. Si bien es cierto que mi entidad comparte la necesidad de que el capital tribute, lo real es que no debe llegarse a un grado de imposición que prácticamente esté anulando la posibilidad de obtener ganancias de ese capital, porque de ese modo el tributo pierde sentido y se desequilibra. En ese sentido, la elevación del 1 al 2 por ciento del grado de tributación nos resulta excesivo; a pesar de que comprendemos las circunstancias y problemáticas que la administración debe afrontar, como contribuyentes debemos señalar que ese peso es muy grande. Y será especialmente importante en el sector agropecuario por cuanto es público y notorio el carácter de empresas de capital intensivo que tiene la explotación agropecuaria y, por otra parte, la existencia de un sistema tributario paralelo. Me refiero a los sistemas previsional y municipal que se basan en idéntico principio, es decir, gravan el activo principal de nuestras explotaciones: la tierra. Entonces, esta reforma que duplica la tasa nacional y que se une a los aumentos que son públicos y notorios en los niveles provinciales y municipales, está llevando el conjunto de la carga tributaria sobre el capital agropecuario a un nivel muy poco sostenible. Los técnicos que nos asesoran señalan que con todo lo serio que es el impuesto a los activos, podría verse incrementado entre un 50 o 60 por ciento —o a lo mejor más— por la existencia de otros tributos.

Sobre este aspecto, la Sociedad Rural Argentina quiere dejar sentado en cuanto al monto fijado para el impuesto a los activos que está basado en una presunción de renta que no existe. Es decir, el sector agropecuario no tiene una renta suficiente como para atender ese grado de imposición del capital. Tal vez más grave que eso sea el problema de la imposición múltiple que se plantea por la existencia de los gravámenes provinciales y municipales. Nuestra entidad sufre a los señores diputados que introduzcan una reforma en el sentido de considerar como adelanto a cuenta del impuesto a los activos lo que el productor haya pagado en concepto de impuestos provinciales y municipales. Creo que esta propuesta aliviaría por de pronto el peso que tiene este conjunto de imposiciones que hemos descrito sobre las explotaciones agropecuarias. En principio, permitiría a las provincias tener un incentivo más para que los impuestos provinciales se paguen efectivamente, porque al hacerlo tendrían la oportunidad de

deducirlos de sus planillas del impuesto a los activos. Por otra parte, de pagarse los impuestos provinciales y municipales y obtenerse mayor grado de recaudación, las necesidades de las provincias de recurrir a fondos del Estado nacional o a aumentos de coparticipación se reducirían. Sería una forma natural y equitativa de coparticipación federal y evitaría que un activo determinado pague más que cualquier otro tipo de activos.

Hago este pedido para el sector agropecuario, pero considero que sería razonable que se fijara idéntica condición para las industrias o comercios que también abonan impuestos inmobiliarios.

De modo que la solicitud concreta que pedimos que la comisión tome nota es que se considere como pago a cuenta del impuesto a los activos lo que el contribuyente haya tributado por impuestos provinciales y municipales.

El segundo aspecto que consideramos cuestionable es el fuerte aumento que ha tenido el impuesto a los débitos bancarios. Si bien es cierto que no es la actividad agropecuaria la que tiene el mayor movimiento de fondos, de cualquier manera se ve afectada por un impuesto que ha tomado un nivel extraordinario.

Repito que comprendo la necesidad de lograr el equilibrio fiscal y de que los técnicos del gobierno tomen medidas que no adoptarían en circunstancias distintas a las presentes, pero de cualquier manera tenemos que considerar el problema y debo señalar la situación particular del sector agropecuario.

Todos sabemos la difícilísima situación por la que atraviesa el sector agropecuario en el cual inciden otros gravámenes, como los que cité anteriormente retenciones a la exportación, impuesto a los combustibles, tarifas, todo lo cual hace que la posibilidad de obtener ganancias sea prácticamente nula. Si bien no puede adjudicarse la culpa de todo esto al Estado, de cualquier manera debe ser tenido en cuenta a los efectos de adoptar este tipo de normas.

De acuerdo con lo que nos manifestó el ministro Cavallo, el impuesto a los débitos bancarios está presentado de forma tal de gravar a aquel que no contribuye al sistema de tributación general, pues se autoriza deducir lo pagado por ese concepto de lo que el contribuyente deba abonar por IVA y ganancias. Esto significa que si en nuestro caso no tenemos ganancias al final del ejercicio —que es muy probable que ocurra—, estaremos pagando un tributo sumamente importante y grave que no está justificado en ningún sistema de impuestos.

En consecuencia, queremos peticionar formalmente a la comisión que se reforme esa disposición y se permita la deducción íntegra del impuesto a los débitos bancarios ya sea contra el IVA, contra ganancias o contra activos a elección del contribuyente. Es decir que uno puede deducir ese impuesto —que está concebido para el que no contribuye— de alguna de las imposiciones que efectivamente debe realizar.

El segundo pedido que queremos hacer a la comisión es que se establezca un límite temporal a la vigencia de este impuesto. Creo que a nadie escapa —y estoy seguro que a los doctores Cavallo y Tacchi menos que a nadie— que éste es un impuesto de emergencia destinado a recaudar fondos y que de ninguna manera debe permanecer. En consecuencia, parece más que importante ponerle un límite en el tiempo, de modo tal que

no ocurra lo que sucedió con el famoso impuesto a los réditos de 1935 y tengamos impuestos temporarios que sean capaces de durar un siglo. Este es un impuesto negativo porque va en contra de las transacciones; pero si tiene que existir, que sea para gravar a aquellos que no operan de modo regular con sus impuestos.

Otro aspecto a tener en cuenta respecto del impuesto sobre los débitos bancarios es la situación de aquellas firmas que en el campo operan en la actividad intermediaria, que manejan volúmenes de transacciones que no tienen una relación directa con la ganancia que obtienen de ellas. Este aspecto debe ser contemplado para evitar que ese tipo de empresas tenga un costo extra que finalmente lo cargarán en sus servicios y deberá abonarlo el productor.

Creo que ha habido un antecedente en alguna ley anterior respecto a que las empresas que operan como consignatarias, ferieras, acopiadoras de cereales, etcétera deben tener un régimen que permita que esto no se convierta para ellas en un costo excesivo que la producción tenga que soportar.

Finalmente, no tenemos mayores objeciones que formular respecto de las normas de procedimiento tributario ni en las demás propuestas —algunas de ellas novedosas— que el equipo económico ha elaborado para lograr una mejora en la recaudación de todos los impuestos.

No somos expertos en el tema, pero queremos dejar sentado que la Sociedad Rural Argentina apoya sin objeción cualquier medida que, dentro de los cánones legales y sin violar los principios constitucionales, permita lograr una mayor recaudación mediante la contribución de todos los agentes económicos. Por ello, no objetamos de ningún modo ninguno de los principios que esta administración ha considerado conveniente emplear.

Los principios utilizados podrán técnicamente ser los mejores o podrá haberlos superiores aún, pero es nuestra intención no cuestionar ninguno porque debemos facilitar por todos los medios que los impuestos —cuando sean justos— se paguen como se debe.

Finalmente, respecto a las reformas que se proponen al impuesto al valor agregado, nuestra entidad tiene tomada una posición favorable a este impuesto. Esto no es porque creamos que nos beneficia, al contrario, nos perjudica, pero consideramos que lo hace en mucho menor medida que los impuestos específicos o especiales para la actividad agropecuaria, que siempre han resultado inmensamente más costosos que este impuesto que es generalizado y que grava fundamentalmente al consumo. Esto no quiere decir que nosotros no soportemos una parte, pero creemos que es inferior a la que tendríamos que pagar por otras vías.

Consideramos que respecto al impuesto al valor agregado hay mucho por hacer, y que ha habido lentitud en la acción del gobierno para encarar con esfuerzo e inteligencia el logro de una buena recaudación de este impuesto. Creemos que se puede hacer más y que se ha hecho poco.

Hay algunos aspectos que considerar. Uno es que la gran discusión dentro del sector relativa al impuesto al valor agregado tiene su origen —y seamos claros— en la desconfianza de los sectores exportadores de que

se les devuelva realmente el impuesto que no deben pagar y que tienen que pagar al productor. Esto ha generado una muy fuerte oposición y es parte de la efervescencia que se ve alrededor de este tema.

Creemos que es deber de aquellos que tienen que lograr un buen funcionamiento del impuesto, prever esta situación y encontrar la manera de que aquel que no tiene que pagar el impuesto no lo abone, se le devuelva automáticamente o pueda tener la seguridad de su reintegro, para evitar que el costo lo termine pagando el sector agropecuario.

Pensamos que se puede mejorar enormemente el control de este impuesto, pero quiero desmentir ciertas afirmaciones vertidas. La primera, que este impuesto tenga un grado de evasión mayor que los demás; lo tendrá igual o incluso menor. La segunda, que en el sector agropecuario haya una evasión mayor que en otros sectores sobre este impuesto. Esto no es cierto, y estoy seguro de que el funcionamiento del impuesto al valor agregado dentro de sector agropecuario, si bien puede ser mejorado tiene la misma problemática que en su aplicación a los demás sectores económicos.

Con lo expuesto dejo sentada nuestra posición y quedo a disposición de los señores legisladores.

Sr. Domínguez (R.R.). — ¿Cuando usted sugirió que los impuestos provinciales sean tomados como pago a cuenta del impuesto a los activos, a cuáles se refiere?

Sr. Zavalia. — A los impuestos inmobiliarios y tasas provinciales que gravan las propiedades; no al impuesto a los ingresos brutos. A los impuestos que gravan a los activos dentro de las provincias, como el impuesto inmobiliario y la tasa de camino en el ámbito municipal.

Sr. Presidente (Matzkin). — Corresponde invitar a hacer uso de la palabra a los señores representantes de Febancoop.

Sr. Biller. — Señor presidente: queremos explicar las diversas inquietudes que expresan los bancos adheridos a nuestra federación en la nota presentada a la comisión, y hacer hincapié en la importancia del quehacer cooperativo. Muchas de esas inquietudes tal vez ya hayan sido manifestadas por los representantes de ABRA y ADEBA.

En el Título I, referido al impuesto sobre los débitos en cuenta corriente y otras operatorias, del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo se dispone un incremento de la alícuota: del 3 por mil vigente se pasa al 12 por mil; a su vez, la alícuota reducida aumenta del 1 al 2 por mil. Ello significa en el primer caso un incremento del 400 por ciento y de 100 por ciento en el segundo, lo cual se verá reflejado en un aumento desproporcionado de los costos que tienen las entidades cooperativas. Según el texto del proyecto se permitirá computar como crédito de impuestos el 75 por ciento de lo liquidado según la alícuota general y el 50 por ciento de lo liquidado según la alícuota reducida. Sin embargo, ese crédito fiscal no evitará el impacto que tendrá el impuesto a los débitos en cuenta corriente sobre los costos de la banca cooperativa, ya que como todos sabemos las entidades financieras en general están subjetivamente eximidas del impuesto al valor agregado y las entidades cooperativas en especial se hallan exentas del pago del impuesto a las ganancias, según lo

establece la ley de creación del gravamen, en su artículo 20 inciso d). Lo que solicitan las entidades cooperativas es que el cómputo del impuesto sobre los débitos bancarios se haga, sin límites y a valores actualizados, contra el gravamen que para los bancos sustituye el IVA —esto es, el impuesto sobre servicios financieros— o contra la contribución para el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa —que es el gravamen que para las entidades cooperativas sustituye al impuesto a los activos—, a opción del contribuyente. Es preciso que así sea, a efectos de que este incremento de alícuotas no incida —hago hincapié en esto— en los costos de las entidades financieras cooperativas.

En lo que respecta al impuesto a la compraventa, cambio o permuta de divisas, el proyecto de ley dispone un incremento de la alícuota general al 6 por mil lo que significa un aumento del 5.900 por ciento sobre la alícuota que se encuentra en vigencia—; la tasa se reduce al 4 por mil para operaciones vinculadas con el comercio exterior —exportaciones, importaciones y sus correspondientes financiaciones— y al 2 por mil para operaciones de pase. Lo que nuestra federación solicita a este respecto es que se reconsidere el monto de las alícuotas y que la alícuota diferencial del 2 por mil para las operaciones de pase se establezca en función del tiempo transcurrido en cada operación, es decir en forma progresiva y no proporcional.

Nosotros hacemos hincapié en el hecho de que la norma legal que se encuentra en vigencia establece para las operaciones de pase una alícuota del 0,10 por mil, por mes o fracción.

En lo que se refiere al impuesto de sellos, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo incorpora nuevamente la exención establecida en el artículo 58 de la ley —oportunamente derogada por el decreto 435/90— referida a los documentos que instrumenten o sean consecuencia de operaciones gravadas por el impuesto sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas, incluyendo las letas provisionales y toda otra documentación exigida por el Banco Central de la República Argentina para la financiación de operaciones de importación y/o exportación.

Con relación a este último tema y a fin de lograr una mayor claridad de la norma, la Federación de Bancos Cooperativos de la República Argentina propicia la introducción de una modificación en el artículo 3º del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Dicha modificación se refiere a la última parte del citado artículo, y consiste en sustituir el párrafo que dice "...para financiaciones de operaciones de importación y/o exportación", por el siguiente: "...por operaciones vinculadas con el comercio exterior (exportación, importación) y sus correspondientes financiaciones".

Con relación al impuesto al valor agregado —tributo del que no somos contribuyentes directos, aunque sí indirectos—, solicitamos que el mismo sea computable como crédito fiscal en el gravamen sobre los servicios financieros, ya que consideramos excesivo el incremento de la alícuota, especialmente en lo concerniente a la energía eléctrica, agua corriente y telecomunicaciones. Por último, con relación al impuesto a los débitos bancarios, quisiera expresar que en el caso particular

de los entes cooperativos y de los entes financieros cooperativos se verificará una situación especial, ya que el incremento del IVA no tendrá como contrapartida ningún tipo de resarcimiento por la medida fiscal que pudieran llegar a tomar otras entidades. Entiendo que en este caso resultaría resentido el principio de igualdad de la imposición.

Sr. Presidente (Matzkin). — ¿Para las cooperativas rige actualmente la alícuota del 1 por mil?

Sr. Biller. — La alícuota se incrementó del 1 al 2 por mil.

Sr. Presidente (Matzkin). — Pero no son contribuyentes del impuesto a las ganancias.

Sr. Biller. — Así es, señor presidente, y tampoco en el caso del impuesto al valor agregado. Lo que nosotros pedimos es que nos permitan tomar...

Sr. Presidente (Matzkin). — ... a los bancos cooperativos.

Sr. Biller. — Exacto, señor presidente.

Sr. Presidente (Matzkin). — Comprendido, doctor Biller.

A continuación, y en representación de la Asociación de Bancos del Interior de la República Argentina, hará uso de la palabra el director ejecutivo de dicho organismo, señor Prémoli.

Sr. Prémoli. — Señor presidente, señores diputados: en primer término, deseo señalar que la Asociación de Bancos del Interior de la República Argentina representa a treinta y un bancos nacionales privados del interior del país. En segundo lugar, quisiera expresar que en el día de la fecha me acompaña el asesor impositivo de ABIRA, quien efectuará una exposición acerca de las modificaciones impositivas propuestas por el Poder Ejecutivo nacional en la iniciativa que está sometida a consideración de esta comisión.

Como ya hemos hecho llegar a la Presidencia una nota con nuestra posición, le cedo la palabra al señor González Fischer, asesor impositivo.

Sr. González Fischer. — En principio, quería hacer una acotación de carácter general sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Creo que nuevamente estamos disutiendo sobre un parche en el ámbito del esquema impositivo nacional debido justamente a problemas de recaudación originados por la evasión. En algún momento me gustaría conversar sobre este tema integral, que cumpla con los principios básicos de equidad, proporcionalidad e igualdad establecidos en la Constitución y que, por otra parte, se integre a los tributos provinciales y municipales, evitando la superposición de impuestos.

El primer punto a considerar es el impuesto a los débitos en cuenta corriente y otras operatorias. En este sentido, debemos expresar —como ya se ha dicho— que el incremento de la alícuota es desproporcionado para el tipo de operaciones que alcanza. Pagar por la emisión de un cheque el 1,2 por ciento es muy importante, lo mismo cuando debe hacerse un giro, una transferencia u otra gestión de cobranza.

A pesar de que se permite el incremento tomando como crédito un 50 por ciento contra el impuesto a las ganancias y un 50 por ciento contra el impuesto al

valor agregado, nuestra opinión es que este crédito fiscal sea posible tomarlo contra el gravamen a los servicios financieros, el impuesto a las ganancias o el impuesto a los activos debidamente actualizado y sin ningún tipo de limitación. También se dijo aquí que los bancos no están alcanzados por el impuesto al valor agregado.

En cuanto al impuesto sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas creemos que el incremento de la alícuota es importante. Además, en el tema de las operaciones de pase se impone una alícuota del 2 por mil en forma directa, y nosotros creemos que debería ser prorrateada.

En el impuesto de sellos se está limitando la exención para las operaciones que paguen el impuesto a las ventas, compras, cambio o permuta de divisas en operativas de importación y exportación. Nosotros solicitamos que toda operación que pague impuesto quede exenta del impuesto de sellos para que se cumpla el juego armónico entre las dos leyes.

Por último, en relación con el impuesto sobre los activos creemos que el incremento del ciento por ciento en la alícuota es muy importante. Por otra parte, elevar la alícuota al 4 por ciento para el caso de aquellas empresas que posean un patrimonio neto inferior a 10.000 millones de australes constituye un verdadero despropósito. Por las razones expuestas, solicitamos el mantenimiento de la alícuota actual y la eliminación de la mencionada discriminación que afecta a industrias de menor patrimonio neto. Esto era todo lo que queríamos manifestar; no sé si tienen consultas que formular aparte de lo que ya se ha dicho hasta este momento.

Sr. López (J. A.).—Me gustaría que nos explicara un poco más el tema de las operaciones de pase y la proporcionalidad del tiempo.

Sr. González Fischer.—En la actualidad el impuesto se aplica en operaciones de pase. Lo que nosotros pedimos es que esto quede como estaba hasta ahora y no se aplique en forma directa.

Sr. López (J. A.).—Es decir, tasa anual en función del tiempo.

Sr. Presidente (Matzkin).—Agradecemos a los representantes de Febancoop su participación en esta reunión.

A continuación, invitamos al doctor Jorge Berardi, miembro de la Bolsa de Comercio, a expresar su opinión sobre el proyecto que está en estudio.

Sr. Berardi.—Señor presidente: en esta oportunidad nuestra preocupación se vincula con la reforma impositiva y la vigencia de un mercado de capitales.

No estamos en desacuerdo con aumentar la presión tributaria; mucho menos con erradicar la evasión. Pero creemos que es necesario armonizar las necesidades del fisco con las posibilidades reales del sector privado y en particular con lo que realmente comprenda una canalización de nuevas inversiones.

Concretamente, nuestra preocupación está referida al impuesto a los activos y al denominado impuesto sobre los débitos bancarios. Sobre el primer punto, es dable señalar que este impuesto, por su naturaleza que no permite la deducción de los pasivos, está reñido con

la situación que se presenta en los períodos recesivos, no obstante que sobre él se puede llegar a apropiarse lo pagado en el mismo período en lo que hace al impuesto a las ganancias.

Queremos hacerles presentes unas cifras que regularmente publica la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en su informe trimestral, que comprende una muestra de 42 sociedades. La relación entre utilidad y patrimonio neto significó al 31 de diciembre de 1988 el 6,76; al 31 de diciembre de 1989 fue del 5,49; al 30 de septiembre de 1990 fue negativa en un 3,05 y finalmente, al 31 de diciembre de 1990 —que es la última información disponible— es negativa en un 7,18 por ciento. Como ustedes comprenderán, esta relación entre la utilidad y el patrimonio neto está señalando cuál es la posibilidad de pago del impuesto a las ganancias que tienen las empresas recogidas en la muestra.

Obviamente, el impuesto a las ganancias probablemente tenga poca incidencia con respecto a los capitales porque no va a haber ganancias —esto sin perjuicio de lo que pueda ser el ajuste por inflación— pero la naturaleza económica de estas empresas nos está señalando guarismos negativos en lo que es la relación utilidad sobre patrimonio neto.

Con respecto al aumento de alícuota que se establece en el impuesto a los activos para las entidades de servicios, realmente no entendemos cuál es la razón para consagrar esa desigualdad para este tipo de actividades. ¿Acaso hay una presunción de evasión impositiva o de existencia de focos de evasión, como alguna vez se los llamó? Si es así, lo lógico sería que desde el punto de vista de la administración tributaria se reparara más enfáticamente en este tipo de contribuyentes en lugar de crear un perjuicio para todo el universo de empresas de servicios.

En cuanto al impuesto a los débitos bancarios y otras operativas, la primera observación que quiero realizar es de naturaleza permanente ya que se refiere al impuesto en sí mismo. En última instancia, este tributo está reñido con las prácticas mercantiles más modernas. No hablamos simplemente de aspectos que podrían ser nuevos en esta disciplina sino que tratamos de ver lo que es el grado de emergencia por el que atraviesa el país.

El incremento de alícuota que se propone afectará directamente al mercado de capitales. Supongamos el caso de una empresa que decide instalarse en nuestro país y realiza su período de inversión, que naturalmente en el caso de grandes inversiones es prolongado. A lo largo de todo ese tiempo la empresa va a estar pagando el impuesto sobre los débitos bancarios por los gastos que vaya teniendo que afrontar. Pero no va a pagar el impuesto al valor agregado, porque no tiene facturación; ni va a pagar el impuesto a las ganancias, porque tampoco tiene actividad. El incremento del impuesto a los débitos previsto por este proyecto, en la medida en que sea absorbible únicamente por el impuesto a las ganancias, quedando el remanente para ejercicios futuros, conspira contra la capitalización. Es por esta razón que la Bolsa de Comercio considera que sería oportuno incorporar en esta iniciativa la posibilidad de que el remanente no absorbido por el IVA y por el impuesto a las ganancias sea aplicado al impuesto a los activos.

Sr. Rodríguez (Jesús). — ¿Sería posible que contáramos con alguna información suministrada a través de algún memorándum informal?

Sr. Berardi. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Matzkin). — Corresponde ahora invitar a hacer uso de la palabra a los señores representantes de la Cámara Argentina de Consignatarios de Canadá.

Sr. Bullrich. — Señor presidente: soy presidente de la Cámara Argentina de Consignatarios de Canadá y he venido acompañado por representantes del Centro de Productores de Productos del País. En cierta forma estamos representando a todos aquellos que trabajan en el rubro consignaciones aquí y en el interior —mercado de Liniers, mercado de cereales, etcétera—, y queremos agradecer la oportunidad que se nos brinda de expresar nuestras inquietudes.

Voy a referirme a aquellos puntos del proyecto que nos afectan directamente, ya que casi todos los demás han sido suficientemente desarrollados por los representantes de otras asociaciones y en gran medida estamos de acuerdo con sus opiniones.

Lo que más nos afecta de este proyecto es el aumento del 2 al 4 por ciento en la tasa del impuesto a los capitales que deben abonar las entidades de servicios. Eso es una barbaridad. Creo que tal disposición deberá suprimirse del proyecto y por lo tanto no me extenderé en apoyar nuestra argumentación sobre este tema. Si quisiera hacer una breve referencia acerca de cómo ello incide directamente sobre la actividad de los consignatarios.

La ley dispone que el cálculo para el pago del impuesto debe hacerse incluyendo no sólo nuestros activos propios sino también que tenemos circunstancialmente a raíz de las ventas que realizamos por cuenta de terceros. Es decir que de acuerdo con la actual disposición cuando llega el fin del ejercicio comercial debemos computar como activo nuestro total venta que no hayamos pagado —aunque tal vez haya sido a veinte días de plazo y debamos pagarla muy poco tiempo después, por ejemplo el 2 de enero—; sin embargo, no se nos permite computar el pasivo que se produce simultáneamente en esa operación, que tiene dos partes: el comitente vendedor y el comprador. Esto hace que la ley esté gravando algo que —estoy convencido— no ha estado dentro del espíritu de los legisladores. Como la cuestión viene de la ley anterior, con la tasa del 1 por mil lo hemos discutido en varias oportunidades, nos han dado la razón siempre pero nunca se ha corregido.

Ahora, al pasar la alícuota del 1 al 2, lo que antes era grave se convierte en letal. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a suspender las ventas de los últimos 15 o 20 días, o las vamos a tener que hacer al contado. Como muchos de los consignatarios cierran balance el 31 de diciembre, si suspenden las ventas durante los últimos 20 días, vamos a tener que comer pescado en las fiestas de fin de año porque no se va a vender carne. Es más efectivo llamar a las cosas por su nombre.

Además, hay una doble imposición, porque en este caso nosotros tenemos el activo en nuestro activo y el vendedor tiene un crédito a esa fecha, y por lo tanto lo tiene que declarar también como un activo de él. Por

lo tanto, la misma venta se ve gravada en cabeza nuestra y en cabeza de nuestro comitente. Tampoco creo que esto haya sido la intención de los legisladores cuando han tomado la medida.

Por eso, y a este efecto, proponemos que se agregue un artículo a la ley que diga lo siguiente: "Las entidades dedicadas a la comercialización a nombre propio de bienes de terceros, comisionistas, consignatarios u otros, descontarán del valor de sus activos gravados, determinados de acuerdo con los artículos precedentes, el importe neto a transferir a sus comitentes emergentes de las respectivas liquidaciones y las retenciones impagos no vencidas que efectúen en su carácter de agentes de retención por las operaciones en que intervengan".

Creemos haber buscado la mayor claridad en el texto pero evidentemente esto puede ser modificado.

Otro de los aspectos que nos afectan directa y muy sensiblemente es el relativo al impuesto a los débitos bancarios, y específicamente en el caso en que nosotros actuamos como agentes de retención de impuestos para el Estado. Como se trata de impuestos provinciales y nacionales, las cifras llegan a ser muy importantes.

En este caso nosotros actuamos sin ningún tipo de retribución, a pesar de que tenemos que hacer el trabajo de facturación y cobro. En algunos casos ni siquiera lo cobramos porque algún cliente no cumple y nosotros, tenemos que depositarle igual el importe al Estado. En virtud de lo expuesto, solicitamos no tener que pagar el 1,20 por ciento en los casos en que estamos actuando como agentes de recaudación.

Si al hacer el cheque para el Estado con el objeto de depositarle el impuesto correspondiente tenemos que pagar el 1,20 por ciento, en vez de estar retribuidos estamos pagándole al Estado por hacer de agentes de retención. Pedimos que en este caso se exima a quien actúe de agente de retención.

Como este tema viene de la ley anterior, si los señores legisladores estuvieran de acuerdo habría que agregarlo al punto correspondiente —apartado 4, inciso b) del artículo 25— lo siguiente: "Retención de impuestos, gravámenes y contribuciones que los comisionistas, consignatarios u otros deban efectuar en el carácter de agentes de retención y/o percepción, y pago a los organismos estatales". Por consiguiente, nosotros solicitamos que se nos exima en el caso de las retenciones de impuestos, gravámenes y contribuciones que los comisionistas y consignatarios deben efectuar en su carácter de agentes de retención y percepción de organismos estatales.

Finalmente, sólo me resta expresar que nos hallamos a disposición de los señores diputados a fin de poder responder a cualquier interrogante que deseen plantearnos.

Sr. Presidente (Matzkin). — Tiene la palabra el señor diputado Caviglia.

Sr. Caviglia. — Señor presidente: considerando que la base de los contribuyentes está conformada en su mayoría por los asalariados, quisiera saber si los representantes de la dos CGT han sido invitados a concurrir a esta reunión.

Sr. Presidente (Matzkin). — No fueron invitados, señor diputado. Con respecto a este tema, quisiera señalar

los señores diputados que las invitaciones han sido efectuadas —como sucede habitualmente— a través de la conducción de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por iniciativa propia y a pedido de cualquier señor diputado que oportunamente hubiera tenido inquietudes o interés en contar con la presencia de alguna entidad en particular.

A continuación, y en representación de la Asociación de la Banca Minorista, hará uso de la palabra el licenciado Augusto Magliano.

Sr. Magliano. — Señor presidente, señores diputados: en primer término, deseo señalar que en el día de la fecha me acompañan los doctores Pristero, Escudero y Cobasky, todos ellos integrantes de los comités técnicos de la Asociación de la Banca Minorista.

En segundo lugar, quisiera expresar que el mencionado organismo nuclea a más de treinta compañías financieras, bancos y entidades de ahorro y préstamo de la Capital Federal y del interior del país especializadas en la financiación al sector familia y a la pequeña y mediana empresa.

A fin de no reiterar conceptos que fueron vertidos anteriormente, nos referiremos a cuestiones puntuales que se vinculan fundamentalmente al interés general. En tal sentido, quisiéramos plantear algunas inquietudes relacionadas con el impuesto a los débitos bancarios. Con respecto a este tema, nos parece oportuno sugerir el mantenimiento, en algunos casos, de la alícuota que se encuentra vigente en la actualidad. Así, proponemos el mantenimiento de la alícuota en el caso de la gestión de cobro de cheques aplicados a ciertos impuestos, como depósitos en plazo fijo o en caja de ahorro, o para la compra de títulos-valores.

Creemos que estas sugerencias tienen una evidente justificación que se vincula con la elusión del impuesto. Este tributo tiene una incidencia muy alta con relación a la tasa nominal de interés, y esto es algo que puede ser apreciado aún en mayor grado en situaciones de estabilidad. Así, si disminuyera el ritmo inflacionario se podría observar la importancia de este tributo con relación a la tasa nominal de interés, ya que se alentaría el crecimiento de la intermediación clandestina al margen del circuito bajo el control del Banco Central de la República Argentina. El mantenimiento de la actual alícuota permitiría que en depósitos medianos y grandes los flujos excedentes de fondos del circuito empresario permanezcan dentro del sistema financiero. De modo que la reforma impositiva no afecta sensiblemente la capacidad prestable del sistema.

En lo atinente a los cheques, la gestión de cobros y giros destinados a la adquisición de títulos valores, creemos que una ventaja a corto plazo para el fisco, determinada por el aumento de la alícuota, podría redundar en una desventaja a largo plazo, porque el mercado secundario de títulos públicos va a funcionar de modo imperfecto y va a ser cada vez más rígido. Es evidente que muchas operaciones de arbitraje se verán impedidas por el costo de la entrada y salida del mercado. Por lo tanto, consideramos que es de suma importancia para el sector público contar con un mercado secundario fluido que le permita acrecentar sus posibilidades de colocación primaria.

Por último, y en homenaje a la brevedad, queremos hacer referencia a un tema que ya ha sido tratado por otras entidades. Pensamos que debe tenerse en cuenta la especificidad del sector financiero. El IVA no grava la actividad financiera; en la jerga tributaria hay un gravamen específico: el Gracefi. Nosotros pedimos que sea imputable al pago de este impuesto el gravamen a los débitos bancarios.

Quedamos a disposición de los señores diputados para aclarar cualquier inquietud.

Sr. Presidente (Matzkin). — Tiene la palabra el señor diputado Rodríguez.

Sr. Rodríguez (J.). — Sería interesante contar con una propuesta de redacción del artículo citado en relación al pago a cuenta —tema que todavía no fue considerado—, ya que implica asimilar a la actividad este gravamen específico que tiene el Impuesto al Valor Agregado.

Sr. Magliano. — Con todo gusto haremos llegar esa información por escrito a la Presidencia de esta comisión.

Sr. Rodríguez (J.). — También nos gustaría conocer si tienen alguna estimación acerca de cuál es el gravamen que están pagando las entidades del sistema financiero.

Sr. Magliano. — Ese dato no lo tenemos ahora en nuestro poder, señor diputado.

Sr. Rodríguez (J.). — Entonces lo solicitaremos al señor secretario.

Sr. López (J.A.). — ¿Tienen alguna idea de cómo podría ajustarse el régimen del impuesto a los débitos bancarios a esta petición de discriminar aquellos cheques que puedan ser para pago a plazo fijo?

Sr. Pristero. — El actual impuesto grava los débitos bancarios y otras operaciones entre las que están incluidas la gestión de cobranza y la gestión de pago. Lo que nosotros proponemos es que cuando los cheques se apliquen a la constitución de plazo fijo, depósitos en caja de ahorro o compra de valores mobiliarios, la gestión de cobranza se siga manteniendo a la tasa del 3 por mil. Cuando salió el impuesto a los débitos bancarios incluyendo estas operatorias, la gestión de cobranza relacionada con la constitución de plazos fijos estaba exenta.

Sr. López (J.A.). — ¿Las entidades emiten los cheques?

Sr. Pristero. — No. Se trata de permitir que un inversor, empresa o particular que tenga un cheque extendido a su nombre pueda hacer la gestión de constituir un plazo fijo sin depositarlo en su cuenta corriente bancaria. En este momento ese tipo de operatoria está gravada con una tasa del 3 por mil, y cuando salió la ley anterior esta operatoria aplicada a plazo fijo estaba exenta al pago del impuesto.

Sr. Magliano. — No solicitamos la exención sino el mantenimiento de la alícuota.

Sr. Presidente (Matzkin). — Agradecemos su participación, e invitamos a los representantes de la Cámara Argentina del Libro. Hará uso de la palabra el señor Roberto Chwatt.

Sr. Chwatt. — He venido a esta comisión en mi carácter de vicepresidente de la Cámara Argentina del Libro, acompañado por el consejero Julio Pérez y el gerente

do dicha cámara, doctor Pou, a plantear exclusivamente cómo afecta esta reforma impositiva a los libros.

En más de una oportunidad este Congreso ha estudiado, analizado y votado leyes específicas para el libro, porque ha entendido que éste tiene una connotación no sólo económica sino también cultural, en pos del desarrollo de la cultura y la educación del país. Así lo entendió cuando en 1973 votó la ley del libro que lleva el número 20.380, que fuera complementada por distintas leyes, decretos y resoluciones tendientes a promover el desarrollo del libro y la cultura.

Así lo entendió también este Congreso cuando el año pasado al modificar el régimen del IVA mantuvo la exención del libro, que venía ya de la ley anterior, aun cuando el Poder Ejecutivo vetó el artículo que permitía compensar el IVA pagado por el papel para libros contra el impuesto a los activos.

Asimismo, hace poco tiempo el Congreso insistió para que indirectamente se promoviera el desarrollo del libro en la educación y en la cultura del país.

Si tomamos todas estas iniciativas que han sido votadas por este mismo Congreso, debemos decir que en la presente reforma hay dos puntos fundamentales que van totalmente en contra de esa posición. Nos referimos a las modificaciones del impuesto a los débitos bancarios y a los activos.

El libro es un producto industrial y cultural, que normalmente requiere una alta inversión en desarrollo y tiene una lentísima rotación dada su connotación natural. En épocas normales la edición de un libro puede tardar entre uno y dos años, y en tiempos de recesión alrededor de tres o cuatro años. Entonces, si en esta etapa de inversión se pretende aplicar un impuesto a los activos —que en su momento reemplazó al impuesto sobre el patrimonio neto, que permitía compensar las deudas— elevando su alícuota del 1 al 2 por ciento, ello implica prácticamente un decreto de desinversión y desaparición del libro, especialmente de aquellos que no tienen una venta segura o que no se puede garantizar una venta rápida.

Por ejemplo, en el caso de los editores de libros de texto ellos tienen que hacer una altísima inversión contrayendo enormes deudas para poder editar los manuales o libros de texto para la temporada escolar. Si para esa misma época tienen que cerrar su balance, van a tener que pagar dos veces el impuesto a los activos sin tener la posibilidad de descontar la deuda asumida para desarrollar esos libros imprescindibles para la educación en la Argentina. Si esto lo trasladamos a todo el sector editorial de libros en la Argentina, es un golpe de gracia a cualquier desarrollo cultural e intelectual en nuestro país.

Creemos que si antes hubo una decisión política de discriminar el IVA con respecto a los libros ya que éstos promueven el desarrollo de la cultura, sería un contrasentido que se los gravara ahora indirectamente. Por eso pensamos que debería haber una decisión política actual para mantener el espíritu de la ley 20.380, ley del libro, y el de todas las iniciativas aprobadas posteriormente con el mismo criterio.

El otro tema que nos preocupa es el referido al incremento de la alícuota del impuesto sobre los débitos

bancarios. El proyecto plantea que lo abonado por dicho impuesto se puede compensar mitad contra IVA y mitad contra ganancias.

El libro está exento del IVA, con lo cual nunca puede compensar la mitad del incremento del impuesto a los débitos bancarios. En estos momentos, en la época recesiva en la que nos encontramos, no podemos ni pensar en ganancias.

En la ley 20.380 se dice que el libro estará exento de todos los impuestos y gravámenes. Si bien esto se ha mantenido en las posteriores leyes impositivas, un impuesto del 1,2 por ciento sobre cualquier cheque que emita un editor se asemeja a un impuesto a los ingresos brutos o a las rentas, sin posibilidad alguna de compensación con otro impuesto. Dado que existe una tasa reducida del impuesto a los débitos bancarios del 1 por mil solicitamos que todo el sector comercial y de ediciones de libros pueda utilizar dicha tasa, que en el proyecto se la quiere llevar al 2 por mil.

Entendemos que éstos son los dos puntos más importantes que afectan al libro. Por un lado se establece una exención y se pretende un desarrollo de la cultura, y por el otro se apunta a lo contrario. No creo que ésta sea la intención de ustedes.

Sr. Presidente (Matzkin). — Agradecemos la presencia de la Cámara Argentina del Libro.

Invitamos a hacer uso de la palabra al representante del Mercado de Valores de Buenos Aires.

Sr. Peña. — El Mercado de Valores agradece esta oportunidad para poder expresarse acerca de la reforma impositiva en cuestión, y quiere aprovechar la ocasión para señalar dos o tres circunstancias que lo afectan particularmente.

La primera de ellas está referida al impuesto sobre los débitos bancarios y su tasa general. Una tasa como la proyectada del orden del 1,2 por ciento, es sin duda una carga importante en el terreno de las inversiones productivas y del mercado de capitales. No hay duda de que el efecto no es el mismo cuando se encarece un pago en el 1,2 por ciento, si se trata de una operación vinculada con una actividad de consumo, que encarecerlo en esa medida cuando se está cancelando una inversión.

Para que resulte ilustrativo lo que acabamos de exponer, si admitimos que una inversión normal en el mercado de capitales debe rendir alrededor de un 10 por ciento anual en moneda dura, y tomamos como válida una razonable rotación de dos veces por año, nótese que el inversor está pagando 1,2 por ciento dos veces, lo cual representa el 24 por ciento de la renta esperada de la operación.

Si bien se ha sostenido que el incremento de la alícuota se neutraliza al considerarse como pago a cuenta de otros impuestos, no debe dejarse de tenerse en cuenta que en general los inversores y los agentes de bolsa no son responsables del impuesto al valor agregado ni tampoco del impuesto a las ganancias, si no tienen —como ocurre en estos momentos— beneficios que originen el pago de este impuesto.

Yendo más a la situación concreta de los agentes de bolsa, es de gran importancia señalar a los señores legisladores que la alícuota a la que están some-

tidos los agentes de bolsa —que es la alícuota reducida del 1 por mil— se ve ahora en el proyecto incrementada al 2 por mil, convirtiéndose así en una alícuota insostenible. Esta cuestión tiene su historia y ha motivado múltiples gestiones —tendientes a corregirla— ante el poder público. Si bien el impuesto existe desde hace muchos años, los agentes de bolsa han estado tradicionalmente exentos de su pago. Recién en marzo de 1988 se los incorporó al ámbito de aplicación del gravamen, aunque con una tasa reducida del 1 por mil y computable a cuenta del impuesto a las ganancias. A partir de esa incorporación los agentes de bolsa, por medio de sus entidades representativas, han realizado múltiples gestiones con el objeto de demostrar que la naturaleza de la actividad que desarrollan no es compatible con la aplicación de ese impuesto, ya que sus trances son fijados por el poder público —concretamente, por el Ministerio de Economía— en un nivel tan bajo que no admiten semejante magnitud de imposición. Tanto es así que, con la alícuota del uno por mil, el impuesto sobre los débitos bancarios absorbe el 37 por ciento de los ingresos brutos del agente de bolsa; con la proyectada alícuota del 2 por mil obviamente la incidencia se duplicaría, hasta representar el 74 por ciento de los ingresos.

Los agentes de bolsa, según este proyecto, quedarán comprendidos en un conjunto de sujetos que reciben trato preferente por los escasos márgenes con que operan: expendedores de combustibles, comisionistas y corredores de cereales y de carnes, agentes de mercado abierto, casas de cambio, entidades administradoras de tarjetas de crédito, etcétera. Sin embargo ninguno de ellos tiene ingresos regulados por el propio poder público, y de tan pequeña magnitud, como tenemos nosotros. Los administradores de tarjetas de crédito, por ejemplo, perciben comisiones del orden del 5 al 10 por ciento; los agentes de bolsa, cuando se trata de títulos públicos, perciben sólo el 0,24, en cuyo caso una alícuota del 1 por mil representa el 40 por ciento de sus ingresos, y una del 2 por mil, el 80 por ciento. Esta cuestión parece no haber sido advertida por los redactores del proyecto, y es menester tenerla en cuenta porque puede generar consecuencias económicas no deseadas.

También quisiéramos aprovechar la ocasión para referirnos a otro aspecto que afecta particularmente a nuestro sector. Cuando se trató la generalización del IVA, en octubre del año pasado, el Poder Legislativo decidió modificar la propuesta del Poder Ejecutivo —que eximía a los mercados de valores, a la Bolsa de Comercio y a los agentes de bolsa— y limitar la exención a la bolsa y a los agentes de bolsa. Consecuentemente, la actividad de los mercados de valores quedó gravada, lo cual en nuestra opinión constituye un verdadero contrasentido. ¿Qué justificativo puede tener, en una cadena de operaciones como la que existe entre mercados, bolsa y agentes, gravar solamente un eslabón? O se grava a todos o no se grava a ninguno.

Además debe tenerse en cuenta, en lo que hace a esta cuestión, que en última instancia el gravamen va a incidir sobre el adquirente, que en este caso no es un consumidor sino un inversor.

Esas son las inquietudes particulares que tiene el sector que representamos.

Sr. Presidente (Matzkin). — A continuación, y en representación de la Bolsa de Cereales, hará uso de la palabra el asesor legal de dicho organismo, doctor Luis Piendibeni.

Sr. Piendibeni. — Señor presidente, señores diputados: en primer término, quisiera señalar que en el día de la fecha me acompañan el licenciado Raúl Dente y el doctor Rafael Peloso, quienes también pertenecen a la Bolsa de Cereales.

En segundo lugar, quisiera agradecer a los miembros de esta comisión la posibilidad que nos han brindado en el sentido de hacer conocer nuestras inquietudes con relación al tema que constituye el motivo central de la reunión que hoy se está desarrollando en este ámbito.

La Bolsa de Cereales nuclea a todos aquellos sectores que se encuentran vinculados con la comercialización de cereales, entre los que debemos mencionar a los centros de exportadores y de acopiadores de cereales y también a los corredores.

Me referiré brevemente a estos últimos, a fin de ceder posteriormente el uso de la palabra al licenciado Dente, quien abordará el tema de los acopiadores de cereales.

El impuesto a los débitos bancarios fue motivo de opinión, en anteriores oportunidades por parte del organismo al que represento. Podría ratificar lo manifestado por el orador que me precedió en el uso de la palabra, pues lo cierto es que en la Bolsa de Cereales se presenta una situación bastante similar a la expresada por ese orador en cuanto a operadores, especialmente los corredores y comisionistas. Lo que sucede es que los corredores y comisionistas de cereales tienen una comisión del 1 por ciento, manejan dinero de terceros y poseen una gran representatividad en el interior del país. Estos impuestos terminan por gravar en un importe que puede llegar a ser equivalente al 33 por ciento de la comisión neta que ellos perciben. En el caso de operaciones con la Junta Nacional de Granos, ese porcentaje llega al 37 por ciento.

En virtud de lo expuesto, lo que propiciamos y solicitamos en el caso de los corredores de cereales es el mantenimiento de la actual alícuota del 1 por mil, con la posibilidad —esto es algo que no se encuentra contemplado en la ley vigente— de desgravar el IVA en un 50 por ciento y el impuesto a las ganancias en otro 50 por ciento, o bien, en un 100 por ciento cualquiera de los dos.

Nuestra propuesta se fundamenta en la circunstancia de que un incremento del 2 por mil en la alícuota generaría consecuencias negativas para la actividad de los corredores y comisionistas de cereales, pues éstos se verían imposibilitados para actuar. Por otra parte, si no se accediera a esta solicitud probablemente se generaría una suerte de avalancha de juicios, tal como ocurrió oportunamente en el caso de la empresa C. Pomas S. A. contra el gobierno nacional, donde se dispuso no innovar hasta tanto se resolviera la inconstitucionalidad de una medida que afectaba un derecho de propiedad: la comisión que debe cobrar el comisionista.

A continuación dejo en el uso de la palabra al licenciado Dente, a fin de que pueda referirse al tema de los acopiadores de cereales.

Sr. Dente. — Señor presidente, señores diputados: en primer término, deseo señalar que represento a la Federación de Acopiadores y al Centro de Acopiadores de Cereales.

En segundo lugar, quisiera puntualizar que no es ésta la primera vez que tengo la posibilidad de asistir a una reunión de esta comisión. Así, en el mes de noviembre de 1989, a raíz de una modificación propiciada al impuesto sobre los débitos bancarios, tuve oportunidad de estar presente en este ámbito y de exponer la situación de los acopiadores de granos.

Disponemos de información sobre las circunstancias que hacen que los acopiadores de granos se encuentren incluidos dentro del régimen preferencial de la alícuota reducida en el impuesto a los débitos bancarios. Tenemos argumentos que avalan esa posición. A nuestro juicio, en el caso de los acopiadores de granos se verifican las condiciones necesarias para su inclusión en dicho régimen, en lugar de hacerlo en el de carácter general, por el que se intenta elevar la alícuota al 12 por mil.

En ese sentido, la posición de los acopiadores de granos es que tienen que estar comprendidos dentro del inciso a) del artículo 24 de la ley del impuesto a los débitos bancarios. Este criterio fue compartido por el propio Poder Ejecutivo. Tanto es así que la Subsecretaría de Finanzas Públicas, en una nota que nos envió el 4 de abril de 1990 como respuesta a un pedido que le hicieramos con respecto a la contribución solidaria, nos decía lo siguiente: "Cabe observar una cierta similitud de la actividad desarrollada por los acopiadores de cereales respecto de las comprendidas por el artículo 5º de la ley 23.740..." —que se refiere a los comisionistas, corredores e intermediarios— "... en cuanto se verifica la existencia de importantes volúmenes de facturación con la obtención de reducidos márgenes de utilidad bruta sobre sus ventas."

El comercio de granos en su conjunto tiene la característica fundamental de manejar grandes volúmenes con márgenes muy reducidos. Si un acopiador cobra 4 o 5 por ciento por su intermediación entre la compra y venta de cereales, y tiene que pagar un 1,2 por ciento en concepto de débito bancario, se ve claramente la incidencia desproporcionada que tiene esta alícuota respecto del ingreso bruto total de los acopiadores. A raíz de ello, elevamos una nota al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda exponiendo nuestros puntos de vista; y los legisladores entendieron que era un momento oportuno para clarificar esta situación a fin de incluir en el inciso a) del artículo 24 a los acopiadores dentro del régimen preferencial de la alícuota reducida.

El mismo argumento nos induce a decir que si lo que se pretende es que el incremento del impuesto sea neutro y sirva de alguna manera para aumentar la recaudación de impuestos que actualmente no se paguen, debería incluirse dentro de la Ley de Impuesto a los Débitos Bancarios la posibilidad de computar el incremento de la alícuota del 1 al 2 por ciento como para ser tenido a cuenta del pago del IVA o del impuesto

a las ganancias, indistintamente. Es decir que si no se generan ganancias sujetas al pago del impuesto de la propia actividad, puedan ser absorbidas en una proporción equivalente por el impuesto a las ganancias que tengan que contribuir los acopiadores. Hasta ahora, lo que dice el proyecto es 50 y 50 por ciento, pero no aclara que se pueda imputar a uno de los dos impuestos indistintamente.

Otra preocupación común de los que están relacionados con las actividades de intermediación está dada por el hecho de que se manejan grandes volúmenes de terceros. Entonces, en lo que se refiere a impuesto sobre activos, uno podría quedar en una situación desairada por los compromisos que puede tener respecto de terceros y los devengamientos de créditos que puede tener a favor. Por lo dicho, consideramos que el impuesto a los activos, como bien lo señaló el presidente de la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, sería excesivo respecto de la propia realidad de quienes intermedian en un comercio reducido. En consecuencia, entendemos que para introducir claridad en este punto habría que permitir, a los efectos del cómputo del activo, las deducciones exclusivamente de operaciones de compraventa de granos y provisiones de insumos.

De manera tal que queda gravado el activo neto de la empresa, en una suerte de ficción contable porque existen acreencias que deberían estar compensadas con deudas pero ello no puede hacerse desde el punto de vista del impuesto a los activos.

De esta manera, dejamos sintetizada la posición de los acopiadores confiando en que ésta es una oportunidad inmejorable para que se clarifique el tema. Hemos enviado una nota al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde se hace referencia al tema de los débitos bancarios, y nos comprometemos a elevar en el día de mañana una consideración respecto del impuesto a los activos.

Sr. Peloso. — El Centro de Exportadores de Cereales se hace eco de las manifestaciones de quien me precedió en el uso de la palabra. En lo que respecta al impuesto sobre los débitos bancarios queremos señalar que el cómputo como pago a cuenta del IVA no tiene eficacia ya que en el momento de efectuar la exportación, el exportador tiene derecho al recupero del IVA, con lo cual ese cómputo del 1,2 por ciento no tendría los efectos deseados por el legislador.

Sería conveniente que ese porcentaje del impuesto sobre los débitos bancarios pudiera ser aplicado al pago de otros gravámenes, como por ejemplo el impuesto a los activos, con lo cual se atenuaría el impacto que nos ocasiona la elevación de la tasa tal como está proyectada.

Este es fundamentalmente el aspecto que más nos preocupa, y agradecemos la atención que nos han dispensado para estar presentes en esta reunión.

Sr. Presidente (Matzkin). — Agradecemos mucho su presencia.

Tiene la palabra el señor representante de la Asociación Argentina de Sociedades de Capitalización.

Sr. Perelman. — Quiero manifestar a los señores legisladores algunas inquietudes de la cámara que represento. El primer tema que quiero comentar es la preo-

ocupación de las sociedades de capitalización con respecto a la elevación de la tasa del impuesto a los activos, ya que los fondos ahorrados por los suscriptores deben estar invertidos —en función de lo que prescriben las normas vigentes— en activos que constituyen la garantía de dichos fondos. Vale decir que esos activos están en poder de las sociedades en forma temporaria, y deben ser devueltos a los suscriptores.

Con respecto al impuesto sobre los débitos bancarios tenemos un problema análogo, ya que los fondos que nos entregan los suscriptores, por expresas disposiciones vigentes deben ser depositados, y los pagos obligatoriamente deben ser efectuados mediante cheque.

Nuestra propuesta consiste en que se mantenga la tasa actual del impuesto a los activos, y que se aplique a las entidades de capitalización y ahorro la tasa reducida del impuesto a los débitos bancarios.

Sobre estos dos temas aún no hemos hecho presentación alguna a esta comisión, pero nos comprometemos a entregarla en el día de mañana.

Hay otro problema que se viene arrastrando desde la última reforma del impuesto al valor agregado —su generalización— que consiste en lo siguiente. En el proyecto de ley que había enviado el Poder Ejecutivo, las operaciones de capitalización y ahorro estaban exentas y figuraban dentro de una enumeración de diversas actividades realizadas por entidades financieras.

Al tratarse el proyecto en el recinto, en aras de una saludable simplificación, en lugar de repetir la enumeración que estaba prevista en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo se simplificó y se eliminó la enumeración citada. Esta se la reemplazó por la expresión "entidades comprendidas en el ámbito de la Ley de Entidades Financieras".

Pero resulta que la actividad de capitalización y ahorro no está en el ámbito de las entidades financieras sino del artículo 93 de la Ley de Presupuesto, con lo cual la actividad de capitalización y ahorro queda gravada en virtud de esa simplificación, a pesar de que la intención del Poder Ejecutivo y de los legisladores era declararla exenta.

Por lo tanto, proponemos que ese error se subsane y se incluya una cláusula en el proyecto que se va a tratar en estos días, que disponga la exención de las operaciones de capitalización y ahorro con respecto al impuesto al valor agregado.

Quiero destacar que esta norma, la gravación de las operaciones de capitalización y ahorro con el IVA, torna imposible las operaciones, porque nadie va a pagar el 16 por ciento de IVA cuando posiblemente obtenga un rendimiento menor por dichos fondos.

Espero tener buena acogida de los señores legisladores con respecto a estas cuestiones.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la comisión, diputado Raúl Eduardo Baglini.

Sr. Presidente (Baglini). —Agradecemos la participación de la Asociación Argentina de Sociedades de Capitalización.

Requerimos la presencia del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal.

Sr. Eidelman. —Represento al Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal y a la Federación Argentina.

Tengo la satisfacción de ver que se está considerando en el Congreso una ley que trata la cuestión tributaria, lo cual demuestra que se abandonó —espero que definitivamente— la sanción de decretos leyes impositivos. Vemos con beneplácito que se nos haya invitado a esta reunión y ofrecemos toda la colaboración que podamos brindar a la Honorable Cámara de Diputados.

Ustedes, señores legisladores, conocen que nuestras instituciones no responden a ningún interés sectorial, y simplemente venimos a brindar un aporte técnico. Los argumentos que se han expuesto durante toda la tarde en torno al proyecto en cuestión, y en especial los vertidos por la Unión Industrial, merecen nuestra adhesión.

Los argumentos técnicos de la Unión Industrial es una de las cosas más concretas que he escuchado, y me voy a referir a algunos aspectos que se omitieron en esa ponencia. Por ejemplo, el colegio y las federaciones de colegios también sostienen que el IVA del agro debe ser derogado, pero nosotros opinamos, y así se estableció en una jornada realizada en agosto en Venado Tuerto, que debe ser reemplazado —por lo menos transitoriamente— por el gravamen a la primera venta del agro.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la comisión, diputado Jorge Rubén Matzkin.

Sr. Eidelman. —Pero el tema del gravamen a la primera venta del agro tiene que ser estudiado profundamente. No puede ser que la acuita riojana no lo pague y sí el algodón del Chaco. Nosotros entendemos que ese gravamen no puede ser un arma política sino una herramienta transitoria para poder solventar el gasto público con ingresos genuinos. La tasa, asimismo, debe ser moderada.

No hay duda de que el IVA aplicado al agro es un fracaso, porque el 70 por ciento de la producción se exporta y por ende hay que devolverlo.

Con respecto al impuesto a los activos seguimos sosteniendo nuestra postura inicial de que debe ser derogado. Así lo hemos expresado en la Jornada Tributaria realizada en noviembre en Mar del Plata, como ya lo habíamos declarado en agosto en Venado Tuerto. Insistimos en que debe computarse el pasivo y la mejor manera de hacerlo es reemplazando el impuesto a los activos por el antiguo y conocido impuesto a los capitales. De esa forma se solucionarían casi todos los problemas a los que aquí se ha hecho mención en lo que hace al impuesto a los activos.

También creemos que las disposiciones sobre aplicación del IVA a los servicios contienen errores graves. Hemos escuchado lo que han manifestado recién los señores representantes del Mercado de Valores; no han señalado, sin embargo, que la Bolsa de Comercio, así como otras bolsas que funcionan en el interior del país, si están organizadas como sociedades anónimas quedan, por su estructura jurídica, incluidas en el ámbito de aplicación del IVA. Las consultoras de servicios, cuando

realizan exportaciones, están igualmente gravadas. Estos son problemas que debemos resolver.

La aplicación del IVA a los servicios y al agro debe ser replanteada. La opinión del colegio —que aquí ha sido claramente expresada— es que debe derogarse el IVA para el agro y reformularse totalmente el IVA para los servicios.

En lo que respecta al impuesto a los activos entendemos que la mejor solución es su urgente derogación. La actividad privada enfrenta en este momento graves problemas y técnicamente es preciso que se computen los pasivos, tal como se ha dicho durante esta reunión con muchos y abundantes ejemplos.

Sobre el tema del IVA tanto el Colegio de Graduados como la federación han realizado en los últimos veinte años numerosas jornadas tributarias y tenemos la suficiente experiencia para que no sólo los señores legisladores sino también el doctor Tacchi cuente con nuestra colaboración. Queremos ayudar en esta emergencia porque todos estamos en el mismo bote.

El impuesto a la transferencia de inmuebles merece un párrafo aparte. Aunque la Cámara de Diputados lo aprueba no sé si lo hará el Senado, ya que aquí está la cuestión de las facultades que las provincias han delegado en la Nación. Aquí se ha recurrido a un mecanismo muy sencillo: el derogado impuesto directo a los beneficios eventuales se ha transformado en un impuesto indirecto no coparticipable. Se ha trasladado el impuesto de sellos, de naturaleza local, a un impuesto indirecto que podrá superponerse a los gravámenes que cada provincia podrá establecer en virtud de que el impuesto a los beneficios eventuales está derogado. Creo que los señores legisladores tendrán que considerar el hecho de que el proyecto no prevé la coparticipación de este impuesto.

El tema de la clausura constituye otro problema gravísimo. La ley 11.683 no debe contemplar en modo alguno la posibilidad de clausura, ya que para eso está la Ley Penal Tributaria. Así, incluida en la ley 11.683, la clausura no requiere para ser aplicada delito ni perjuicio fiscal. Según la redacción del proyecto del Poder Ejecutivo es posible que un funcionario de la DGI clausure, por el término de 3 a 30 días, Aerolíneas Argentinas o una cooperativa de electricidad —parando todos los aviones o impidiendo el suministro de electricidad— porque falta el número de CUIT en la boleta.

Se superponen así, con la Ley Penal Tributaria, una cantidad de sanciones. El artículo 43 de la ley 11.683 prevé la aplicación de una multa; el artículo 44, la posibilidad de disponer la clausura de 3 a 30 días. A su vez, y en virtud de la ley penal, si hay perjuicio fiscal y delito, se aplica la pena de prisión... ¡Lo único que falta es que le peguen a la madre! Por consiguiente, considero que la clausura tiene que ser degoda, simplemente por una cuestión de razonabilidad de la norma legal.

Sr. Presidente (Matzkin). — ¿Usted se refiere a la parte en que le pegan a la madre? (Risas.)

Sr. Eidelman. — Señores diputados: yo creo que a esta altura ustedes deberían tener la paciencia que tenemos nosotros, los ciudadanos. Y en cuanto a la clausura, debo puntualizar que el Juzgado Federal de Neuquén ya ha

dicho con toda claridad, en la causa "Mickey S. A.", que se están matando mosquitos a cañonazos, ya que resulta excesivo efectuar una clausura por el simple hecho de no disponer de una boleta.

A través del artículo 43 se multa, y por medio del 44 se efectúan clausuras de tres a treinta días, sin posibilidad alguna de apelar. La apelación resulta ilusoria porque no es suspensiva; es decir, la pena se cumple. Por lo tanto, y tal como lo señalara anteriormente, sólo falta que le peguen a la madre.

Hay que tener en cuenta que la posibilidad de clausura prevista en la modificación de la ley 11.683 debe ser suprimida debido a que resulta una medida excesiva; en caso contrario, si no se procediera de esta forma, los jueces lo harán.

En lo que se refiere a la "ley tapón", creemos que directamente se debe efectuar un blanqueo en lugar de plantear cuestiones de carácter ético o moral cuando hay otra clase de problemas a resolver. La Dirección General Impositiva necesita disponer de un banco de datos a fin de contar con un punto de partida. Al igual que la actividad privada, requiere un blanqueo.

Otro tema que debemos considerar es el referido a la presentación espontánea. Si la DGI no está en condiciones de ir a buscar al contribuyente, entonces se le deben abrir las puertas a este último. Con relación a esta cuestión, debo señalar que la Federación Argentina de Colegios de Graduados en Ciencias Económicas ha presentado en dos oportunidades, proyectos ante esta Honorable Cámara, los que no fueron consideradas. A nuestro juicio, hay que abrirle las puertas y facilitarle la entrada al contribuyente que desea regularizar su situación. La última norma que se dictó en materia de presentación espontánea fracasó debido a que fue mal estructurada, lo que mereció críticas por parte de nuestra federación.

En otro orden de cosas, existe un punto respecto del cual debo felicitar al Poder Ejecutivo. Me estoy refiriendo, concretamente, a la modificación que se propicia del artículo 129 de la ley 11.683, en el sentido de actualizar los montos que han ingresado y dado origen al crédito a favor de los contribuyentes a partir de la fecha de pago o presentación de la declaración jurada. No obstante, creemos que la actualización debe tener lugar a partir de la fecha en que ingresa el dinero al fisco y no desde el momento de presentación de la declaración jurada que da origen al saldo a favor del contribuyente, ya que en este último caso se pueden generar molestias para el fisco. De todos modos, realmente lamento que en el curso de esta reunión nadie haya mencionado este verdadero hallazgo.

Finalmente y con relación al impuesto sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas, quisiera pedir un poco de clemencia. En el mes de junio de 1989, cuando el país se encontraba en situación de emergencia económica, la alícuota del mencionado tributo experimentó un aumento del 6 por mil al 12 por mil. Sorpresivamente, el día 29 de diciembre de ese año, el Poder Ejecutivo nacional, mediante un decreto —y haciendo gala de una urgencia que no resultaba evidente— redujo la alícuota al 0,10 por mil. Esta situación fue subsanada el 6 de marzo de 1990, mediante el dictado del decreto

435, y si bien considero que un decreto no puede cumplir la función de una ley, debo decir que en este caso vino a poner las cosas en su lugar. Consecuentemente, al 0,10 por mil se le agregó el 10 por mil. Finalmente, el tema fue abordado nuevamente por medio de la ley 23.871, sancionada el 22 de octubre de 1990. De manera tal que a través del proyecto que estamos considerando en el día de hoy se está tratando una misma cuestión por quinta vez. ¡Por favor! ¡Necesitamos estabilidad en cuanto a las normas!

Señores diputados: conchuyo de esta manera mi exposición. Sólo me resta manifestar que tanto el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal como el instituto tributario que presido, se encuentran a disposición de todos ustedes, a fin de dar satisfacción a cualquier inquietud que deseen plantear.

Sr. Presidente (Matzkin). — Si ningún señor diputado desea hacer alguna consulta, agradecemos su participación en esta reunión.

Como ya no quedan más entidades para exponer, esta Presidencia sugiere a la comisión que se considere la posibilidad de pasar a un cuarto intermedio de diez minutos con el objeto de realizar las reuniones necesarias que nos permitan acercar o no posiciones a fin de emitir dictamen sobre el proyecto del Poder Ejecutivo. Pongo la propuesta a consideración de los señores diputados.

Sr. Rodríguez (J.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Matzkin). — Tiene la palabra el señor diputado Rodríguez.

Sr. Rodríguez (J.). — Señor presidente: en nombre de bloque de la Unión Cívica Radical quiero anticipar que tenemos la más absoluta disposición para dialogar en forma constructiva y cooperar con la oposición en esta etapa crítica por la que está atravesando nuestro país. Creemos que esta crisis se relaciona más con el dólar electoral, la frivolidad impúdica y la soberbia de algunos funcionarios que con la actitud del bloque y de la oposición.

Estamos dispuestos a apoyar el cuarto intermedio que solicitó el señor presidente, pero debemos aclarar que en ninguna circunstancia y bajo ningún concepto nuestro bloque considera que sería una medida responsable y sería que esta comisión emita dictamen en el día de la fecha. Existen numerosas razones que avalan este argumento y una de ellas es la falta de información y respuesta de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, a quienes la semana pasada habíamos formulado algunos requerimientos.

También debemos hacer notar la ausencia de funcionarios que inexcusablemente deberían estar presentes en estas deliberaciones, como el señor director de la DGI y otros funcionarios encargados de informar detalladamente sobre la situación fiscal.

Debe tenerse en cuenta que el propio ministro de Economía declaró públicamente que la información disponible de la situación fiscal era incompleta y en algún caso, incorrecta. Si esto lo dice alguien que fue miembro del gabinete del presidente Menem desde el inicio de su gestión, qué le queda a los legisladores, y más aún, a los contribuyentes.

Con mucho gusto aceptaremos la moción de pasar a cuarto intermedio pero —reitero— no contamos con nada de lo que hemos requerido en términos de información. Además, luego de haber escuchado las intervenciones realizadas por las distintas entidades que nos visitaron en el día de hoy, quedan pendientes muchísimas preguntas para ser formuladas. Por lo dicho, estamos convencidos de que la intención de producir dictamen esta noche constituiría un acto de gravísima irresponsabilidad de nuestra parte, y también, la reinciación de las hostilidades políticas por parte del oficialismo hacia la Unión Cívica Radical en el ámbito de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Matzkin). — Señor diputado su apreciación hace que deba repensar la propuesta que he formulado en función de que no deja usted —evidentemente en representación de su bloque— caminos o posibilidades alternativas que teníamos esperanza de encontrar durante el cuarto intermedio.

Creo que no faltan antecedentes en esta misma comisión acerca de las velocidades que nos han impuesto, inclusive cuando usted la presidía. Por lo tanto, la virginidad no es atributo que pueda exhibir ni usted ni su bloque. Usted mismo fue portador de una carpeta con información. Nosotros hubiéramos deseado en los seis años que estuvimos en la oposición en esta comisión haber tenido aunque sea la décima parte de la información que ustedes tienen en esa carpeta.

Hemos intentado avanzar por distintos medios en esta cuestión, donde la urgencia ha sido manifiesta, tal como se ha expresado pública y privadamente en cuanta oportunidad hemos tenido; urgencia que es producto de necesidades fiscales que no escondemos.

Hemos invitado a diferentes instituciones, en cantidad mayor a la inicialmente solicitada por el radicalismo. Cada una tuvo oportunidad de expresar con total y absoluta libertad su punto de vista. Nosotros, por una cuestión reglamentaria, necesitamos sacar despacho en esta comisión pues nuestra intención es solicitar que nos faciliten la mayoría suficiente para que mañana o el jueves este proyecto pueda ser tratado en el recinto. Si el radicalismo no facilitara el número, este tema no podría ser tratado, y recién tendría que discutirse la próxima semana. Pero si además no logramos sacar despacho hoy, en lugar de una semana, el inicio de su tratamiento en la Cámara podría demorarse dos semanas.

Hemos expresado esta preocupación y formulamos algunas alternativas que podrían permitirnos encontrar un camino que tenga en cuenta nuestras urgencias. Pero a pesar de que la oposición expresa que no desea entorpecer, molestar ni perjudicar el trámite de este proyecto, no hemos podido encontrar un camino que permita equilibrar razonablemente nuestras urgencias y vuestras peticiones.

En esas circunstancias y condiciones no tendría razón de ser el pedido de cuarto intermedio que inicialmente solicitó en mi exposición. En consecuencia, vamos a retirarlo.

Tiene la palabra el señor diputado Caviglia.

Sr. Caviglia. — Señor presidente: voy a hacer una consideración sobre algo que no es la primera vez que sucede, pues ya hemos sido "puenteados" en otra oportu-

tunidad, y aquí está presente el presidente de la Comisión de Legislación Penal, doctor Cortese, quien puede dar fe de ello.

No es la primera vez que en un paquete de reformas impositivas se introducen cuestiones que hacen esencialmente a la Comisión de Legislación Penal, pues se establece la imposición de sanciones y de acuerdo a lo que dispone el reglamento estos temas son de competencia de dicha comisión y deben ser girados a ella para su análisis.

De modo que la Comisión de Legislación Penal no ha tenido oportunidad de analizar el título VII del proyecto, que se refiere a la modificación de la ley de procedimiento tributario 11.683 y que contiene serias desavenencias, como por ejemplo en el artículo 44 que amplía los plazos de clausura. Como bien se dijo aquí, esto va a perjudicar al mercado laboral y puede llevar a la quiebra de una empresa con el consiguiente despido de los trabajadores.

Por otra parte, actualmente la aplicación de la cláusula puede ser apelado con efecto suspensivo, mientras que ahora se pretende otorgarla con efecto devolutivo.

Esto significa reemplazar el órgano jurisdiccional por los órganos administrativos. Ahora bien, esto puede tener diversas consecuencias. Por ejemplo, ¿qué sucede si el órgano judicial que efectúa la clausura no corresponde? En este caso se vería perjudicada la Dirección General Impositiva ante eventuales reclamos.

En cuanto al régimen de presunciones consideramos —como ya se ha dicho— que es un disparate, porque opera como una cláusula tapón que, en definitiva, significa una amnistía encubierta. Sería más claro y más prolijo plantear directamente una amnistía, teniendo una mayor certeza jurídica en el conocimiento de este instituto.

Tampoco comparto el hecho de que la variación de las alícuotas quede a criterio del Poder Ejecutivo, porque esto implica lisa y llanamente una delegación impropia por parte del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo de una facultad que es exclusiva y excluyente del Congreso, lo que en definitiva convierte a la norma en absolutamente inconstitucional.

Estas son algunas de las consideraciones que quería hacer porque no es la primera vez que nos encontramos con un orden del día en el recinto donde se tratan cuestiones penales que no han pasado como deberían por la comisión respectiva, que es la de Legislación Penal.

Sr. Canalis. — Se encuentran presentes rectores de distintas universidades del país, esperando poder participar de esta reunión. ¿Podrá que se les brindara esa posibilidad a los señores rectores.

Sr. Presidente (Mazzini). — En seguida vamos a acceder a su solicitud.

Tiene la palabra el señor diputado Lamberto.

Sr. Lamberto. — He escuchado al señor diputado Jesús Rodríguez hablar de este tema en una forma un tanto hostil. Creo que nadie duda de la gravedad de la situación por la que atravesamos y de la necesidad que tenemos de dar una respuesta desde el Parlamento a esta crisis fiscal que ha existido a lo largo de todos estos años y de la cual todos hemos sido protagonistas.

Si no existe voluntad política para allanar el tratamiento de esta ley, sin duda está absolutamente de más todo lo que podamos decidir. Cuando no hay voluntad política de acordar, lamentablemente existe la confrontación, y obviamente —por lo menos en lo que a mí respecta— no es lo mejor. Siempre hay un nivel de entendimiento en donde se tienen que compatibilizar y acercar posiciones.

Partiendo de la base que la voluntad política existe, lo demás es más sencillo porque creo que no se trata de una norma tan compleja; por lo menos para mí no es algo desconocido. Las exposiciones que hemos escuchado por parte de los señores que venían a defender su posición demuestran que el proyecto de ley no es desconocido, por lo menos para la mayor parte de ellos.

Es decir, que si hubiera voluntad política de acordar posiciones habría suficientes elementos para efectuar un debate tanto en lo general como en lo particular, y corregir los puntos que puedan llegar a ser susceptibles de ello. Luego podríamos emitir un despacho con vistas a tratarlo a la brevedad en el recinto de la Cámara.

El debate se da en el recinto. Facilitar el tratamiento aquí no significa resignar posiciones. Sería la votación en el recinto la que dirá si este proyecto se convierte o no en ley de la Nación. Lo único que pedimos es que se facilite el tratamiento para que el proyecto pueda ser considerado por la Cámara a la brevedad. Se trata de compatibilizar; y cuando tratemos el proyecto artículo por artículo tal vez lleguemos a un acuerdo.

Sr. Baglini. — Creo que éste no es un problema de voluntad política. No se puede hablar de voluntad política cuando ni siquiera hay información que conduzca a formarla. ¿Quién puede dudar, después de cuatro reformas —o dos subdivididas en cuatro— encaradas por el gobierno en menos de un año y medio, de que existe la voluntad política? Nadie puede dudar de que existe voluntad política cuando después de haber anunciado nuestro voto negativo en general a la primera reforma impositiva hicimos todos los esfuerzos para acordar modificaciones y llegamos de esa manera a votar afirmativamente en el mismo recinto. Nadie puede dudar de que existe voluntad política cuando también durante un mes de enero —y parte de febrero— sancionamos a la carrera —para que quedara allí, desperdiciada durante un año— la Ley Penal Tributaria a fin de que pudiéramos solucionar el problema de la evasión. Nadie puede dudar de que existe voluntad política cuando el gobierno anunció que era precisos tres pilares para construir la revolución productiva —reforma del Estado, emergencia económica y reforma tributaria— y obtuvo la sanción de esas leyes —que en algunos casos, como en el de la emergencia económica, equivalían a 28 leyes juntas— en menos de seis meses.

No se ha sancionado, durante este gobierno, reforma tributaria que no haya insuñido un tiempo de tratamiento tres, cuatro o seis veces menor al de cualquier iniciativa similar encarada por el gobierno anterior. De manera que el problema aquí no es de voluntad política sino de responsabilidad de los legisladores.

Tengo aquí el Diario de Sesiones que registra el tratamiento de la primera reforma impositiva. Incluye en sus dos últimas páginas una estimación de lo que durante 1990 se iba a recaudar en base a aquella reforma. Cuando uno lee que se estimaba una recaudación de IVA del 4,36 por ciento del producto bruto interno se pregunta por qué no se alcanzó ese objetivo. Me habría gustado que los funcionarios nos dieran alguna explicación al respecto. Pero ni siquiera esa información hemos tenido. Cualquiera ciudadano se pregunta cuál es el nivel de recursos y cuál el nivel de gastos del Estado. Sin brindarnos esa información mínima pretenden inducirnos al tratamiento apresurado de un paquete impositivo de emergencia. No ha habido ni una sola palabra acerca de qué se hace con la recuperación de avales o con la recuperación de créditos de los bancos oficiales; no se ha dicho dónde está la plata de las privatizaciones; no se ha explicado cómo se cumplen los decretos 435 —el Erman III— de marzo del año pasado; 1.757 —el Erman V—; 1.930 de septiembre del año pasado, y todas las medidas posteriores. De todo esto, ni una sola palabra.

Un gobierno que no tiene autorización de gastos por parte del Congreso, porque a esta altura de 1991 aún no ha ingresado el proyecto de presupuesto; un gobierno cuyas erogaciones no son controladas por ningún órgano independiente, tal como lo demuestra el tema del tribunal fiscal, pretende que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emita un dictamen, después de haber tenido apenas dos reuniones, sin advertir las consecuencias que puede tener la norma que se sanciona.

Las consecuencias que puede tener la norma son que tal vez la recaudación resulte insuficiente para cerrar el agujero fiscal; que puede, tal como lo hemos escuchado aquí, no contener incentivos ni alicientes para la inversión; que puede implicar una mayor complejidad para la administración tributaria; que puede no ser, en definitiva, un avance hacia un sistema progresivo sino todo lo contrario; que instaura un capítulo de procedimiento tributario que significa crear en contra del contribuyente presunciones que alteran principios jurídicos establecidos hasta hora en la ley. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos si esta comisión no tiene derecho para efectuar un análisis previo a la formación de la voluntad política. ¿Qué voluntad política podemos tener nosotros? Tengo en mi poder una precisa exposición del ex subsecretario de Finanzas Públicas, el doctor Raúl Cuello, y del actual director de la Dirección General Impositiva, el licenciado Ricardo Cossio, que tuvo lugar el día 10 de mayo del año pasado, en oportunidad de celebrarse una reunión de la Comisión de Comercio de esta Honorable Cámara.

En honor a la verdad, debo señalar que ha sido la única vez en que los señores diputados pudieron escuchar algo concreto acerca de lo que pensaba hacer la Dirección General Impositiva.

A continuación, me remitiré a la lectura de algunos párrafos correspondientes a la versión taquigráfica de la reunión de comisión señalada precedentemente.

Así, por ejemplo, el doctor Cuello señaló que en ese momento se disponía de 1.280 inspectores que apenas pudieron realizar cuatro mil inspecciones, lo que re-

presentaba un promedio de tres inspecciones al año por cada inspector. Al mismo tiempo indicó que a su juicio ése no era el número que correspondía a la Argentina sino que por el contrario, consideraba que se debía disponer de 20 mil o 30 mil inspectores ampliamente capacitados.

Oportunamente le preguntamos al señor subsecretario cuál era el nivel de capacitación y de ingresos del personal, y nos hizo llegar un informe correspondiente al día 3 de marzo de 1990 en el que hacía referencia a un poco más de mil agentes que provendrían de ferrocarriles y que serían capacitados y posteriormente distribuidos en las diferentes áreas.

En la página 41 de la versión taquigráfica a la que aludo se dice que se llevaron a cabo 12 mil verificaciones en el término de dos meses, que se detectó un 10 por ciento de responsables no inscriptos y que se determinó un 10 por ciento de casos de clausura. Al mismo tiempo, se señala también la existencia de otro 10 por ciento de casos que se encontraban en la justicia con sentencia pendiente. Ahora podemos observar que del total de clausuras que fueron a la justicia el 60 por ciento ha sido revocado. Por ende, me pregunto cómo es posible que hablemos de una sanción de clausura de treinta días cuando vemos que todos los casos que fueron al ámbito de la justicia han sido revocados.

Posteriormente, en la misma versión taquigráfica se hace referencia a un programa de datos primordial, destinado a ejercer el control de la deuda de los contribuyentes. Este programa, que debía concluir entre el 30 de junio y el 10 de julio de 1990, estaba financiado a través de un importante préstamo otorgado por el Banco Mundial. Nunca más hemos vuelto a tener noticias acerca de lo que pasó con el préstamo del Banco Mundial.

En la página 62 de la versión taquigráfica se hace alusión a las medidas que se pensaban adoptar con el objeto de mejorar la administración tributaria. En tal sentido, se hizo constar que en ese momento sólo se disponía de 40 computadoras personales, cuando en cualquier organismo de naturaleza similar a la DGI se requieren, por lo menos, 400 o 500. También se hizo referencia a la posibilidad de revertir dicha situación en el mes de junio del año pasado mediante el otorgamiento de un préstamo del Banco Mundial, lo que iba a permitir llevar a cabo un mejor desarrollo de las tareas de control.

En las páginas 84/90 el doctor Cuello señaló que en ese momento se estaba investigando el caso de un grupo empresario —tal vez, el más importante que se estaba investigando— radicado en Comodoro Rivadavia, Tierra del Fuego, San Luis y Buenos Aires. Por mi parte, debo señalar que tampoco volvimos a tener noticias sobre este tema.

En la versión taquigráfica también se hace referencia a la investigación de las cerealeras, que oportunamente dio lugar a la formulación de una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. No volvimos a tener información en esta materia.

Con relación al tema de la sobre y subfacturación aduanera se generó una discusión en la que participaron muchos señores diputados y que ocupa, por lo menos,

treinta páginas de la versión taquigráfica. Tampoco tenemos noticias sobre esta cuestión.

Por consiguiente, no solamente debemos tener en cuenta lo expuesto precedentemente, sino también la circunstancia de que oportunamente hemos requerido informes acerca del funcionamiento del "Loter-IVA" —y lo único que pudimos saber en tal sentido es la cantidad de avisos que se publicaron en los diarios y el costo que ello representó— y no disponemos de información respecto de cuánto se recaudará y cómo estará concentrada la recaudación por contribuyente, ya que si el grado de concentración es elevado los mismos responsables que debían contribuir con débitos bancarios serán los que también lo harán con el IVA, lo que determinará que no haya más recaudación. Nos estamos engañando todos —el Tesoro nacional y las provincias— con una cifra que no existe.

Además, deberíamos saber en qué situación estamos. ¿Aumentó la evasión, o es que ha aumentado la recaudación y no hay más posibilidad de recaudar? Tal vez el hecho de que fracase el programa tributario se deba a los efectos técnicos y políticos a los que aludimos la semana pasada.

No costaría nada hacer un seguimiento de los primeros cincuenta contribuyentes y ver qué pasa con ellos. Esto permitiría comprobar si ellos tienen la misma vocación de evasión, si este hecho incide en la reducción de la actividad económica —como nosotros creemos— o qué es lo que ocurre. Pero en estas condiciones, sin una palabra más sobre el gasto desde el último mensaje del señor ministro, en cinco días vamos a someter a los argentinos a la cuarta o quinta reforma impositiva de este gobierno que pretende solucionar los problemas tal como ocurrieron en los casos anteriores. ¿Por qué? Evidentemente, estamos frente a un asunto que requiere un mínimo de análisis; y en este sentido, unas horas más o menos no significarán financiar o no al gobierno sino hacer las cosas ordenadamente para que haya posibilidades de prosperar o sencillamente se termine de "ensupetar" el sistema impositivo argentino.

Nos encontramos nuevamente en esta comisión, en medio de un estado de desesperación y de hiperinflación, para tratar de resolver el problema de otro modo. Queremos saber si la discusión es de la jerarquía de una simple reforma o si estamos hablando de otra cosa; es decir, de la involución de los recursos y gastos del Estado. Creo que el tema merece un debate de otra jerarquía y para eso no existe la mínima información necesaria. Además, no puedo entender que un capítulo como el de procedimiento tributario se trate con tanta ligereza. En el juego de prevenciones a favor y en contra del contribuyente hay un dictio jurídico inadmisible que implica no un dubito sino la prescripción definitiva para todos los impuestos que han desaparecido, ya que esto no podrá ser verificado a partir del 1º de enero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Este tema no requiere un análisis pormenorizado?

Creo que aquí no hay ningún problema de voluntad política; voluntad política es lo que sobra, lo que sobra es que atropellándonos con esa voluntad política muchas veces hemos llegado a reformas de esta naturaleza, pero nunca con la celeridad que experimentamos en los últimos tiempos. En general, no se obtienen mejores

resultados por tres o cuatro horas más o uno o dos días más; al contrario, es posible que se pasen gruesos errores. Hemos citado episodios que ocurrieron en el pasado cuando apresuradamente se pretendió sancionar normas que luego fueron vetadas por el propio Poder Ejecutivo, porque en cinco días había que volver a un régimen penal tributario en el ámbito de la Ley de Emergencia Económica que después fue vetada.

Luego apareció el famoso artículo 68 y tuvimos que votar una compensación que se pretendió en ese momento para las compañías aseguradoras que reducía el monto que se pagaba a los particulares por los siniestros. Con esta responsabilidad, no nos sentimos autorizados sino agraviados a que se aplique un procedimiento de esta naturaleza, ya que nadie podrá decir en la calle con seriedad que esta comisión hizo un análisis del paquete impositivo.

Sr. Presidente (Matzkin).— Señor diputado: felizmente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda existen archivos suficientes que demuestran que hay cientos de proyectos por los que se piden informes, que en los últimos años ni siquiera han podido ser tratados; no me refiero a aquellos que fueron aprobados pero que el Poder Ejecutivo no contestó sino a aquellos pedidos de informes sobre la marcha del gobierno que no han sido tratados por la Cámara.

¿Cómo es posible que ahora a algunos diputados les agure la desesperación por obtener información? ¿Por qué justamente ahora cuando nosotros estamos planteando nuestro deseo de dar la mayor información posible pero también nuestra necesidad de recibir respuestas ante algunas cuestiones?

Nosotros tenemos necesidad de acordar con el bloque del radicalismo un día para el tratamiento de este proyecto. No estamos pidiendo que lo voten en forma favorable. Votando como quieran, pero permítasenos tratarlo. Esta es una petición muy concreta y queremos acordar si es posible un día de tratamiento.

Vuelvo a explicar —pero ahora hasta la enésima potencia— que por el juego reglamentario en la medida que se solicita el llamado de nuevas entidades o el pedido de mayor información se va a demorar aún más el tratamiento del proyecto. Y no sabemos en qué medida se está acelerando aquí el deseo de una sana información con el deseo de una insana deformación para postergar las cosas.

Ayudemos a terminar con esta cuestión. Es un pedido concreto deseamos concertar, pero tenemos necesidad de saber cuándo podemos tratar esto, si lo podemos acordar; si no podemos hacerlo, tenemos alternativas distintas dadas por el reglamento de la Cámara de Diputados, donde a partir de un despacho tendríamos que esperar el tiempo suficiente si es que no logramos la mayoría necesaria para tratarlo sobre la hora. Pero ese tiempo —sea una o dos semanas— escapa del campo de lo razonable ante esta situación de urgencia.

Esta es una petición muy concreta ante la urgencia que tenemos. Si no podemos acordar, lamentablemente deberemos recurrir a las otras posibilidades. Creo que el mejor camino era pasar a un cuanto intermedio para ver si entre los responsables políticos de los bloques y los encargados de las comisiones encontramos una forma que pudiera satisfacer medianamente todas las ne-

entidades e instituciones; pero la respuesta que recibimos fue que ello sería innecesario porque de antemano —se explicó— no había posibilidades de llegar a un acuerdo.

A nosotros no se nos ocurre otra posibilidad más que la expresada: manifestamos nuestra mejor voluntad política para acordar algún tipo de wención y estamos dispuestos a flexibilizar mucho la norma.

Hemos escuchado a la oposición; hemos escuchado a las entidades; tenemos opiniones formadas sobre algunas cuestiones; estamos dispuestos a flexibilizar algunas de ellas —que no son menores—, pero todo esto tiene que estar dentro de alguna posibilidad de concertar las necesidades que cada bloque político tiene.

Tenemos urgencia —y no la entendemos— en conseguir un instrumento que nos permita iniciar un proceso de recaudación sin dilaciones. Esto es lo que se nos ha petitionado desde el Poder Ejecutivo, y es lo que les estamos transmitiendo y sobre lo que queremos persuadir.

Sabemos que no podemos aprobar este proyecto a lomo ciego; entonces, estamos dispuestos a flexibilizar en aquellas cuestiones que no tengan que ver con la recaudación o que cierren la posibilidad de competir, aspectos sobre los cuales difícilmente la oposición pueda estar en desacuerdo. Sobre el resto se puede conversar y estamos dispuestos a avanzar.

Insisto en que se debe concertar un día de tratamiento, y que ello no significa que ustedes vayan a votar favorablemente el proyecto sino simplemente que permitan su discusión. La defensa ciudadana que ustedes ejercen será puesta de manifiesto sin duda y en forma elevada en el recinto, donde cada uno expresará su punto de vista y donde la decisión será tomada mediante el único mecanismo que conoce un cuerpo colegiado: la cantidad de votos. No hay sistema político sin ese acuerdo político.

Sr. Tello Rivas. —Cree que tanto usted como nuestro corregidorario el señor diputado Baglini, han sido absolutamente claros.

Cree que acá no existe ningún espíritu obstruccionista para satisfacer las necesidades que el Poder Ejecutivo se ha planteado porque no estamos en presencia de un nuevo gobierno sino del mismo.

En mi opinión, para hablar de voluntad política debemos poner las cartas sobre la mesa. Baglini ha dicho claramente que necesitamos información. Adhiero al razonamiento del bloque de la Unión Cívica Radical en el sentido de que se nos mete en un brete porque estamos convocados para votar más impuestos pero no sabemos para qué, ni tenemos la seguridad ni la convicción doctrinaria ni técnica que dentro de dos meses no tengamos que volver a votar más gravámenes.

El pueblo no quiere más impuestos. Reflexionemos en común. Nosotros hubiéramos querido que se nos convoque al diálogo, al acuerdo para cambiar las políticas, pero se nos ha citado para realizar un nuevo ajuste innecesario e inservible. Aquí estamos de vuelta reciclando situaciones que han llevado al desprestigio de la clase política. Queremos ser convocados y convocamos a la reformulación de políticas, no para votar más impuestos.

Sabemos que el peronismo puede llegar a la mayoría para votar en la Cámara los recursos que necesita hoy el nuevo ministro de Economía, pero nosotros no podemos ir a votar haciendo de esto una transacción comercial, cargándolo por otro proyecto, por ejemplo el de la ley de lemas. No podemos discutir absolutamente nada que no tenga que ver con las necesidades económicas y sociales del pueblo argentino.

El radicalismo no hace transacciones que involucren una política económica que lleve al país al derrumbe y a una mayor dependencia, pero tampoco va a asumir una posición obstruccionista. Vuelvo a solicitar la información que requirió el señor diputado Baglini; si no sabemos lo que está pasando en el país en materia de privatizaciones y de reforma del Estado, es imposible suponer que el radicalismo puede prestarse directamente a esta nueva estafa a la voluntad popular, consistente en aplicar más impuestos al bolsillo del pueblo argentino.

Sr. Figueroa. —Somos conscientes —y tenemos experiencia en esto— de las urgencias que existen para sancionar este proyecto. Nos ha tocado vivir de cerca problemas similares y lo comprendemos, pero tengamos la certeza de que tenemos la suficiente madurez para saber que en determinado momento debemos adoptar una posición responsable.

Sugiero que se piense en invertir el procedimiento. Primero acordemos todas las variables posibles que en definitiva sirven para mejorar este proyecto. Hemos escuchado a las distintas entidades y creo que no puede decirse que existe consenso con respecto al tema; en caso contrario, lo que hemos hecho es hacerlos perder el tiempo porque nosotros vamos a votar lo que se nos ocurre.

Lo primero que se debería hacer es tratar de compatibilizar aspectos que sirven al proyecto, y mientras tanto que cada cual se vaya interiorizando más a efectos de tener un fundamento más sólido. Luego de esto, podríamos determinar una fecha para efectuar su tratamiento. No debemos proceder a la inversa: primero determinar la fecha de su tratamiento y después ponernos a estudiar el tema.

Sr. Ramos (D.O.). —Creo necesario hacer hincapié en algunos conceptos vertidos por mi colega de bancada.

En primer lugar, no tenemos muy en claro por qué tenemos que votar una norma —más allá de la comprensión de las necesidades de recaudación que tiene el Poder Ejecutivo— que nuevamente introduce la mano en el bolsillo de los contribuyentes, a los que estamos aquí representando. No sabemos cuál será el destino de estos fondos; no sabemos qué flexibilidad tiene el nivel de gastos presupuestado por el Poder Ejecutivo —porque, entre otras cosas, carecemos de presupuesto— ni si efectivamente ese nivel puede ser reducido, tal como ha sido reiteradamente prometido en los distintos anuncios que hiciera el anterior ministro de Economía. A pesar de todo esto, se nos quiere inducir compulsivamente a la sanción de una nueva ley impositiva que significará un mayor esfuerzo para esos mismos contribuyentes a quienes hace menos de dos años se les prometió, junto con el salarazo y la revolución productiva, la reducción al 50 por ciento de los impuestos que pagaban.

Tenemos que estas cosas vuelvan a suceder. Y así como nosotros comprendemos las necesidades que tiene el partido oficialista también ustedes deben entender que no se trata de que falte voluntad política sino de defender los intereses generales de la población. Es por ello que por ningún concepto vamos a consentir apartarnos de las paulas reglamentarias estrictas que rigen el funcionamiento de esta Cámara; por el contrario, pretendemos aprovechar cada momento del debido trámite para dejar claramente expresada nuestra posición. No estamos haciendo obstruccionismo parlamentario; simplemente defendemos el bolsillo de quienes en definitiva nos ubicaron en estas bancas.

Sr. Presidente (Matzkin).— Tiene la palabra el señor diputado Balestrini.

Sr. Balestrini.— Simplemente quiero hacer una reflexión. El señor diputado Barilini planteó una duda; el bloque radical, en su conjunto, pregunta por qué existen urgencias, por qué no podemos esperar más tiempo, por qué la Argentina vive de urgencia en urgencia. Hace pocos días tuve oportunidad de conversar con el subsecretario de Hacienda y mi preocupación era la misma. Ya dije en la reunión anterior, cuando analizábamos este proyecto de reformas, que si yo tuviera que hacer una crítica del sistema impositivo argentino quizá mi descripción sería mucho más dura, mucho más dramática que las que aquí escuchamos.

El sistema impositivo argentino, más allá de la existencia de errores técnicos o de la posibilidad de introducir ajustes en la redacción de algunas disposiciones, está herido de muerte. Ello es así por un problema central: en nuestro país se evaden 6 mil millones de dólares. Todos conocemos estas cifras. En el sistema impositivo argentino la evasión, en ciertos rubros, alcanza al 65 por ciento de lo que según las previsiones legales debería recaudarse. Este es el problema central que aqueja a nuestro régimen tributario.

No creo que alguno de los señores diputados tenga dudas de que los argentinos debemos reformular fundamentalmente nuestro sistema impositivo. La Argentina debe reformular su sistema impositivo. Por consiguiente, me parece poco serio decir que las incógnitas, la falta de información y de organización constituyen motivos que nos pueden demorar en cuanto al inicio del tratamiento de este proyecto.

Anteriormente señalé que en oportunidad de hablar con el secretario de Hacienda me planteé la gran diferencia existente entre estos momentos que vive la Argentina y los correspondientes a otros tiempos. Yo veía una planilla en donde estaba indicada, mes a mes en los últimos años y décadas, la forma en que el secretario de Hacienda había pagado las cuentas del Estado. Al mismo tiempo, observaba que se habían elaborado déficit espectaculares del Estado que debían ser cubiertos mediante la solicitud de fondos a los de afuera —recurso que se agotó y mediante el cual nos quedó la deuda externa—, o bien, a los de adentro. Por último, pudimos apreciar también que la financiación se llevaba a cabo a través de la emisión monetaria.

Lo cierto es que en este momento lo único que puede hacer el Estado es gastar lo que recauda. Por imperio

de la realidad, los argentinos hemos empezado a hacer lo mismo que todos los países serios, es decir, aquellos que manejan sus cosas con responsabilidad. Esto significa, por ejemplo, que si recaudamos diez únicamente podemos gastar esa misma cantidad. No podemos hacer otra cosa.

Por otra parte, resulta evidente la existencia de problemas sociales como consecuencia de la falta de financiamiento del Estado. Tenemos inconvenientes en todos los sectores de la sociedad argentina, y una gran parte de la existencia de esos problemas obedece a la circunstancia de que el Estado no dispone de los instrumentos necesarios para afrontar y solucionar esas dificultades. Los jubilados y pensionados, los empleados públicos y los maestros nos dicen que tienen graves problemas; nosotros lo sabemos y somos conscientes de ello, porque también formamos parte de la sociedad.

De manera tal que, por un lado, debemos financiar al Estado con lo que recaudamos, y por el otro, señalar que tenemos un sistema impositivo muy malo, que se ha ido enrareciendo y llenando de normativas absolutamente faltas de ortodoxia —lo que es factible de comprobar si se analiza lo que técnicamente debe contener un sistema impositivo—, como consecuencia de la urgencia y de la característica principal de nuestro sistema impositivo, que es la evasión fiscal. Precisamente, a partir de esta última particularidad ha nacido la gran parte de las deformaciones que afectan al sistema impositivo argentino, y si no, ¿qué es lo que hace este gravamen sobre los débitos bancarios? Lo que hace es echar mano a un instrumento que en sí mismo no constituye una base de imposición, sino que es la posibilidad de recaudar imputándolo posteriormente a otros tributos, ya que nuestro sistema impositivo está plagado de mecanismos de evasión que constituyen —tal como lo señalaba anteriormente— su falencia principal.

Por último, quiero adherir a lo planteado por el diputado Lamberto. Lo que pedimos es que no se consideren a los problemas del gobierno como problemas del justicialismo. No voy a decir que esto es injusto; es más grave, es tonto pensar que los problemas del gobierno son problemas únicamente del justicialismo y que nosotros somos los únicos responsables o interesados en resolverlos. Aspiro a una sociedad en donde los problemas que tenga el gobierno sean los problemas de todos los argentinos. En realidad, creo que esto es así. Estoy absolutamente convencido de que si asumiéramos esta actitud y entenderíamos que los problemas son de todas las bancadas que participan en esta reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, llegaríamos a la conclusión de que dilatar el tratamiento de este proyecto es mucho más grave que entorpecer la sanción de la ley en sí misma. Justamente el problema que tenemos es de tiempo. Si tuviéramos la posibilidad de que alguien le prestara a los argentinos mil millones de dólares, como ocurrió en otra época cuando el Estado se financiaba con préstamos de ese tipo, qué lindo sería. Entonces podríamos hacer una hermosa convocatoria para discutir el sistema impositivo argentino; dispondríamos de plata para financiar al Estado y también podríamos sancionar hermosos impuestos y mejorar la Dirección General Impositiva, pero lamentablemente no disponemos de ese dinero.

Es importante que vayamos solucionando los problemas que hemos recibido, intentando distintos caminos y aun cometiendo errores, porque también debemos reconocer que equivocarse es propio de quienes asumen responsabilidades, como se dijo aquí. Me refiero también a los que miran desde el cielo y creen que todos los demás son los responsables de las cosas que pasan, y no tienen problemas ni urgencias.

Por lo dicho, adhiero a lo manifestado por el señor diputado Lamberto en el sentido de que iniciemos el tratamiento parlamentario de este asunto mientras seguimos el debate a fin de que podamos pronunciarnos sobre la norma.

Sr. López Arias. — Hace un rato escuché atentamente las observaciones del señor diputado Baglini y creo que existe consenso unánime en considerarlo uno de los legisladores más brillantes que tiene el Congreso de la Nación. Además, debo aclarar que mientras lo hacía compartía muchas de las observaciones que fue vertiendo en el transcurso de su disertación.

Por otra parte, escuché también las inquietudes planteadas por las distintas organizaciones que fueron invitadas a esta reunión. Creo que muchas de las observaciones que formularon son totalmente valiosas y atendibles, y podrán ser consideradas como aportes útiles para enriquecer el debate, y en definitiva, el proyecto de ley en consideración.

Comparto la inquietud de muchos legisladores en el sentido de estar suficientemente informados, porque son muchas las iniciativas que hemos votado y por supuesto que el Congreso tiene derecho a conocer en profundidad cuál es la situación, cuáles son los resultados que derivan de los mecanismos que votó y cuáles las fallas que impidieron que estos resultados no hayan sido los esperados.

Pero mientras escuchaba todo esto me ponía en la situación del ciudadano común, para tratar de pensar qué diría un ciudadano medio argentino sobre el debate que estamos desarrollando aquí.

Este ciudadano que vive esta crisis económica, a lo mejor es habitante de una provincia que en este momento no alcanza a satisfacer necesidades mínimas de su presupuesto. Este ciudadano común ve el drama que vive el país, lo intuye aunque no conozca las explicaciones técnicas, y sabe que en este momento esta comisión resuelve cosas importantes para paliar esta situación.

Estoy seguro de que este ciudadano común reclama un debate profundo sobre este tema; lo reclama de los legisladores, que somos los responsables de solucionar los problemas. Pero también estoy seguro de que ese ciudadano común no desea que se opongan cuestiones meramente formales a aquellas de fondo y sustanciales. Estoy convencido de que no quiere, desde ningún punto de vista, que se demore este necesario debate que tenemos que dar en el recinto.

Digo esto porque sé que los miembros de la bancada justicialista y de los demás partidos somos conscientes de que los problemas que hoy tenemos son del país y no de un partido político determinado, y que es responsabilidad de todos encontrarles solución. Estoy persuadido de que todos juntos, sin preconcepciones, vamos a dar nuestro aporte para encontrar un instrumento

adecuado a fin de afrontar con satisfacción y éxito esta crisis.

Pero es imprescindible —esto quiero dejarlo bien en claro— que fijemos ya antes el trámite y determinemos cuál será la fecha del debate. Una vez logrado esto, creo que vamos a estar dispuestos a dar esa amplia discusión y buscar coincidencias para llegar la ley impositiva más eficiente e idónea posible para la solución de esta crisis.

Demorar en este momento el despacho de la comisión significa no determinar una fecha y encontrarnos con el riesgo de un posible desacuerdo que puede llevarnos a que este debate necesario se desdrene fuera de una situación que prácticamente no admite demora.

Fijar la fecha para tratar el despacho de comisión significa tener la certeza de que este tema podrá ser discutido en el recinto como corresponde.

En el interim, estoy convencido de que podremos dar los aportes que sean necesarios para llegar al recinto, quizás con posturas distintas, pero que realmente dirán a la ciudadanía argentina una muestra de que asumimos con responsabilidad y grandeza este momento histórico que nos toca vivir.

Es por eso que llamo a la reflexión a los distintos integrantes de los bloques. Creo que es imprescindible mostrar a la sociedad que emitimos despacho de comisión —pues es la forma más rápida de actuar— y que determinamos la fecha en que podrá hacerse el debate en el recinto sobre esta cuestión. A partir del momento en que se elabore ese despacho, estoy convencido de que las distintas bancadas van a estar dispuestas a encontrar una forma de consenso, y creo que los acuerdos van a ser mucho más importantes de lo que nosotros mismos creemos.

Reitero que muchas de las observaciones que han vertido las bancadas de la oposición, en el fondo son compartidas por muchos de los integrantes de mi bloque, y podemos avanzar en la reforma impositiva seria y profunda que supone la época de crisis.

Es nuestra preocupación como legisladores y ciudadanos argentinos llevar tranquilidad a las provincias que prácticamente no soportan más la situación que hoy viven, y que quizás mañana no puedan prestar servicios esenciales a la población si no recaudamos los fondos suficientes como para atender esas necesidades sin generar un nuevo proceso de hiperinflación.

Somos conscientes de todas nuestras responsabilidades, y en este marco de civilizada convivencia propongo que demos el despacho a este proyecto, fijemos la fecha para el debate y busquemos la forma de ejercer responsablemente nuestra tarea de legisladores de la Nación.

Sr. Presidente (Matzkin). — Tiene la palabra el señor diputado Figueras.

Sr. Figueras. — Todos comprendemos en realidad a qué se apunta, y efectivamente creo que tiene como fundamento poder llegar a acelerar en la medida de lo posible el tratamiento de este proyecto.

Le voy a comentar al señor subsecretario de Ingresos Públicos una impresión que tengo, tratando de ser sumamente honesto, tanto que no me atrevera a decirlo fuera de aquí. Este es un paquete impositivo para el campo.

Sr. Canata. — Si me permite una interrupción, señor diputado, quisiera reiterar a la Presidencia que se encuentran presentes alrededor de diez rectores de distintas universidades del país.

Solicitaría que los recibamos porque muchos de ellos tienen que volver a sus provincias, y que luego continuemos con la reunión.

Sr. Dumón. — Los rectores tuvieron que retirarse pero manifestaron que quedaban a disposición de la comisión para asistir cuando les fuera posible.

Sr. Figueras. — No sé en qué porcentaje —aunque es elevado— pero en la práctica el impuesto a los activos es un gravamen a la tierra que se superpone a los inmobiliarios, a la tasa de caminos, y produce una situación insostenible. El hecho de que en el impuesto a los activos se contemplen las ventas que se hagan a crédito, significa una visión absolutamente fuera de toda lógica y compromete sobremanera al sector.

Con respecto al IVA, se han dicho muchas cosas y es inútil repetirlas en mérito al tiempo que llevamos de reunión. Tenemos información de lo que se recaudó en concepto del impuesto al valor agregado, pero yo quiero saber cuál es el índice de evasión en este impuesto, y además cuánto se les debe a los exportadores, porque este gravamen funciona en la práctica como una retención.

En el fondo, el motivo de este paquete impositivo es que estamos en una situación de emergencia. Esto es algo que debería ser comprendido por todos. Creo que ninguno se va a beneficiar si explota el sistema, y en este sentido comprendo la inquietud de los colegas del justicialismo y la comparto: vivimos en el mismo país y no me gustaría afrontar las mismas consecuencias.

¿Por qué aplicarle semejante cantidad de impuestos al campo, con un sistema operativo que hasta puede ser declarado inconstitucional? ¿No es más fácil aplicar la retención? Debe gustarle menos al sector agropecuario que le pongan retenciones a que se haga este semejante berenjenal de impuestos. Soy un opositor terrible a las retenciones; me parecen un disparate. Pero esto es peor y además es mucho más difícil de digerir.

Se trata de un paquete impositivo que no conlleva ninguna solución a los problemas sociales, y no se sabe qué efectos va a tener. Cuando se agota la capacidad contributiva de la gente, ésta deja de pagar. Esto es poner a la gente y al sector agropecuario en una situación difícil.

Obviamente, señor subsecretario, esto nada tiene que ver con la revolución productiva. Si esta es la realidad, ¿por qué no sinceramos todo? Repito que es preferible aplicar las retenciones; además, lo pueden hacer por decreto y de esa forma no necesitan conversar con nosotros ni precisan determinar la fecha en la cual debe haber una reunión.

Si yo fuese productor agropecuario y tuviera que optar entre el aumento del 15 por ciento en las retenciones y este paquete impositivo, elegiría ese incremento en las retenciones.

Tengo una muy buena opinión del ministro y de usted como recaudador, señor subsecretario, pero con este

paquete impositivo me han defraudado porque no tiene ninguna originalidad, ningún resultado asegurado y no le cae simpático a nadie.

Así como sinceramos el hecho de que estamos en una situación de emergencia y necesitamos recaudar, podríamos decir que todo lo que se hizo anteriormente no sirvió para nada. En el fondo, no sirvió para nada; hoy tenemos que empezar de nuevo. El señor subsecretario, como es nuevo en el cargo, tiene la gran esperanza de que las cosas anden bien. Ojalá sea así; yo valoro que él tenga expectativas. Si no las tuviera, ¿qué quedaría para los demás? Sería lamentable.

No obstante, no puedo coincidir con la postura que se manifiesta a través de este proyecto, que implica mandar a un sector a la ruina. Creo que sería mucho más fácil contemplar otras medidas que podrían tener un costo social mucho menor. Esto no significa que yo alabe el sistema de las retenciones. Seamos claros: siempre he estado en contra de las retenciones porque me parecen un disparate. Creo que en un mundo que está subsidiando la producción agropecuaria las retenciones obviamente constituyen un castigo innecesario para el productor argentino. Pero prefiero cualquier cosa antes que este paquete impositivo; si tengo que adelantar mi opinión respecto de este proyecto, debo decir que el sistema que propicia es muy malo. Se está tratando de acelerar su tratamiento sin tener en cuenta que su aprobación sería muy dañina para la producción. Creo que deberíamos estudiar la posibilidad de establecer otro tipo de variante.

No es lógico que determinemos una fecha cuando falta conciliar. Qué mejor cosa podría descartar el país que un paquete de leyes aceptado por lo menos por los dos partidos mayoritarios. Nadie quiere perjudicar a nadie.

Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Si a Menem le faltaran seis meses —como le ocurrió a Alfonsín— para concluir su gobierno sería una cosa; pero le faltan cuatro años y medio. Si a esta altura tenemos todos estos problemas, dentro de cuatro años la situación va a ser terrible.

Queremos colaborar para que la cosa siga, aunque no nos guste. Pero sinceramente quiero dar mi impresión personal. Esta iniciativa es peor que todo lo que se ha hecho hasta ahora. Además, importa acelerar a pasos jamás vistos el deterioro de un sector que obviamente no está experimentando la revolución productiva que se le prometió.

Sr. Presidente (Matzkin). — Tiene la palabra el señor diputado Lamberto.

Sr. Lamberto. — Me parece que estamos un poco devaluados. Ahora nos conformamos con el impuesto a los activos; algunos señores diputados hasta proponían que se estableciera el impuesto a la renta potencial de la tierra. Fíjense cuánto hemos resignado en estos años...

Sr. Figueras. — Si, sería mejor que estableciéramos el impuesto a la tierra libre de mejoras. Sería preferible. Ahora todos se han vuelto liberales; nadie quiere impuestos discriminatorios. Yo estoy de acuerdo con el impuesto a la tierra libre de mejoras.

Sr. Lamberto. — Sancionémoslo...

Sr. Cortese. — Soy autor del proyecto. Que se traiga a la consideración...

Sr. Dalmau. — Hace ocho años que soy diputado y escucho estas cosas. Según cuál sea la situación política del partido al que cada uno pertenece, cambia el libreto. Todo depende de qué partido ha ganado o perdido las elecciones. Se mezclan los discursos; las palabras que hoy escuché de la oposición son más o menos las que decíamos nosotros cuando éramos, a nuestra vez, oposición. A mí me preocupan los tiempos. Si hoy no establecemos la forma de llegar a emitir dictamen ni siquiera el próximo miércoles podremos tratar el tema en el recinto. Eso sería tirar la pelota muy hacia adelante, sobre todo si tenemos en cuenta que las administraciones provinciales no aguantan más.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la comisión, diputado Raúl Eduardo Baglini.

Sr. Dalmau. — Yo creo que el debate que se está desarrollando en esta comisión no tiene un carácter definitivo. Por el contrario, pienso que el debate definitivo es aquel que tendrá lugar en el recinto. No obstante, en el interregno disponemos de muchos días para conversar y expresar nuestras diferentes posiciones. Por eso, y porque así lo indica la experiencia de tantos años, es que me preocupa la marcha del reloj. Por otra parte, no comparto las expresiones vertidas por el señor diputado Jesús Rodríguez en el sentido de que esto es una cuestión de beligerancia. Realmente no lo creo.

A lo largo de ocho años hemos debido afrontar muchas situaciones como éstas, por lo menos cuarenta, con varios temas diferentes. En consecuencia, lo que realmente me preocupa es que nosotros perdamos la posibilidad reglamentaria de tratar este tema en el recinto el próximo miércoles al extender demasiado nuestras deliberaciones en el ámbito de esta comisión. Reitero: a partir de la emisión de un dictamen por esta comisión, el debate definitivo es el que tiene lugar en el recinto; no obstante, en el interregno podemos efectuar todas las reuniones necesarias a los efectos de ir acercando posiciones. Pero lo cierto es que a la hora 11 y 55 del día de hoy debemos tomar alguna decisión con relación a esta cuestión.

Sr. Ramos (D. O.). — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Dalmau. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Baglini). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Ramos.

Sr. Ramos (D. O.). — Señor presidente: simplemente, quisiera expresar una cuestión reglamentaria en el sentido de que no se trata de siete días a partir del momento de la votación, sino que son siete días hábiles desde el momento de la impresión.

Sr. Presidente (Baglini). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Dalmau.

Sr. Dalmau. — ¿Y si ya está impreso, señor diputado? Acá no lo tenemos a Jesús, pero igual hacemos milagritos. (Risas.)

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la comisión, diputado Jorge Rubén Matzkin.

Sr. Cortese. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Matzkin). — Tiene la palabra el señor diputado Cortese.

Sr. Cortese. — Señor presidente: realmente, ésta es la Cámara de los milagritos. Si bien es cierto que en algunas ocasiones hemos recibido alguna explicación acerca de las razones por las cuales la imprenta pone en circulación algunos dictámenes con fecha posdatada, yo quisiera señalar al señor diputado Dalmau que en realidad la cuestión es otra. Además, creo que el señor diputado tiene algunas confusiones en cuanto a los horarios.

Pienso que posiblemente podríamos explicar este paquete impositivo dándonos cuenta de que no hay una Argentina del este y otra del oeste, sino que hay una Argentina del sur, y ése es un hecho que debemos asumir. Y quizás esto nos permita resolver algunas cosas.

Frente a la necesidad de adoptar una decisión en cuanto al análisis de este proyecto que estamos considerando y a fin de no perder de vista al significado que tiene la participación en un tema tan importante, pienso que debemos recordar y tener presente lo acontecido oportunamente con uno de los proyectos de ley propuestos por el actual Poder Ejecutivo al asumir sus funciones. En tal sentido, el proyecto de ley de emergencia económica venía en revisión del Honorable Senado. El día anterior había sido tratado por esta Honorable Cámara. Hubo urgencia. El señor diputado Manzano y yo tuvimos la suerte de cerrar ese debate; no hubo otros discursos, con excepción de las simples adhesiones que tuvieron lugar en horas de la madrugada. Yo efectué dos observaciones acerca de dos capítulos: una, referida al aspecto penal tributario, y la otra, al artículo 68, que trataba de ser prerrogativa para el sistema de seguros en la Argentina. Seguramente que habían aparecido los *lobbies* en la calle Hipólito Yrigoyen; y hubo muchas urgencias. ¿En qué terminó aquella historia? Con dos vetos parciales del Poder Ejecutivo precisamente a los artículos sobre los que habíamos planteado observaciones.

Por eso creo que estamos en un error si consideramos que nos encontramos en la etapa del simple análisis de la urgencia. Si entráramos al fondo del asunto seguramente se reabría el debate.

Si tuviera que resumir las dificultades que vemos todos —incluso yo— señalaría sólo tres. La primera se refiere al interrogante del hombre común, al que ya se han referido aquí. Qué piensa el hombre de la calle sobre la urgencia y los servicios postergados que pueden existir incluso en el marco de las crisis provinciales. Como dato ostensible puedo afirmar que hay dificultades de caja, que hay un nuevo ministro, una propuesta tributaria innegable y el anuncio de un nuevo programa económico para más adelante. En función de la respuesta que debe recibir el hombre de la calle, yo tengo el interrogante de apoyar o no en general este proyecto. Comparto lo que creo es el interrogante del común de la gente. La población no se preocupa tanto por el producto bruto que tenga que surgir de la actividad del país para atender los gastos del Estado sino por algo mucho más importante: cuál es el modelo económico, a dónde se tiende con la presión tributaria, cuál es el mecanismo de distribución, en síntesis, a dónde va a para el país. Por eso, cuando se planteó la posibilidad de

alcanzar un proyecto para establecer un impuesto de emergencia de tránsito breve me presenté de manera especial a pesar de tener algunas discrepancias.

No puedo pedir al ministro que venga y me diga cuál es el proyecto económico. Ya no sé a qué hay que echarle mano en la Argentina. Pero no puede pedirle al funcionario anterior que dijera que iba a echar a mano a los plazos fijos; tampoco sé si se trataba de otros ámbitos de la actividad económica que podían ser succionados. Creo que las deudas del Estado no se pagan; hay una suspensión. Los productores están mal, la educación también; la gente se pregunta cuál es el modelo, a quiénes respondemos; si decidimos nosotros o lo hacen desde afuera. Son muchos los interrogantes y debo seguir pensando en esos términos.

No sé si estamos en el camino correcto. Creo que están equivocados; están multiplicando por cuatro los impuestos a los débitos y a los activos. El señor subsecretario ha dicho que redondeaban del 15,6 al 16 por ciento, pero eso es una mentira. No hay redondeos en la intencionalidad del proyecto, porque después viene el 25 por ciento que lleva al 30 por ciento. En cuanto al IVA de ~~no~~ inscriptos vinculados con los servicios específicos, si se ejerciera la facultad del 25 por ciento se llegaría al 48,875 por ciento. En consecuencia, no veo que existan redondeos en este proyecto.

El tercer interrogante que tengo —que es mayúsculo— se refiere al capítulo especial vinculado con lo que los otros días denominé “el tercer indulto” —porque contiene una propuesta de tipo político que en definitiva es una condonación—, y sé que bajo la fórmula del indulto venía una amnistía. Todavía no tengo definido cuál es la naturaleza jurídica y quiero preguntarlo, porque tiene mucha trascendencia.

Esto no va ni en beneficio ni en perjuicio del imputado. Aquí se habló hoy de Komer-Salgado. Acero es un ejemplo con nombre y apellido para que sirva de símil. ¿Qué pasaría si en la bolsa de lo no esclarecido hubiera en la DGI otro Komer-Salgado dando vueltas que urgentemente va a ponerse al día con el último año para que nunca más en la Argentina se lo pueda sentir ante la justicia?

Tengo muchos interrogantes y ustedes me quieren hacer votar. Digo que hoy no estoy en condiciones de votar.

Sr. Presidente (Matzkin). — Tiene la palabra el señor diputado Jorge A. López.

Sr. López (J. A.). — Señor presidente: hay muchas cosas que son evidentes en torno al debate que estamos realizando. Es evidente para nosotros hoy que tenemos la necesidad de encauzar el trámite de este proyecto de ley y darle fecha cierta a su tratamiento. Es público y notorio que hemos comprometido nuestro esfuerzo para que este proyecto sea aprobado en el más corto plazo posible. También es público y notorio que la conducción económica ha apegado este instrumento con la expectativa inmediata de aumentar la recaudación por vía de ampliar la tasa de algunos impuestos y al mismo tiempo para combatir la evasión, que supone ser el flagelo más importante que tiene la administración pública en estos días.

Hay evidencias también de que muchas cuestiones no son resueltas en nuestra sociedad como nosotros queremos. Estamos sometidos a diversos fenómenos —de afuera y de adentro—, antecedentes que nos indican nuevas limitaciones y que naturalmente hacen que hoy nuestro país no tenga el desarrollo de una política social justa; no tenga un aparato de recaudación tributaria que haga justos los impuestos; y no tenga un sistema justo de justicia pues los argentinos estamos muy disconformes con lo que pasa. No es una patria justa, libre y soberana.

Estas son evidencias, y no hace falta repetirlas acá porque la gente las conoce.

Nosotros tenemos la obligación de hacer pensar también a la gente que así como los impuestos a veces son causantes de recesión y un perjuicio para las personas, al mismo tiempo son requeridos para una cuestión básica sobre la cual en definitiva todos estamos de acuerdo: el principio de la recuperación del país, que es lograr a corto plazo un esquema de estabilidad económica que nos permita pensar seriamente en la recuperación de nuestra economía y de la confianza y credibilidad en el sistema.

Hoy hemos tenido oportunidad de recibir a un sinnúmero de entidades; pero todas ellas han planteado inquietudes desde un punto de vista sectorial, sin tener en cuenta el interés general. Así, nos han informado sobre lo que puede suceder con los impuestos y procedimientos que mediante este proyecto se piensan llevar a cabo.

Nosotros poseemos mucha información. Varios de los señores diputados aquí presentes conocemos de impuestos y sabemos que aquellos gravámenes modificados por el proyecto no son de gran complejidad y sus consecuencias pueden conocerse fácilmente. Sabemos que la mayoría de los impuestos a tratar son teóricamente inconvenientes, de acuerdo con la doctrina impositivista, tal como ocurre con el impuesto a los débitos bancarios o el impuesto a los activos. El primero debería eliminarse y el segundo debería ser sustituido por el impuesto a los capitales. El impuesto a la transferencia de divisas es un obstáculo al comercio exterior, y se lo implanta a pesar de que queremos desarrollarlo en el corto plazo.

Conocemos la deficiencia de los instrumentos que estamos analizando a la perfección, así como la conocen hombres especializados en la materia como lo es el señor diputado Baglini y otros de la Unión Cívica Radical. Es decir que no hace falta mucha más información para conocer con seguridad las consecuencias de estos impuestos. Lo que se necesita es pensar que la Argentina requiere hoy más que nunca una demostración de la existencia de los recursos con que se asumirán los próximos gastos, porque no está lejos aún el fantasma que agobia cotidianamente a nuestra economía: la hiperinflación; la desconfianza no se crea de un día para el otro.

Es cierto que con nuestra actividad gubernamental, algunas veces hemos podido abonar el descreimiento y la confianza en otras, pero no hay duda de que éste es un proceso largo y que nos encontrará en el futuro a los argentinos unidos.

Esta no será la única oportunidad en que tendremos que aguzar nuestra imaginación y creatividad para en-

contrar sistemas que logren mayor confianza, que es la base concreta de la reactivación, la estabilidad y el equilibrio económico de un país.

Hoy nosotros podemos decir que hemos recogido inquietudes importantes. No estamos pidiendo que esas inquietudes sean todas tiradas por la borda, ni que las de la oposición —aquellas que no desvirtúan el sentido que tiene la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo— no pueden ser tenidas en cuenta.

De más está decir que nos queda una gran cantidad de temas por conversar: la presunción de *jure* que establece el proyecto; el problema de la clausura de los locales; la situación de abogo financiero en que se verían algunos agentes económicos debido al impuesto a los débitos bancarios, como los corredores de comercio y los mercados de valores; la cuestión de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la fijación de las tasas de algunos impuestos; la disyuntiva en que se ven inmiscuidos los bancos, que no pueden trasladar el impuesto a los débitos bancarios propio; otras cuestiones relacionadas con los bancos, en relación al crédito fiscal que provocaría el aumento del IVA sobre los servicios, que no podría ser transferido debido a que no tienen que tributar este impuesto.

Además, deberíamos analizar otros temas como, por ejemplo, la aplicación del impuesto a los activos sobre importantes empresas del Estado, que al tener que oblarlo significaría una carga en muchos de los casos.

En fin, podríamos conversar de muchas cosas si encontramos entre las distintas bancadas el acuerdo que permita emitir un despacho sobre este paquete impositivo, y de tal forma, cumplir con el objetivo político al que nos vemos enfrentados.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la comisión, diputado Antonio Isaac Guerrero.

Sr. Figueras. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado? Quisiera preguntar si hay margen de conversación en lo que hace a...

Sr. Presidente (Guerrero). — Usted se dará cuenta, señor diputado, de que todos los discursos que estamos escuchando tienen alguna motivación...

Sr. Figueras. — Mi pregunta se refiere al aspecto práctico.

Sr. Presidente (Guerrero). — El señor diputado López se ha referido a la posibilidad de flexibilizar la redacción en todos los puntos que ha enunciado. Pero ya habíamos dicho que, en tanto hubiera acuerdo, se podría modificar sustancialmente el proyecto.

Sr. Figueras. — Tengo una gran consideración y especial afecto por el señor diputado López, y creo sinceramente lo que él dice. Pero sobre el tema de los bancos no puedo dejar de señalar que en definitiva el país andaba mejor cuando había la cuarta parte del número de bancos que hay hoy. De manera que uno nunca sabe bien qué es lo que perjudica o beneficia al sistema financiero.

Aquí hay un punto fundamental. Recién el señor diputado Lamberto proponía que estableyéramos el impuesto a la tierra libre de mejoras. Hagámoslo, si es necesario, porque no podemos considerar seriamente la

aplicación del impuesto sobre los activos al sector agropecuario, que tiene mucho más capital —pero también mucha menor rentabilidad, en relación al capital— que cualquier otra actividad, y que además sufre la superposición de ese tributo con el impuesto inmobiliario y con las tasas de caminos. Si aquella propuesta sirve para mejorar la situación, tengámosla en cuenta. Pero creo que eso será algo difícil de lograr.

Es allí donde surge la necesidad de un acuerdo para introducir alguna modificación al sistema. Esa es mi preocupación. Los detalles se van a arreglar, como se arregla todo en la vida cuando hay conversación. Pero aquél es el punto crucial al que debemos apuntar.

Sr. López (J.A.). — Estoy convencido de que más que nosotros, nuestra gente, nuestro país, sabe que no hay retorno a la Argentina del pasado. Tal vez ahora nos peguen quienes están militando en otros partidos políticos, porque creen que no estamos en el mismo camino. Pero si no nos damos cuenta de que si estamos en el mismo camino la gente nos va a pegar a todos nosotros. A la Argentina del pasado, a la Argentina de la ineficiencia, no hay retorno. Hoy podemos ser ineficientes porque contamos con un aparato que es altamente ineficiente.

No creo que el desentimiento entre quienes conformamos la representación nacional sea tal que no podamos ponernos de acuerdo. Quizá nuestro gobierno cometa errores, y así como su popularidad crece cuando acierta decrece cuando desacierta. Pero la Argentina está transitando el único camino posible: el de transformar el Estado y la sociedad. Estoy convencido de que a ese objetivo la tarea de nuestro gobierno está contribuyendo mucho, además de complementar la labor que el gobierno anterior realizó en aspectos relacionados con la democracia.

Nuestro gobierno ha iniciado, en forma dura y realista, la discusión de la reforma del Estado en la sociedad argentina. Allí todos coincidimos, y lo demás es cuestión de confianza. Nosotros debemos confiar más que la oposición en lo que nuestro ministro de Economía dice, y efectivamente confiamos en él porque conoce el problema económico, porque tiene una visión integral del tema, porque no sólo ha planeado el ajuste sino que está tratando de que ese ajuste no se base en los impuestos que inciden directamente sobre el consumo o las rentas del trabajo, y porque está intentando reducir la evasión en ese sector informal de la economía que es el que obtiene mayores ganancias. Y está tratando de hacerlo sobre los activos. Aunque pueda decirse que es contrario a la inversión, no hay dudas en el sentido de que se está tratando de llevar las cosas más hacia las rentas que hacia la producción y el trabajo.

También hay que tener en cuenta otros aspectos importantes, como por ejemplo la circunstancia de que el incremento del dólar es menor que los aumentos tarifarios y que el traslado de los impuestos a las tarifas. Por consiguiente, nuestros exportadores disponen actualmente de un beneficio.

Oportunamente pude escuchar, en el transcurso de esta reunión, a algunos oradores que sostenían que la situación actual por la que atraviesa el campo era la misma en lo relativo a la comparación que se podía

efectuar entre la variación del tipo de cambio y los costos. Yo sé que la actual situación del campo es crítica, y en algunos sectores particulares hasta puede llegar a ser de quebranto. Pero, sinceramente, no puedo creer que cuando se registra un ajuste del tipo de cambio que oscila entre el 80 y el 90 por ciento, sin que al mismo tiempo se haya producido un aumento de igual magnitud en las tarifas, podamos estar pensando en que el incremento del dólar haya sido absorbido totalmente por los costos. Realmente eso constituye, un pensamiento inexacto, por no decir una mentira. Pero los empresarios niegan los efectos positivos del ajuste cambiario sobre los precios del agro.

Todos los impuestos son dañinos hoy dada la situación por la que atraviesa nuestra producción. No hay dudas de ello. Pero me atrevería a manifestar que los más dañinos son aquellos impuestos que no se recaudan. Nosotros tenemos la intención de recaudar más impuestos. Si se elimina la evasión impositiva, habremos avanzado en la posibilidad de reestructurar nuestro sistema tributario, pues la evasión impositiva que se viene registrando hace difícil pensar en un sistema impositivo que responda a alguna política coherente.

Sr. Caviglia. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guerrero). — Supuso bien, señor diñor diputado Caviglia.

Sr. Caviglia. — Señor presidente: como lo que aquí se está discutiendo es la oportunidad o el momento de tratar el tema de fondo y nuestro bloque ya tiene una posición tomada al respecto en el sentido de rechazar la iniciativa, yo preferiría hacer uso de la palabra para referirme a la cuestión de fondo una vez que se haya resuelto si este tema va a tener despacho de comisión esta noche o si por el contrario el cuerpo va a pasar a cuarto intermedio.

Sr. Presidente (Guerrero). — No podría suministrarle precisiones en cuanto a la consulta que usted me ha formulado, señor diputado.

Sr. Caviglia. — Como puede apreciar que no se hallaban presentes los señores diputados Manzano y Baglini, supuse que se estaban llevando a cabo conversaciones en este sentido.

Sr. Presidente (Guerrero). — Supuso bien, señor diputado.

Sr. Balestrini. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Guerrero). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado Balestrini.

Sr. Balestrini. — Con relación a la propuesta formulada por el señor diputado Figueras en cuanto a la predisposición destinada a mejorar estos instrumentos, creo que la misma es total y absoluta. Por otra parte, se verifica en el marco de cumplir con el objetivo de emitir dictamen en un tiempo oportuno. Por ende, creo que con respecto a esta cuestión no le pueden quedar dudas al señor diputado preopinante.

En otro orden de cosas, quisiera efectuar algunos planteos concretos. Así, en lo concerniente a la reforma de la ley 11.683, pienso que se trata de uno de los as-

pectos positivos que incluye el proyecto del Poder Ejecutivo.

Creo que habría que tomar los aspectos positivos referidos a esta presunción que se incorpora, pero deberíamos eliminar la posibilidad —como lo decía el señor diputado Cortese— de que esto se transforme en un blanqueo encubierto o en un jubileo impositivo. En ese sentido, seguramente vamos a introducir las modificaciones necesarias.

Hemos conversado con el señor diputado Figueras, integrante de otra comisión que también analizó el proyecto impositivo desde el punto de vista del sector agropecuario, y coincidimos en el diagnóstico. Si nos pusieramos a estudiar profundamente el sistema impositivo del agro, no me cabe la menor duda de qué tendríamos que modificarlo sustancialmente. No creo que el impuesto al valor agregado en el sector agropecuario sea un avance, tomando en consideración el altísimo nivel de evasión que existe y el hecho de que este gravamen exacerba al sistema.

Por lo dicho, desde el punto de vista de la predisposición para acordar modificaciones y mejorar la iniciativa, creo que tanto el Poder Ejecutivo como los integrantes de la bancada justicialista estamos absolutamente dispuestos a utilizar el tiempo que nos resta de esta semana para alcanzar este objetivo.

Sr. Presidente (Guerrero). — Tiene la palabra el señor diputado Roggero.

Sr. Roggero. — Esta noche, como en otras oportunidades, hemos podido comprobar el trabajo insalubre que implica ser diputado oficialista. También tuvimos la posibilidad de escuchar a diversas entidades e incluso escuchamos cosas cómicas, por ejemplo, que los profesionales de la evasión nos hablaran de los disparates. Hemos escuchado distintas alternativas y propuestas. Nosotros los justicialistas no estamos de acuerdo con algunas de las manifestaciones que se efectuaron. Podría decirse que parte de toda esta culpa proviene de una mala reforma impositiva que inició Frigeri hace un tiempo atrás. Además, hemos tenido funcionarios del Poder Ejecutivo que no cumplieron en su momento con las necesidades y expectativas que esta Cámara y la gente reclamaban.

De cualquier forma, nos encontramos en el medio de la crisis y de las dificultades por todos conocidas, con un nuevo equipo económico que pretende resolver la primera parte de este problema, movido por la urgencia de las necesidades, implementando una verdadera reforma impositiva, sobre la cual habrá que hablar en algún momento de un impuesto único para el sector agropecuario coparticipable y de una simplificación real y efectiva del sistema impositivo.

Mi intención no era hablar del fondo de la cuestión y aumentar los argumentos hacia un lado o volver la historia para atrás, porque como bien señaló el diputado Dalmau los amigos radicales sufrieron lo mismo que nosotros hace unos años. Me refiero al trabajo insalubre de ser diputado oficialista. Por ello, hago moción de que pasemos a un breve cuarto intermedio y nos tomemos un respiro en esta larga jornada, para que este trabajo no sea tan insalubre.

Sr. Presidente (Guerrero).— Existe una propuesta concreta del señor diputado Roggero de pasar a cuarto intermedio.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Se pasa a cuarto intermedio a la hora 22 y 15.

— A la hora 23 y 53:

Sr. Presidente (Matzkin).— Continúa la reunión.

Tiene la palabra el señor diputado Manzano.

Sr. Manzano.— Señor presidente: hemos estado conversando con los integrantes de la bancada radical y de otros partidos políticos y hemos recogido la sugerencia del radicalismo en cuanto a promover la inmediata sanción de la ley que crea la Contraloría General de la Nación dependiente del Congreso Nacional. Esto forma parte de la política del gobierno que tiende a asegurar la mayor transparencia de sus actos.

Del mismo modo, anuncio la decisión de nuestro bloque de promover la inmediata sanción de la ley que instituye la figura del *ombudsman* como mecanismo de control de los reclamos ciudadanos y para trabajar en el trámite de las futuras privatizaciones en forma inmediata al tratamiento que se le dé en el Congreso Nacional, tanto en el marco regulatorio como en lo que hace al procedimiento a seguir para una licitación transparente de las empresas. De esta manera se garantizará la celeridad y la inmediatez del proceso de privatizaciones.

En base a eso, y considerando nuestra premura para obtener la sanción de este paquete impositivo, solicito que el señor presidente ponga a votación el mensaje del Poder Ejecutivo sobre modificaciones impositivas luego de este anuncio que he realizado y que

constituye el marco político para que mañana la Cámara sancione este dictamen que vamos a emitir hoy.

Esto que acabo de narrar es lo que se ha conversado en la reunión celebrada en privado. Creo que es bueno hacerlo público para evitar los trascendidos. Mediante este acuerdo saldrán fortalecidos tanto el gobierno nacional como el Parlamento: el Congreso va a controlar y el gobierno nacional será controlado, garantizándose de esta forma toda la transparencia que haga falta. Pero también tenemos celeridad y capacidad de respuesta ante un problema fiscal que necesita una solución fiscal y no verbal.

Sr. Presidente (Matzkin).— Se va a votar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, de modificación a la actual legislación impositiva (expediente 63-P.E.-90).

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Matzkin).— Queda debida constancia de que la votación precedente ha sido realizada con número suficiente, en tiempo y forma, razón por la cual resulta válida a los efectos reglamentarios.

Sr. Manzano.— Señor presidente: solicito que se autorice a los señores diputados que han participado de la reunión y que no están presentes en este momento a firmar tanto el dictamen de mayoría como el eventual dictamen de minoría.

Sr. Presidente (Matzkin).— Si hubiere asentimiento, se procederá conforme a lo solicitado.

— Asentimiento.

Sr. Presidente (Matzkin).— No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.

— Es la hora 23 y 58.

3

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO FESCHINA

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley por el que se introducen modificaciones en la legislación impositiva

Señor presidente:

Nuevamente debemos debatir y decidir medidas de ajuste, que constituyen una recurrencia fatal para la economía de producción.

Ajustes que se suceden desde hace cinco lustros, sin solución de continuidad y cuya reiteración en lapsos cada vez más breves está afianzando la capacidad productiva del país.

La dejó instalada Martínez de Hoz y hasta ahora no hemos podido emanciparnos de esta especie de Triángulo de Las Bermudas, que privilegia el dinero sobre los bienes, que subordina la producción al esquema financiero.

Hace un año atrás, otro ministro informaba que con el IVA y su generalización posterior cerraban las cuentas. Esta Cámara ayudó al gobierno y aprobó las propuestas.

También un año atrás se nos dijo que con la Ley Pónal Tributaria se terminaba con la evasión. Esta Cámara también aprobó la iniciativa, como lo hizo con las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica.

Un año después, otro ministro debe admitir la existencia de un agujero negro en las cuentas fiscales y que la evasión sigue.

Nueva apretada de cinturón a los argentinos no les queda más cuero en sus cinturones para ajustárselos.

El ministro no ha dicho a cuánto asciende ese agujero negro; sólo ha informado cuánto piensa recaudar.

Sin embargo, algunas cifras dan cuenta de la magnitud del desequilibrio, que para febrero se estima en 270 millones de dólares.

a) Las provincias adeudan a la Nación, al inicio de este año, 9.000 millones de dólares;

b) El Estado nacional adeuda a las provincias petroleras 6.000 millones de dólares por regalías.

c) Hay provincias que si no reciben ayuda del Tesoro nacional no pueden pagar sus sueldos (Santa Cruz, Chubut, Salta, La Rioja, Jujuy, Tucumán, entre otras);

A esto habrá que sumar las cuentas del Estado nacional, de sus empresas y de algunos bancos provinciales.

Todos los sacrificios realizados en 1990 han sido estériles y se reclama más.

El tiempo transcurre, los sacrificios aumentan y la fatiga de la sociedad también se incrementa.

¿Será posible que alguna vez el ministro de Economía, informe al pueblo y a esta Cámara la magnitud de la transferencia de riqueza que comportaron los planes de ajuste desde los particulares a los gobiernos de turno?

¿Será posible saber cuánto dinero se sustrajo del bolsillo del pueblo y fue a parar al bolsillo sin fondo del Estado?

Por de pronto, según el ministro de Economía se piensa recaudar 200 millones de dólares mensuales. Esta medida que estamos tratando representa 2.400 millones por este año 1991.

Los ajustes los pagan los deudores, y los pagan al contado. No pueden diferir el pago, no hay plazos, se los devora la inflación, como ocurrió con la tasa de inflación del 30 % prevista para este mes; el salario real disminuyó en 18% de enero a febrero de este mismo año, es decir, en un solo mes. Y viene golpeado duramente en los últimos años.

SALARIO REAL

(año 1985 = 100)

Año/mes	Salario real
1986	99,3
1987	99,3
1988	88,7
1989	83,7
1990	80,8
1990 julio	85,6
agosto	83,4
septiembre	82,5
octubre	82,1
noviembre	80,9
diciembre	79,8
1991 enero	77,1

Si ahora agregamos los aumentos tarifarios y las devaluaciones, ciertamente los ingresos del trabajador y del

jubilado los colocan en una economía de infrconsumo, y cuando quieren recuperarlo se les cierran las puertas con la sombra de la inflación.

Señor presidente: lo único que ha quedado acreditado con las estadísticas de estos años es que en la Argentina el salario no es fuente de inflación; es variable de ajuste.

Con estas medidas habrá más economía negra. Con el incremento del impuesto al cheque la gente andará con los australes o dólares en el bolsillo; se asesta un duro golpe al mercado de capitales; menos dinero para prestar.

Con el impuesto a los activos caerá nuevamente la inversión.

De crecimiento, nada.

De recesión, todo.

PRODUCCION INDUSTRIAL

(año 1984 = 100)

Año	Indice
1984	90,0
1985	103,4
1987	106,8
1988	101,6
1989	94,0
1990	90,9

La Argentina quiere cambiar su escenario. Desde 1983 los argentinos abrazamos sin retorno la democracia y la libertad; esa convivencia se definió vigorosamente ante los intentos de neutralizarla o eliminarla. Después de cada tentativa golpista la democracia salió fortalecida.

Se bajó definitivamente el telón de la decadencia política. Caminamos en libertad.

Pero la libertad es por esencia y definición creativa, libera las potencias creadoras. Sin embargo, es en el campo de la economía, por obra de las políticas de ajuste, que en nombre de la libertad los argentinos seguimos siendo súbditos y no ciudadanos.

Reclamamos una política económica que nos dé señales de cómo salir del ajuste y no que nos indiquen cómo vamos a entrar en otro. Ha quedado suficientemente probada la esterilidad de esta política, de este modelo que subordina permanentemente los intereses productivos y sociales.

Le deseo suerte al ministro Cavallo, pero lo acompañaremos cuando se abran las puertas de las fábricas. Por estas razones, el bloque del Partido Federal votará negativamente este proyecto impositivo.

4

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ARAMOUNI

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley por el que se introducen modificaciones en la legislación impositiva

Señor presidente:

La política tributaria argentina es fuertemente regresiva como consecuencia de la influencia de sectores de poder en la administración del Estado a través de gobiernos de distinto signo. La mayor parte de la pre-

sión impositiva recae sobre el consumo y los ingresos medios, mientras las ganancias de los grandes capitales y de los grandes patrimonios aportan una parte reducida de los impuestos recaudados, con el agravante de que estas cuasirrentas no repercuten en el nivel de inversión.

Cada vez que algún gobierno intentó modificar parcialmente esta situación proyectando impuestos progre-

tivos como los que gravan las tierras improductivas o escuelas más progresivas que las existentes para los impuestos en vigencia, los sectores interesados realizan ostensibles presiones para defender sus privilegios, poniendo de manifiesto que la determinación de la política fiscal no es un problema técnico sino básicamente político.

La evasión impositiva es, según lo reconocen las autoridades y los organismos internacionales, una de las más elevadas del mundo. También en este punto aparece el carácter político del problema, ya que la mayor parte de la evasión proviene de los grandes contribuyentes, lo que significa que es perfectamente detectable. La evasión hace aún más regresivo un sistema tributario que es en sí mismo regresivo.

Las medidas que se proponen, juntamente con otras anteriores, son insuficientes para reducir la evasión frente a la resistencia de los grandes intereses económicos, que incurren muchas veces en justificaciones de las prácticas evasivas que constituyen apoloías del delito.

La recesión económica y la consecuente reducción del poder adquisitivo de vastos sectores de la población achican la fuente imponible, mientras la inflación provoca una reducción de los ingresos públicos por la fijación de los compromisos de los contribuyentes que tienen capacidad para demorar el pago de sus obligaciones. Por esto mismo la inflación no es sólo un "impuesto" que el Estado recauda en especial de los consumidores, sino también un mecanismo que permite reducir el aporte de los grandes contribuyentes.

La única alternativa es mejorar la recaudación en las grandes unidades económicas y los mayores patrimonios, lo cual requiere un fortalecimiento de la autoridad estatal frente a estos sectores y el sosten de un acuerdo con los que resultarán beneficiados con el cambio de política fiscal. Se requiere también de una reforma que establezca impuestos que promuevan una mejor distribución de la renta, estimule la reinversión productiva de las utilidades empresarias, capture las rentas naturales y monopolísticas y grave las tierras improductivas y la herencia.

El actual sistema tributario carece de los elementos básicos que conforman un modelo impositivo. Realmente es la antítesis de él. Sus causas son:

- Reformas permanentes.
- Emergencias recaudatorias circunstanciales.
- Maraña de normas.
- Imposibilidad de presupuestar racionalmente las cargas fiscales por parte de los contribuyentes.
- Falta de apoyo informativo del organismo recaudador.
- Inestabilidad jurídica.
- Moratorias continuas.

Todo ello va delineando una patología tributaria que lleva a la evasión, el fraude, la elusión y otras formas más sofisticadas de la no tributación.

No hay justicia fiscal desde la perspectiva ética y social

Las reformas que se han encunado en los últimos años perfilaron y perfilan un auténtico "manicomio jurídico-

tributario", con repercusiones en la economía en general en un entorno *bis in idem*, promoviendo la doble tributación (IVA-ingresos brutos-tasas municipales de seguridad e higiene) y la invasión de competencias tributarias.

Ante las privatizaciones se decía que el gasto público bajaría. No obstante, se necesita más recaudación con incremento de tasas impositivas. ¿Qué hemos hecho con el patrimonio público de la comunidad? ¿Es para pagar mejores salarios a los agentes públicos, asignarlo a la educación, a la revolución improductiva?

Pero no nos quedamos en la crítica

Estamos elaborando un esquema tributario en base a los principios fundamentales de la tributación:

- Simplicidad.
- Capacidad contributiva.
- Corresponsabilidad de las entidades sociales del sistema económico.

Pero ¿qué proponemos hoy?

En principio, pretendemos derogar algunos impuestos que hoy se siguen emparejando: proponemos dejar sin efecto el impuesto al valor agregado, el de activos y parcialmente, por ahora, ganancias para la actividad agropecuaria.

Todos los argumentos mencionados anteriormente sirven para ello y además, el primero ya no cumple la función para la que fue creado, dificultando notablemente la administración y control tributarios y las liquidaciones respectivas. El segundo es altamente regresivo para las industrias y empresas que pretenden un cambio tecnológico con cierto grado de endeudamiento.

Por ello elevamos la recreación de tres nuevos tributos:

1. Impuesto a las transacciones de bienes, locaciones y servicios (impuesto en cascada sobre contribuyentes grandes y medianos).
2. Impuesto al patrimonio neto empresarial e individual (con tasas progresivas).
3. Impuesto a la renta potencial de la tierra (único impuesto agropecuario). Este impuesto se extendería a todas las actividades en función del patrimonio fiscal declarado.

El primero de ellos funcionaría como un tributo a las ventas con una tasa inferior al valor agregado y para contribuyentes de envergadura. Creemos que es de fácil recaudación y control, pues opera sobre la facturación de cada venta sin el grado de complejidad del actual crédito fiscal del IVA.

El segundo de ellos grava el patrimonio neto fiscal incluyendo la deducción de las deudas que en la actualidad no se consideran en el impuesto a los activos. Las tasas son progresivas por la mayor capacidad contributiva que se tiene en los grandes capitales productivos o de inversión.

El tercero intenta revertir la improductividad y la ociosidad de las grandes, medianas y pequeñas extensiones agropecuarias. En una próxima etapa se aplicaría el impuesto a la renta potencial a las demás activi-

dades, para terminar con la especulación. Es decir que todos pagarían sobre la base de la exteriorización patrimonial y el rendimiento que debería dar ésta.

Ley Penal Tributaria

Las dificultades vinculadas al ámbito de aplicación de la ley son las que se refieren al tiempo. En efecto, la aplicación de la Ley Penal Tributaria a las declaraciones juradas presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma, pero sobre hechos imposables anteriores generan un cuadro de incertidumbre no resuelto por la ley y apuntada por la doctrina en general. En estos casos una mala interpretación podría vulnerar, en principio, la regla constitucional del artículo 18, que proscribire las leyes *ex post facto*. Por ello, es evidente que la raíz de la dificultad está en la generalizada confusión entre hecho imponible y hecho punible, a lo que se une una distinta consideración temporal a los efectos de la aplicación de la ley y de las cláusulas constitucionales.

Modificación de la ley 23.771

Artículo (...) La aplicación de la Ley Penal Tributaria será a partir de los hechos imposables que se produzcan con posterioridad a su entrada en vigencia cuando las exteriorizaciones puedan verificarse con sustento documental. En caso contrario rige a partir del primer ejercicio comercial o fiscal posterior a la sanción de la misma.

Tratamiento en particular

Título VII: "Modificación a la Ley de Procedimiento Tributario (ley 11.683)".

El artículo 19 punto 2 del proyecto propugna la modificación del artículo 44 de la ley 11.683, referido a la sanción de clausura.

Las principales objeciones son:

a) No se corrigen anomalías del actual texto, entre las que pueden señalarse:

a.1: La clausura puede aplicarse "sin perjuicio de la multa prevista en el artículo 43". Sin embargo, los procedimientos para ambas sanciones son diferentes, no pueden acumularse. La multa debería aplicarse, entonces, después de la clausura, entrando en colisión con el principio *nos bis in idem*;

a.2: La redacción menciona a "los establecimientos..." que incurran..." siendo que los responsables son sujetos de derecho y no cosas. Esto genera problemas en caso de transferencias de fondos de comercio y similares, donde la sanción perseguiría a la cosa aun cuando ésta cambie de titular;

a.3: La redacción del inciso 1 es ambigua: ¿hasta con la no emisión de una factura o deben ser varias las operaciones no facturadas? ¿Es suficiente la inobservancia de cualquier requisito exigido por la DGI (v.gr. la falta de la leyenda "a consumidor final" en el ticket de un bar) o debe poner en peligro al bien jurídico tutelado, consistente en la facultad de fiscalización de la DGI?

a.4: El primer artículo agregado a continuación del 44 no se modifica pese a las lagunas procesales que incluye: ¿Es necesaria la presencia de un profesional a la audiencia en sede administrativa?; en caso afirmativo, ¿debe ser abogado o puede ser contador, como en el tribunal fiscal? ¿Se puede abrir a prueba el procedimiento, y en ese caso, qué pasa con los diez días que fija como plazo máximo? ¿Se aplica supletoriamente —en sede administrativa— la Ley de Procedimientos Administrativos o el Código de Procedimientos en Materia Penal? ¿A la audiencia, debe concurrir el imputado personalmente o lo puede hacer un autorizado?, etcétera.

a.5: Las distintas infracciones se consumarían en el momento de la inspección, sin plazo ni intimación previa y sin que resulte indispensable la presencia del titular del establecimiento, lo que puede dar lugar a errores, arbitrariedades e injusticias.

La práctica ha demostrado que la sanción de clausura recae principalmente sobre comercios minoristas, especialmente sobre los de reciente instalación y con deficiente o nulo asesoramiento profesional.

El proyecto ha omitido considerar tanto las objeciones doctrinarias cuanto la jurisprudencia de varios centenares de casos producidos durante 1990 por la justicia en lo penal económico de la Capital Federal y por la federal en el interior, incluyendo una inconstitucionalidad dictada en Neuquén (actualmente apelada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

b) Aumento de la escala represiva: el texto actual determina una sanción fija de 3 días, aumentable un día por cada reincidencia hasta un máximo de 10. La principal objeción doctrinaria y jurisprudencial es que la pena resulta excesiva en la mayoría de los casos leves. El texto del mensaje que acompaña al proyecto dice, en cambio, que "adolece de una excesiva lenidad que resta capacidad preventiva y disuasiva a la sanción", lo que constituye una afirmación gratuita y un total desconocimiento de los hechos. Además de que la clausura implica un daño económico por pérdida de ventas y de clientela, y un daño moral por la repercusión social ante la comunidad que desconoce su motivo, y es propensa a imaginar otros más graves (alimentos en mal estado, contrabando, drogas, juegos, etcétera), cabe tener presente que en la inmensa mayoría de los casos el infractor soluciona la omisión en el lapso que media entre la inspección y la audiencia. Por ello lo razonable sería reducir el mínimo a un día.

En cuanto al máximo de 30 días librado a la discrecionalidad del juez administrativo puede constituirse en una amenaza desproporcionada que condenaría a la quiebra o a la desaparición al establecimiento que deberá afrontar gastos fijos (alquiler, luz, salarios, ingresos brutos, etcétera), y pago a proveedores sin el correspondiente ingreso, llegando a afectar la propia subsistencia del comerciante.

Tratándose de infracciones formales (que no requieren de la existencia de perjuicio patrimonial) lo ideal sería unificar el procedimiento de los artículos 43 (en la actualidad sancionada con multa de uno a diez millones de australes aproximadamente) y 44 (con sanción de clausura de 1 a 5 días, ampliable a diez días

en caso de reincidencia). Cabe recordar que si hay perjuicio fiscal por obrar doloso del agente, los mismos hechos caen dentro del ámbito de la Ley Penal Tributaria.

Conforme la moderna doctrina penal no existe ninguna relación comprobable entre la magnitud de la sanción y el índice de criminalidad, lo que torna anacrónico el supuesto de "disuasión" mencionado en el mensaje.

c) Se ha eliminado del artículo 44 el supuesto de incumplimiento a requerimientos como infracción sancionable con la pena de clausura. Ello constituye una contradicción, toda vez que, pese a lo sostenido en el mensaje, se trata de un caso no incluido en la Ley Penal Tributaria, a la vez que se mantiene la clausura por falta de inscripción, cuando la hipótesis está prevista en el artículo 5º de la ley 23.771. El incumplimiento reiterado a los requerimientos constituye una "resistencia pasiva a la fiscalización", tanto más grave cuanto se impide a la dirección las funciones propias de fiscalización de un modo más directo que la simple omisión de inscripciones en un *ticket*. Por otra parte, así como la experiencia indica que la clausura recae mayormente sobre pequeños contribuyentes, la resistencia a la fiscalización es propia de grandes responsables que lo utilizan como forma de ganar tiempo para "regularizar" sus registraciones (los requerimientos intiman por un plazo no inferior a diez días hábiles, por lo que, mediante ciertas maniobras —pedidos de prórroga, cumplimiento parcial, etcétera—, es posible ganar varios meses donde es posible blanquear todo).

d) Aumento de la pena de arresto en caso de quebrantamiento de la clausura: constituye un ejemplo más de desconocimiento de los hechos y de la medievallización de las penas: en todo el año 1990, con centenares de clausuras efectivizadas, no se ha registrado un solo caso de quebrantamiento de clausura.

e) El artículo agregado a continuación del 78 (punto 4 del proyecto) introduce uno de los puntos más aberrantes de la reforma: la concesión del recurso por ante la justicia "otorgado solo en el efecto devolutivo",

lo que equivale a decir que la dirección efectivizará la clausura mientras ésta se encuentre apelada. Si se tiene en cuenta que la justicia demora un promedio de 30 días en expedirse (debe convocar a una audiencia y notificarla, antes de dictar sentencia) y que algo más de la mitad de las clausuras aplicadas hasta el presente fueron revocadas, nos encontraríamos de hecho frente a la aplicación de una sanción de indubitable naturaleza penal efectivizada por un juez administrativo revisable solamente cuando la cuestión ha devenido abstracta. En la práctica esto desencadenará un aluvión de acciones de amparo y planteos de inconstitucionalidad, cuyo efecto será justamente el contrario del buscado: ninguna clausura se efectivizará, a menos que el sancionado carezca de medios para asesorarse debidamente. En resumen, este punto conviene dejarlo como está, (una eventual reforma debería precisar también el trámite a seguir en la instancia judicial, puesto que el procedimiento de apelación actualmente vigente —sobre régimen de faltas policiales y municipales les resulta totalmente insuficiente y anacrónico).

Nota: A pesar de que el artículo 44 en su actual redacción lleva varios años de vigencia. (El anterior prevía el arresto, declarado inconstitucional por varios jueces) el Poder Ejecutivo nunca modificó el decreto 1.397/79 reglamentario de la ley 11.683 en la parte pertinente, lo que hubiera redundado en una mayor eficacia y justicia en la aplicación de la sanción.

f) Presunciones de pleno derecho (art. 18, punto 7 del proyecto): Las presunciones *iure et de jure* son un recurso extremo del legislador para aquellas situaciones en las que la producción de la prueba resulta imposible, inútil, excesivamente costosa, vejatoria, etcétera. De lo contrario chocan con la garantía constitucional del debido proceso y limitan la defensa en juicio. Pero las presunciones establecidas por el proyecto resultan aún más curiosas, puesto que no admiten prueba en contrario ... a favor del contribuyente, pero sí en su contra (!?). (ver artículo ... II último párrafo y artículo ... IV primer párrafo, última parte).

5

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GUERRERO

Opinión del señor diputado acerca del impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas

Señor presidente:

Dentro de este controvertido paquete de reformas tributarias se ha creado un nuevo hecho imponible, como es el caso de las transferencias de inmuebles. Se quiere con este nuevo impuesto aumentar las bases contributivas y sumar este sector de la vida económica al esfuerzo que la totalidad de los argentinos vienen realizando en el marco de esta emergencia nacional. Se puede decir que este impuesto que se está creando tiene como antecedente inmediato el fencido impuesto "a ganancias eventuales", que intentaba gravar las operaciones inmobiliarias, pero era obvio que no lo hacía en forma directa como lo establece esta nueva norma.

La pregunta surge de inmediato: cuánto se estima recaudar con este nuevo impuesto? Se han realizado las posibles proyecciones y se estima recaudar la suma de 14 millones de dólares anuales, con 1,16 millones mensuales de la misma moneda. Si consideramos que las estimaciones sobre la recaudación total de estos nuevos impuestos son entre 95 y 135 millones de dólares, se puede afirmar que el aporte de este sector va a ser valorado y el Estado va a poder fácilmente controlar el cobro de este impuesto.

Es de destacar que esta norma tiende a preservar los casos de ventas de viviendas únicas y/o terrenos, esto último considerado por la Comisión, en su artículo 14, excluyéndolo del gravamen, porque en realidad lo que se busca es que ingresen el tributo los sectores que realmente comercializan con la compraventa de in-

muebles. También existen otros inmuebles excluidos de este impuesto, como los pertenecientes a miembros de misiones diplomáticas y consulares extranjeras.

Señor presidente: con el 15 por mil que se establece en esta contribución estamos exigiendo un esfuerzo más. No voy a repetir lo que ya se ha dicho; creo que se están agotando los argumentos y no son precisamente

argumentos los que la gran mayoría necesita, sino que lo que espera de todos nosotros son soluciones que, si bien no están dadas por este camino, el de la presión tributaria, tampoco se encontrarán engrosando las columnas de desocupados. El Estado debe y está obligado a buscar soluciones, pero no las podrá encontrar sin recursos y sin convocar al esfuerzo de los que más tienen.